



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

**CARRERA DE DERECHO**

**“Delitos Ambientales dentro de la codificación Penal del  
Ecuador desde la Constitución del 2008”**

**Tesis previa a la obtención del Título de:**  
**ABOGADA.**

**AUTORA: Castañeda Gutiérrez Grace Elizabeth**  
**E-mail: [grace.emiliac@hotmail.com](mailto:grace.emiliac@hotmail.com)**

**TUTOR: Dr. Tinajero Valencia Renán Aníbal**

**Agosto, 2014**  
**Quito**

## AGRADECIMIENTOS

*La presente Tesis es un esfuerzo en el cual, han participado varias personas leyendo, opinando, teniendo paciencia y animándome en los momentos de crisis en los que casi renuncio en perseguir mi sueño.*

*Muchas gracias a todas aquellas personas que siempre estuvieron conmigo, quienes sin esperar nada a cambio contribuyeron para la terminación de este estudio, y a quienes por respeto y temor a olvidarme de alguna de ellas no especificare.*

*En especial quisiera agradecer al Dr. Renán Tinajero, por su acertada dirección y apoyo incondicional en el desarrollo y aprobación de esta Tesis.*

*A la Institución que me formo mi querida Universidad Central del Ecuador.*

*Grace Castañeda.*

## DEDICATORIA

*Esta Tesis la dedico a Dios, por llenarme de bendiciones y proveerme de entendimiento y conocimiento, ahora plasmado en estas páginas.*

*A mis padres, a mi hija y al amor de mi vida, a mi familia, así como a todos mis amigos que incansablemente con sus muestras de afecto y apoyo incondicional me impulsaron para realizar esta Tesis llena no solo de conceptos, definiciones e ideas, sino también de esfuerzo y constancia.*

*Grace Castañeda*

## DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 09 de agosto del 2014

Yo, CASTAÑEDA GUTIÉRREZ GRACE ELIZABETH, autora de la investigación, con cédula de ciudadanía N° 171771206-9 , libre y voluntariamente DECLARO; que el trabajo de grado titulado: “DELITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA CODIFICACIÓN PENAL DEL ECUADOR DESDE LA CONSTITUCION DEL 2008”; Es de mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único como manda los principios de la investigación científica de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,



Castañeda Gutiérrez Grace Elizabeth

C.C. 171771206-9

E-mail: [grace.emiliac@hotmail.com](mailto:grace.emiliac@hotmail.com)

## AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, CASTAÑEDA GUTIÉRREZ GRACE ELIZABETH, en calidad de autora de la tesis titulada: “DELITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA CODIFICACIÓN PENAL DEL ECUADOR DESDE LA CONSTITUCION DEL 2008”; por medio de la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito D.M., a 09 de agosto de 2014



FIRMA\_\_\_\_\_

CC.: 171771206-9

## APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS

Quito 7 de agosto de 2014

Señora Doctora

**Yolanda Yupangui Carrillo**

DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y  
SOCIALES  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

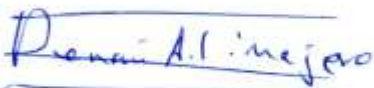
De mi consideración:

Expreso a su Autoridad un atento saludo, deseándole al propio tiempo éxitos en el desempeño de sus delicadas e importantes funciones.

En mi calidad de TUTOR del trabajo de investigación titulado: "DELITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA CODIFICACIÓN PENAL DEL ECUADOR DESDE LA CONSTITUCIÓN DEL 2008", realizado por la postulante señorita Grace Elizabeth Castañeda Gutiérrez, portadora de la cédula de ciudadanía 171771206-9, me permito informarle que la misma reúne las condiciones metodológicas y técnico jurídicas establecidas por la facultad de jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, por lo que procedo a APROBAR la misma, a fin de habilitar para continuar con el proceso de graduación.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines académicos, legales y administrativos pertinentes, reiterándole mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



**Dr. Renán Aníbal Tinajero Valencia**  
cc. 1707211825  
**DIRECTOR- TUTOR DE TESIS**



## **APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO**

Los miembros del Tribunal de Grado aprueban el trabajo de investigación titulado: “**DELITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA CODIFICACIÓN PENAL DEL ECUADOR DESDE LA CONSTITUCION DEL 2008**” de acuerdo con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador para títulos de pregrado.

Febrero 2014

Para constancia firman:

**TRIBUNAL DE GRADO**

F/.....

**N**

F.....

**N**

F.....

**N**

# INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS .....	ii
DEDICATORIA .....	iii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD .....	iv
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	v
APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS .....	vi
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO .....	vii
INDICE GENERAL.....	viii
INDICE DE GRÁFICOS .....	xi
RESUMEN EJECUTIVO .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTRODUCCIÓN .....	1
 CAPITULO I.....	 3
1. ORIGEN DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DEL MEDIO AMBIENTE .....	3
1.1. Fuentes del Derecho Ambiental .....	4
1.1.1 Sistema de Fuentes del Derecho Ambiental.....	5
1.2. Definiciones básicas .....	5
1.2.1 Delito Ambiental.....	5
1.2.1.1. Elementos constitutivos del delito ambiental .....	8
1.2.2. Derecho Penal Ambiental .....	8
1.2.3. La tipificación penal en blanco .....	10
1.2.3.1. Normativa Extrapenal.....	13
1.2.3.2. La Tipicidad .....	13
1.2.3.3. El Daño.....	13
 CAPITULO II .....	 14
2. PRINCIPIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL AMBIENTAL .....	14
2.1. Principio de Conservación .....	14
2.1.1. Protección del Patrimonio Natural .....	14
2.1.2. Áreas Naturales Protegidas e Interés Público.....	15
2.1.3. Derecho de las Personas y de la Población a Vivir en un Ambiente Ecológicamente Equilibrado .....	16
2.1.4. Derechos de la Naturaleza.....	17



2.1.5. Principio Contaminador-Pagador .....	17
CAPITULO III .....	18
3. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL .....	18
3.1. Legitimación del Derecho Penal Ambiental .....	23
3.2. Aplicación de la Ley Penal en materia Ambiental .....	23
3.3. Clasificación de los Delitos Medioambientales Tipificados en el Código Penal Ecuatoriano .....	26
3.4. Autoridades y Competencias Ambientales.....	27
3.4.1. Cuadro de competencias ambientales (Cardenas, págs. 28,29).....	28
3.5. Sujetos que pueden interponer Acciones Legales .....	30
3.6. Acción de Protección .....	32
CAPITULO IV .....	37
4. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO-ADMINISTRATIVO.....	37
4.1. Acciones Administrativas .....	38
4.2. Principio de intervención mínima .....	41
4.3. Carácter accesorio o secundario del derecho penal .....	42
4.4. El principio de NON BIS IN IDEM.....	45
CAPITULO V .....	46
5. INICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PROCEDIMIENTO .....	46
5.1. Presentación de la Denuncia .....	47
5.2. La Indagación Previa.....	50
5.3. Procedimiento .....	53
5.3.1. La Instrucción Fiscal .....	53
5.3.2. La Etapa Intermedia .....	60
5.3.3. El Juicio.....	63
5.3.3.1. Sustanciación ante el Presidente del Tribunal Penal .....	64
5.3.3.2. Sustanciación ante el Tribunal Penal.....	64
5.3.3.3. Sentencia .....	65
5.4. La Etapa de Impugnación.....	83
5.4.1. Marco legal código de procedimiento penal del recurso de hecho .....	83
5.5. Mapa conceptual procedimiento penal.....	92
5.6. Medidas Cautelares .....	93
5.7. Materia contencioso administrativa.....	94
5.8. La demanda .....	96

5.9. La Prueba .....	98
5.10. Sentencia .....	98
5.11. Marco legal ley de la jurisdiccion contencioso administrativa .....	99
5.12. Mapa conceptual contencioso administrativo .....	101
5.13. Jurisprudencia .....	102
 CAPÍTULO VI.....	 106
6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .....	106
6.1. Cuadro de recursos humanos.....	106
6.2. Cuestionario .....	107
6.3. Cuadro estadístico de la aplicación de la encuesta.....	109
6.4. Gráficos de la Encuesta.....	110
CONCLUSIONES .....	120
RECOMENDACIONES .....	122
 CAPITULO VII .....	 124
7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	124
BIBLIOGRAFIA.....	131

**INDICE DE GRÁFICOS**

Gráfico 1..... 110

Gráfico 2..... 111

Gráfico 3 ..... 112

Gráfico 4..... 113

Gráfico 5..... 114

Gráfico 6..... 115

Gráfico 7..... 116

Gráfico 8..... 117

Gráfico 9..... 118

Gráfico 10..... 119

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **“DELITOS AMBIENTALES DENTRO DE LA CODIFICACIÓN PENAL DEL ECUADOR DESDE LA CONSTITUCION DEL 2008”;**

El sistema jurídico ecuatoriano procura la defensa de los derechos ambientales a partir de una concepción patrimonialista; razón por la cual los instrumentos normativos han sido creados para proteger por separado cada uno de los elementos de la naturaleza, hecho que dificulta la reparación eficiente de los derechos vulnerados por daños ambientales. Este estudio busca realizar un análisis referente al amparo ambiental ecuatoriano para demostrar que tan efectivas son las normas de protección ambientales y las sanciones administrativas y penales cuando se comete un delito ambiental. Con este fin, el primer capítulo desarrolla definiciones básicas que debemos conocer lo que nos ayudara a una mejor comprensión de nuestro tema de estudio, en el segundo capítulo, analiza los principios constitucionales, del Derecho Penal Ambiental, el tercer capítulo es un complemento del anterior ya que nos da a conocer la protección jurídica de los derechos ambientales dentro del marco constitucional, el cuarto capítulo nos muestra la íntima relación que existe entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo dentro del campo Ambiental, el quinto capítulo nos presenta el proceso de la acción penal y administrativa a seguir cuando se inicia una Litis por el cometimiento de un delito ambiental. Las conclusiones que se plantean más que una respuesta a los problemas concretos, podrían ser asumidas como nuevos elementos del contenido esencial para futuros debates que contribuyan a la consumación de instrumentos jurídicos institucionales para la reparación de daños ambientales. En el sexto capítulo se presenta el desarrollo de la propuesta de nuestro estudio.

**PALABRAS CLAVE:** Delito, Ambiente, Penal, Constitución

## ABSTRACT

### ABSTRACT

#### ENVIRONMENTAL OFFENSES IN THE PENAL LEGISLATION OF ECUADOR FROM CONSTITUTION 2008

The Ecuadorian juridical system is intended to defend environmental rights from the patrimony setting. Regulatory instruments have been created to protect nature elements in separate, which renders difficult repairing disregarded rights related to environmental damages. The current study analyzes the Ecuadorian environmental appeal to demonstrate effectiveness of environmental protection regulations and administrative and penal sanctions, when an environmental offense has been perpetrated. The first chapter provides basic definitions we ought to know, which shall help us better understand our subject theme. The second chapter analyzes constitutional principles of the Environmental Penal Right. The third chapter is a complement of the foregoing, because juridical protection for environmental rights is provided in the constitutional frame. The fourth chapter has a close relation to Penal Law and the Administrative Law in the environmental field. The fifth chapter shows the process for the penal and administrative process to be followed when a lawsuit is opened for the perpetration of an environmental offense. Conclusions posed, more than concrete troubles, could be assumed as new elements of the essential content for future debates that contribute to the execution of institutional juridical instruments to repair environmental damages. The sixth chapter provides the development of the proposal contained in our study.

**KEYWORDS:** Offense, Environment, Penal, Constitution

*I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.*

  
Ernesto Andino G.  
Translator

**Ernesto Andino**  
SWORN TRANSLATOR  
English - Spanish - English  
ID: 1703852317001

## INTRODUCCIÓN

Es fundamental, para entender la importancia del tema recordar que el hombre vive en un medio ambiente natural, que es su base de vida y desarrollo, y que los componentes esenciales del mismo son: el agua, el aire, la tierra y los seres vivos, los cuales se hallan en estrecha relación, proporcionando a la Biósfera el equilibrio necesario para que las distintas formas de vida se mantengan y desarrollen.

La alteración de tales componentes perjudica dicho equilibrio ecológico y puede ocasionar graves daños a cualquier forma de vida y deteriorar nuestra calidad de vida.

No pasa un solo día sin que escuchemos por todos los medios expresiones relativas al ambiente, a su deterioro y destrucción; a la contaminación del aire que respiramos, al envenenamiento de las aguas de los ríos, lagos y mares; a la polución, a la creciente acumulación de basuras y desechos sean estos tóxicos o no; a la destrucción de la capa de ozono y como consecuencia la alteración de la temperatura del planeta, afectando climas y cosechas; a la tala indiscriminada de árboles y a tantas varias acciones y resultados que parecen dar la razón a quienes con fundada alarma sostienen que irracionalmente estamos destruyendo la tierra.

El Derecho siendo sensible a una nueva demanda social, está dando paulatinamente respuestas jurídicas a las interrogantes ambientales. De entre todas ellas quizás la de mayor relevancia teórica es la que concibe al Derecho Ambiental y al Medio Ambiente como un derecho humano individual y colectivo que se convierte en el parámetro clave de nuestro desarrollo; por eso, que un sistema social se valora en razón de su reconocimiento y aplicación práctica.

El surgimiento del Derecho del Ambiente dentro de la legislación ecuatoriana y en las legislaciones del resto de países del mundo, es relativamente nuevo, y nace de las constantes amenazas que sufre el medio ambiente y de la toma de conciencia por parte de la humanidad de una mejor protección a nuestras condiciones de vida.

De acuerdo con algunas posiciones, el temor por el medio ambiente ha terminado por hacer prevalecer la preocupación de poner en vigencia normas tanto administrativas como penales que impidan su deterioro y menoscabo, y ello ha tomado fuerza o importancia desde hace treinta

años a esta parte, en razón del vertiginoso avance del desarrollo industrial y tecnológico que lo ha afectado tan grave, y tan grandemente, y de modo irremediable, en muchos casos. Pero, el tema se presta a polémicas y enfrentamientos, a veces violentos, entre aquellos que defienden de manera radical el ambiente y los que, sometidos incondicionalmente a los principios fundamentales de la Economía, sostienen que el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos no tiene ni repara en límites de ninguna especie.

Por lo que la función del Derecho es la de encontrar los criterios que permitan el equilibrio para crear una normativa que fije los límites y que ellos sean respetados de manera que su violación contenga las sanciones tanto civiles como penales.

Cuando se trata de la defensa de derechos individuales se considera que el sujeto que ha sido afectado posee un interés legítimo para exigir la defensa de aquel derecho, pero en cuanto hablamos de derechos colectivos surgen problemas que tienen que ver con la legitimación de estos derechos, por lo que para la creación de toda norma legal debe tenerse en cuenta que esta no se contraponga a la Constitución; es decir, que no vaya en contra de sus preceptos y mandatos, y de su superioridad.

## **CAPITULO I**

### **1. ORIGEN DE LA PROTECCIÓN JURIDICA DEL MEDIO AMBIENTE**

El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica en formación, la problemática ambiental no es fruto de los caprichos de la naturaleza, sino es un efecto de las actividades del hombre. Durante siglos, el hombre ha luchado por la dominación de la naturaleza y el medio físico, mediante acciones e innovaciones tecnológicas, que le han dado mayores posibilidades de utilizarlo en su provecho, proceso que se aceleró en el siglo XVIII con la Revolución Industrial y a partir de está el progreso tecnológico y económico-social ha sido aún más rápido, sin embargo a penas en los años 60 y 70 del siglo XX empieza a producirse la toma de conciencia social sobre el problema ambiental.

En el Derecho Ambiental no es fácil determinar a simple vista el bien jurídico a proteger por lo que es necesario establecer que el principal bien jurídico a proteger en el dentro del Derecho Ambiental es el propio ambiente, del cual los seres humanos formamos parte.

El desarrollo ha permitido, en general a un número cada vez mayor de hombres y mujeres mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, estas mejoras han venido acompañadas de consecuencias no queridas o no previstas; como son, la afectación de recursos naturales, aparición de fenómenos generados por la contaminación de la tierra, del agua, del aire, es decir daños ocasionados que afectan directamente a la vida.

Esto ha producido y ha dado paso a la toma de conciencia del hombre sobre su entorno llevándolo a la creación de principios de convivencia que se los trasladado al campo jurídico, al sistema administrativo de justicia y se los ha adaptado a las normas legales penales.

Es así que surgen corrientes en defensa del ambiente en las que la idea primordial es de regular, proteger, conservar y preservar los recursos naturales a través de normas jurídicas que prevengan la contaminación, deforestación, incendios, ruidos, derrame de sustancias, tráfico de



flora y fauna, etc., lo que provoca graves daños al ecosistema razón por lo cual se los cataloga como delitos ambientales. Por tanto el Derecho Ambiental es un conjunto de normas jurídicas de contenido Penal tendientes a la protección del entorno en el que el hombre vive y en el cual se relaciona.

El Derecho Penal Ambiental al tutelar los recursos naturales busca más que preservar el orden social ser un verdadero derecho de supervivencia, cuyo objeto es preservar y hacer respetar el derecho a la calidad de vida, representar un instrumento idóneo para establecer sanciones que no sean únicamente administrativas sino también penales por lo que visualiza la creación de un ordenamiento jurídico que corrija las conductas que se consideran infractoras o dañinas, a través de una Ley Orgánica Ambiental, ya que se considera que la Ley de Gestión Ambiental no contiene medidas suficientes para proteger el bien tutelado que es el medio ambiente y accesoriamamente se desprende lo que es la vida humana.

### **1.1. Fuentes del Derecho Ambiental**

Según (Brañes), en los ordenamientos jurídicos así constituidos históricamente, las fuentes del Derecho Ambiental están presididas, como se ha dicho:

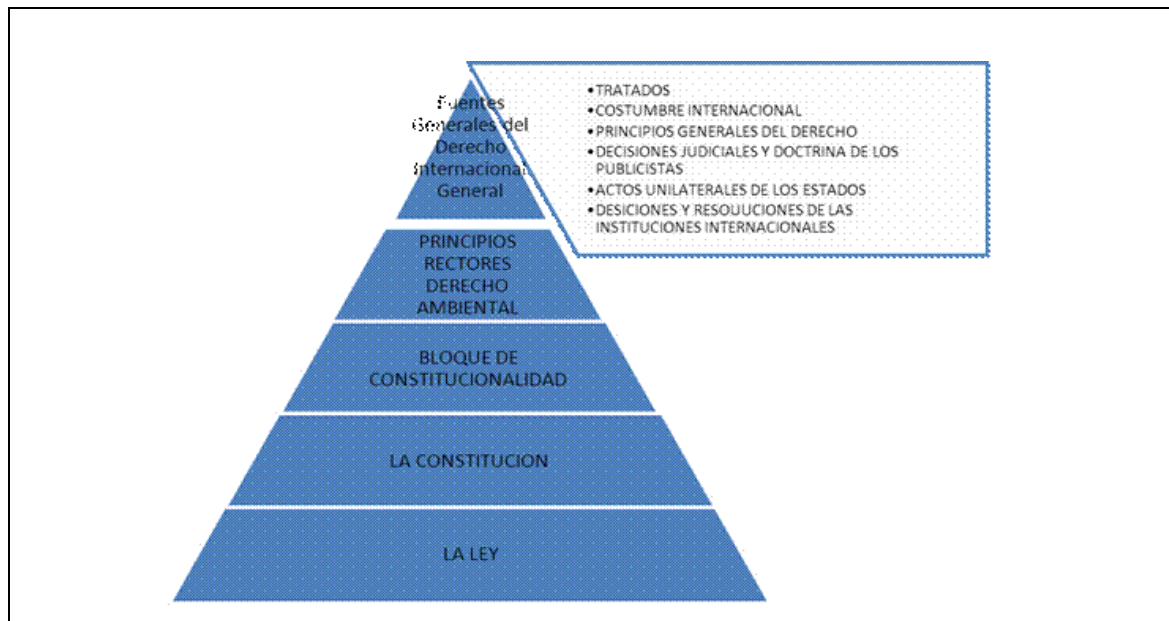
- a) Por la Constitución Política.
- b) Por la legislación Ambiental moderna, es decir, por aquella que se refiere al conjunto de los problemas Ambientales.
- c) Por las normas de relevancia o interés Ambiental contenidas en una legislación que versa sobre otros temas, como el Código Civil y su legislación conexa, que a diferencia de la legislación sobre recursos naturales renovables, no tienen un sentido protector del ambiente, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y en fin una serie de leyes de la cual destaca la legislación económica.
- d) La jurisprudencia y la costumbre en los pocos casos en que dentro de América Latina son fuentes de Derecho.

También deben considerarse como fuentes del Derecho Ambiental las disposiciones de todo orden que se refieran a la administración pública del ambiente, sea que se trate de organismos públicos creados exclusivamente con ese fin o no.

Hemos considerado exclusivamente fuentes del Derecho Ambiental las que provienen del Derecho interno, pero, también el Derecho Internacional debe ser considerado como fuente del Derecho Ambiental.

Frente al rigor normativo constitucionalidad y el valor jurídico otorgado a lo que está en su nivel, surge entonces una ampliación del criterio de validez kelseniano, sintetizado en su pirámide normativa a nivel internacional un sistema de fuentes propuesto para la interpretación del derecho ambiental, en el que se observa exactamente el lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico los principios rectores del derecho ambiental.

### 1.1.1 Sistema de Fuentes del Derecho Ambiental



## 1.2. Definiciones básicas

### 1.2.1 Delito Ambiental

Un tema de actualidad que ha cobrado gran importancia, es la regulación legal de las conductas que afectan el medio ambiente, ya sea flora, fauna, ríos, mares, cielo, suelo, subsuelo, etc.

El Poder Legislativo, así como diversas organizaciones no gubernamentales, han motivado una serie de iniciativas de ley que tienen como objetivo se proteja el medio ambiente que nos rodea; por tal motivo, es necesario que las conductas que afectan gravemente a nuestro entorno, sean tipificadas por la ley penal como delitos, y sean sancionadas con multas e incluso, con severas penas de prisión, por ejemplo:

El **artículo (6).... del** ( Código Penal, Registro Oficial Suplemento 147 de 22-ene-1971, Última modificación: 15-feb-2012, (Vigente), pág. 9), en el Capítulo *“De los delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles”*, establece:

*“Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, el que de manera fraudulenta destruyere la infraestructura hidrocarburífera y/o causare la destrucción o deterioro del medio ambiente, sin perjuicio de que el causante remedie los daños ambientales y la recuperación de los bienes al Estado.”*

La tipificación de los Delitos Ambientales constituye uno de los avances más significativos de la sociedad ecuatoriana, esta normativización se refiere al derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a garantizar la preservación de la naturaleza, administración y manejo de recursos renovables o no, de los desechos, sustancias dañinas, químicos, protección de la flora, fauna, potencial genético y la emisión de informes técnicos con contenidos adulterados; Art.14 y 66 numeral 27 Constitución de la República del Ecuador.

El artículo **14.-** (Constitución de la República del Ecuador, 2008) establece:

*“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.*

*Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”<sup>2</sup>*

El artículo **66.-** Constitución de la República del Ecuador 2008 dispone *“Se reconoce y garantizará a las personas: (...)*

27. *El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” (...) (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 13)*

El Delito Ambiental es una actividad criminal, para la perspectiva pragmática, un Delito contra el medio ambiente es una infracción contra la legislación medio ambiental, cuya sanción judicial está clasificada en la categoría de Crimen; en esta lógica, se debería hablar de contravención medioambiental o de infracción medioambiental.

Según el autor peruano (Diethell Columbus), en su ensayo sobre la Naturaleza Jurídica de los Delitos Ambientales, establece que *el delito ambiental es un delito social, que afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre espacio.*

Para el tratadista Peruano (Diethell Columbus), *El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, y pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre.*

Postiglione, citado por (Jaquenod de Zsogon), en su obra Tratado de Derecho Ambiental, define al delito ambiental. *Hecho antijurídico previsto por el derecho positivo, lesivo del derecho al ambiente, o sea al aspecto esencial de la persona humana, individual y social, en relación vital con la integridad y el equilibrio del ambiente determinado por nuevos trabajos y acciones sobre el territorio y por alteraciones voluntarias, químicas o físicas o por cualquier otro atentado o perjuicio directo o indirecto, o en uno o más componentes naturales o culturales y las condiciones de vida de los seres vivientes.*

Para el tratadista Panameño (Barrios Puga), Fiscal Decimo primero del Circuito Judicial de Panamá, el Delito Ambiental es: *"Aquella conducta típica, antijurídica y culpable, ejecutada por cualquier persona natural o jurídica, que cause daño al ambiente ocasionando cambios o alteraciones en la salud y los bienes del ser humano, afectando su derecho a gozar y aprovecharse del mismo*

#### **1.2.1.1. Elementos constitutivos del delito ambiental**

El derecho penal ambiental general algunos desarrollos que se apartan de la doctrina penal tradicional o incluso son rechazados por ésta. Es así por ejemplo el autor (Pérez), en su obra “*Derecho Ambiental*”, cita cuatro elementos que son considerados por el derecho penal ambiental y que se apartan de la doctrina penal tradicional:

- 1.- La tipificación en blanco.
- 2.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como la desestimación de la personalidad jurídica.
- 3.- La exención de grupos o poblaciones determinadas; y
- 4.- La responsabilidad objetiva que se prefiere en la legislación penal ambiental.

#### **1.2.2. Derecho Penal Ambiental**

El derecho es el orden social justo. Todo Estado de Derecho busca satisfacer el bien común, es decir: el bienestar de la población sobre la base de la justicia, entendida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.

Tal como apuntan los Maestros (Soler), en “*Derecho Penal Argentino*” y (Jiménez de Asúa), en “*Tratado de Derecho Penal*”, las normas, preceptos justos y estables del derecho llevan dos prescripciones, ello en contraposición a las de la moral que lleva una sola prescripción.

Las normas del derecho primeramente prescriben un hacer o un no hacer en cuanto a acción se refiere y posteriormente prescriben aquello que debe hacerse cuando lo primeramente prescrito no se lleva a los hechos.

Así, Sebastián Soler en su obra *Derecho Penal Argentino*, nos enseña que una norma de derecho es una norma penal cuando su sanción asume carácter retributivo, ya que el Derecho Penal es la parte del derecho compuesta por el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva.

(Liszt- Schimidt), manifiesta que:

*“Es el conjunto de reglas jurídicas del Estado por las cuales al delito como hecho se une la pena como consecuencia jurídica”.*

Según el autor Peruano (Diethell Columbus), en su ensayo Sobre la Naturaleza Jurídica de los Delitos Ambientales, establece *que el delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre-espacio.*

El tratadista español (Muñoz Conde), define al Derecho Penal Ambiental como:

*“El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la flora y fauna, y las condiciones ambientales de desarrollo de esas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales.”*

(Ramírez Ramos):

*“El derecho penal ambiental es secundario, en el sentido que corresponde a las normas no penales el papel primario en su protección, y accesorio en cuanto a que su función tutelar solo puede realizarse apoyando la normativa administrativa que de modo principal y directo, regula y ampara la realidad ambiental”*

(Santos Ditto), en su obra Derecho Ambiental, dice:

*“La norma penal, debe reservarse para conductas más graves, para cumplir también una función preventiva. Consecuentemente, se debe castigar conductas que ponen en peligro bienes jurídicos, de singular relevancia social, con las sanciones más radicales de que el estado dispone.*

Por lo tanto, se recomienda que el Derecho Penal, solo deba intervenir en la tutela de bienes de mucha importancia y también ante delitos más lesivos.

Como podemos notar en las definiciones citadas anteriormente se considera al Derecho Penal Ambiental, como un derecho auxiliar de las prevenciones administrativas; es decir, que deben aplicarse las sanciones penales únicamente en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien es necesario por la gravedad del daño causado.

Pero también encontramos teorías como la del autor (Blossier Hume), que opina que no es secundaria la naturaleza del Derecho Penal en rama Ambiental, puesto que aun cuando defienda bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del derecho; no se limita a enumerar sanciones meramente protectoras de diferentes realidades jurídicas, sino que antes de prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que indica el ámbito de los comportamientos acreedores a tales penas.

Por tanto, de ordinario la norma penal nunca está subordinada totalmente a lo que disponen leyes no penales; se resalta que el derecho penal es tan autónomo como las más tradicionales disciplinas jurídicas.

### **1.2.3. La tipificación penal en blanco**

(Frías), sostiene que las leyes penales en blanco son:

*“aquellas que contienen una sanción penal referida a infracciones cuyo contenido fáctico y específico se halla dispuesto en otras normas jurídicas”.*

(Larrea & Cortéz, pág. 195), manifiestan que:

*“ la determinación del tipo o conductas en los delitos ambientales presentan complejidades, no solo porque puede resultar imposible la descripción de todas las*

*formas de degradación del medio ambiente sino que cada vez surgen nuevos tipos de conductas... que afectan el medio ambiente.”*

Lo dicho se refleja en la Ley penal ambiental, por ejemplo el análisis de los delitos de atentado contra la vida silvestre y de daños a ecosistemas protegidos nos remiten a al menos, dos normas jurídicas:

La Ley Forestal y de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente para:

- Determinar la condición de especies de flora y fauna que están legalmente protegidas,
- Determinar la condición de ecosistemas legalmente protegidos,
- Determinar la antijuricidad del acto, que generalmente se verifica cuando no ha sido permitido por la autoridad ambiental, esto es cuando no cuenta con la autorización prevista en la ley y más frecuentemente en la norma secundaria

En los delitos de contaminación ambiental, es también necesaria la remisión a, al menos, tres normas jurídicas:

1. Ley de Gestión Ambiental
2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; y,
3. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente para:

- Verificar el límite máximo permisible de emisiones, descargas o vertidos,
- Verificar la licitud de la tendencia de la sustancia peligrosa o contaminante y, determinar la antijuricidad del acto, que generalmente se verifica cuando no ha sido permitido por la autoridad ambiental, eso es cuando no cuenta con la autorización prevista en la ley y más frecuentemente en la norma secundaria.



Lo que es importante destacar es el sustento legal de la remisión normativa, lo que se cumple con la expresión de conformidad con la ley que en este caso es la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, de conformidad con la cual se han expedido las normas técnicas de calidad ambiental. Pero, también es importante destacar que la remisión a la norma administrativa es solo parcial y, por tanto, complementaria al tipo penal solo para aportar con circunstancias que son necesarias como límites máximos permisibles, pero no fundamentales.

Dentro de la Tipificación Penal en blanco se considera como característica de la legislación penal ambiental, en primer lugar términos en sí contradictorios, puesto que la tipificación es uno de los conceptos fundamentales de las garantías de los derechos de las personas en la aplicación del derecho penal tradicional y requiere una exacta descripción de las acciones humanas constitutivas de infracción y sujetas por lo tanto, a una sanción penal.

Las sanciones penales a personas jurídicas no se han desarrollado en la legislación hispanoamericana hasta la fecha, sin embargo; ya hace muchos años en algunos países como por ejemplo en los Estados Unidos la jurisprudencia de sus cortes consideran a las compañías responsables penalmente por conductas criminales de contra el medio ambiente o ecosistema, no obstante hay que entender que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tampoco exime a los administradores y demás personas naturales que hayan participado como autores o partícipes en el hecho considerado delictivo.

Otra de las características de los cuerpos penales ambientales es la exención de responsabilidad que establecen para la caza de animales cuando el cazador se encuentre en estado de necesidad, para alimentarse o alimentar a su familia o para defenderse de depredadores o de animales considerados nocivos, por ejemplo cuando se excluyen de la aplicación de las normas penales a los miembros de las comunidades y grupos étnicos indígenas, cuando los hechos tipificados en ella ocurriesen en los lugares donde han morado ancestralmente y han sido realizados según su modelo tradicional de subsistencia.

Sobre la responsabilidad objetiva, que es muy aceptada por la doctrina ambiental, en la que la responsabilidad de indemnización y reparación por el daño causado es independiente de la existencia de culpa.

Para (Arroyo Baltán), en su obra La Protección Jurídico Penal del Medio Ambiente en el Ecuador, manifiesta que el artículo 437-A, del Código Penal Ecuatoriano, mantiene una estructura fundada en tres elementos:

- 1.- La infracción de la norma extrapenal.
- 2.- Los actos de contaminación; y
- 3.- La creación de una situación de peligro

#### **1.2.3.1. Normativa Extrapenal**

Es necesario una coordinación armónica entre las diferentes ramas del derecho, el derecho administrativo y el derecho penal, en virtud de que la norma penal es remitida a una tipicidad previamente establecida en la norma administrativa, lo que resulta claramente contrario al principio constitucional de legalidad, el mismo que se encuentra estructurado de tal forma que supone primero la descripción de una hipótesis de hecho, y en segundo término, el establecimiento de una consecuencia jurídica, para el evento de que tal conducta se produzca lo que se conoce en doctrina como la norma penal en blanco.

#### **1.2.3.2. La Tipicidad**

Como segundo elemento podemos nombrar la tipicidad, es decir el adecuar la conducta a un hecho dañoso para el medio ambiente, es una cualidad de la ley penal en general, que consiste en la descripción concreta de las acciones humanas o como la descripción abstracta que hace el legislador de las conductas, de los actos lesivos de un bien jurídico o con un significado peligroso para su integridad.

De la lectura del artículo 437A, de nuestro código penal, se podría determinar también que la norma está perfectamente establecida para los delitos de comisión por omisión.

#### **1.2.3.3. El Daño**

Como tercer elemento encontramos que es necesario que exista una situación de peligro, es decir, es necesario que una conducta dañosa provoque un daño al medio ambiente, dentro de la clasificación de los delitos según la doctrina los clasifica en delitos de lesión, y de peligro.

## **CAPITULO II**

### **2. PRINCIPIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL AMBIENTAL**

La Constitución de la República del Ecuador sistematiza los principios ambientales en los artículos 3, 14, 15 y fundamentalmente los artículos 395, 396, 397 y 398, aparecen como esenciales en el análisis penal ambiental, los siguientes principios:

- a) El principio de conservación, y;
- b) El principio contaminador – pagador.

#### **2.1. Principio de Conservación**

Este principio sienta las bases constitucionales para la protección del patrimonio natural, especialmente en áreas naturales protegidas; la conservación de la diversidad biológica, declarada como de interés público el reconocimiento y garantía del derecho de las personas y de la población a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado; y, el reconocimiento y garantía de los derechos de la naturaleza. A continuación observaremos de forma breve estos puntos:

##### **2.1.1. Protección del Patrimonio Natural**

La Constitución en el artículo 3 en su numeral 7 incorpora un aspecto fundamental del derecho ambiental que es la *“protección del patrimonio natural”*, en este sentido, la norma constitucional ecuatoriana declara a la protección del patrimonio natural del país como uno de los deberes primordiales del Estado.

Al caracterizar constitucionalmente la protección patrimonial como un deber primordial, la norma suprema establece un régimen jurídico que reconoce un valor ecológico al patrimonio natural, que trasciende la perspectiva económica tradicional.

De igual forma el artículo 404 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 180), conceptualiza al patrimonio natural como *“formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.”*

De conformidad con la Constitución, el deber de protección del patrimonio natural del país tiene como destinatario al Estado, a través de las instituciones que comprende el sector público, incluyendo la Función Judicial, lo que significa que esta perspectiva deberá aplicarse en casos concretos que se procesen en los órganos de dicha Función.

### **2.1.2. Áreas Naturales Protegidas e Interés Público**

El artículo 405 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 180), señala que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas *“garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas”*.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está conformado por el conjunto de áreas naturales que están protegidas por la ley ecuatoriana. Esto significa que en estas áreas debe garantizarse la conservación de su biodiversidad y deben mantenerse sus funciones ecológicas. Es decir se trata de un interés público, que trasciende el interés particular; y, que como tal está reconocido por la Constitución en los siguientes términos: Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Cabe anotar que la declaratoria constitucional de interés público tiene un efecto jurídico directo en derecho procesal penal ambiental efecto que está previsto en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal al establecer:

El juzgador podrá negar el pedido de caución cuando por la gravedad del caso, el interés público o el incentivo de fuga, considere que no procede.

### **2.1.3. Derecho de las Personas y de la Población a Vivir en un Ambiente Ecológicamente Equilibrado**

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 14 y 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas y a la población el derecho a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, y cuando el equilibrio ecológico se altera, el derecho actúa desde la perspectiva de violación de un derecho constitucional.

En otros términos, cuando hay desequilibrio ecológico, por daños causados a un ecosistema o por atentado contra la vida silvestre, el derecho de las personas a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado se vulnera. En tal virtud, el artículo 397 de la Constitución reconoce el derecho de acceder a los órganos judiciales para efectos de obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental.

Al reconocer el carácter difuso de los derechos ambientales, la Constitución admite la posibilidad de acceso a la justicia a todos: personas naturales, jurídicas, grupos; incluso a quienes no tienen interés directo. El acceso a la justicia abarca la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

El artículo 14 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 24), dispone:

*Art. 14.-“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak-kawsay.*

*Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”*

El artículo 66 numeral 27 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 47), establece:

*Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: (...)*

*27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” (...)*

#### **2.1.4. Derechos de la Naturaleza**

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 24), en el artículo 10 dispone que la naturaleza *“será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”* por ejemplo:

- a) El derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; y,
- b) El derecho a la restauración, entendiéndose ésta como diferente de la indemnización a las personas afectadas por el daño ambiental.

Existe controversia sobre la aplicabilidad de los derechos de la naturaleza dentro del marco jurídico, por lo que es necesario la adaptación de la normativa legal ecuatoriana, en especial de la normativa penal con el fin dar cumplimiento al mandato constitucional. Sin embargo lo importante y destacable es que en el Ecuador hay fundamento constitucional sólido y suficiente para acceder a la justicia a fin de procesar, penalmente, infracciones ambientales.

#### **2.1.5. Principio Contaminador-Pagador**

Este principio sienta las bases constitucionales para el establecimiento de regímenes de responsabilidad jurídica ambiental, entre los que se incluye el régimen de responsabilidad penal por delito ambiental. Más allá de las complejas, y todavía no resueltas, discusiones sobre la aplicación jurídica de la premisa de que *“quien contamina paga”*, lo cierto es que este principio incide notablemente en el ordenamiento jurídico, entre otras formas, al elevar los estándares de responsabilidad jurídica. En materia civil, por ejemplo, incide con claridad en la aplicación de la denominada teoría del riesgo es decir a mayor riesgo de la actividad, mayor responsabilidad del gestor. Por tanto el derecho penal, no puede ni debe permanecer ajeno a estas tendencias, por lo que el tema debería enmarcarse en el ámbito del artículo 12 del Código Penal del Ecuador y en la aplicación práctica de las tesis sobre la actuación del garante del bien jurídico ambiente, en cada caso concreto.

El artículo 12 del Código Penal establece.- *“No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”*. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 5)

## **CAPITULO III**

### **3. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL**

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 10, título II, capítulo primero se refiere a los Principios de Aplicación de los Derechos Constitucionales, y señala que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, así como la naturaleza son titulares y gozan de los derechos garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador sea parte, y el artículo 11 numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el ejercicio de estos derechos se podrá exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes.

El artículo 75 de la Constitución de la República, al referirse y al tratar sobre los Derechos de Protección, declara que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de indefensión y celeridad, y que en ningún caso podría quedar en desamparo.

La protección jurídica del Medio Ambiente y de los Derechos Humanos son inherentes a dicha defensa o amparo, es hoy una necesidad universalmente palpada y si de lo que se trata es de conciliar el desarrollo con el medio ambiente, reconociendo que es esta una tarea vital de la humanidad, debemos admitir que el Derecho es el instrumento apropiado, aunque no el único, para establecer los mecanismos de delimitación de los intereses en conflicto y de protección del interés que deba predominar en cada caso estableciendo expresamente el mandato de utilización de medidas penales para garantizar la protección ambiental y responder a la necesidad, socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre nuestro ecosistema, mediante el Derecho Penal, para responder al mandato constitucional de proteger efectivamente, al medio ambiente.

La protección al medio ambiente de acuerdo a la legislación ecuatoriana, es considerada como un derecho fundamental del ciudadano, y se encuentra consagrado en la Constitución de la Republica, pone énfasis en garantizar y reconocer nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano, esta normado y regulado por la Ley de Gestión Ambiental.

El artículo Art. 14 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 24), establece:

*Art.14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”*

El artículo 66 numeral 27 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 50), estipula:

*Art. 66 .- “Se reconoce y garantizará a las personas: (...)*

*27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” (...)*

Se observa entonces que el estado garantiza a su pueblo un entorno sano, limpio de contaminación, equilibrado en cuanto a la explotación y conservación de recursos y nos reconoce deberes, derechos y responsabilidades de tal forma que sea posible y dable el desarrollo sustentable.

La importancia que la Constitución le da a la protección del medio ambiente se puede percibir hasta el punto de permitir que las leyes de la materia, puedan restringir el ejercicio de derechos y libertades individuales para preservar un derecho de mayor importancia vital, que es el de la colectividad; dado que un ecosistema libre de contaminación garantiza la existencia del derecho a vivir en un ambiente sano con aire y agua pura, además; de recursos genéticos innumerables e intangibles.

Podemos observar que en la Constitución las responsabilidades por daño ambiental en el Ecuador son garantías para la exigibilidad de los derechos establecidos en la misma, y están divididas en tres tipos: garantías jurisdiccionales, garantías normativas y garantías políticas y al mismo tiempo, las primeras se dividen en tres campos:

- a) Las garantías que protegen todos los derechos (Acción de Protección);
  - Las garantías que protegen el derecho a la libertad (Habeas Corpus);



- Las garantías que protegen el acceso a la información pública (Acción de Acceso a la Información Pública);
  - Las garantías que protegen la intimidad (Habeas data);
- b) Las garantías que protegen la eficacia del sistema jurídico (Acción por Incumplimiento); y,
- c) Las garantías que protegen los derechos humanos en el ámbito judicial ordinario.

No obstante debemos mencionar la acción de protección extraordinaria, misma que se da cuando hay vulneración de un derecho constitucional, cuando la autoridad pública, un tercero que actúa en representación del Estado o un particular comete un acto arbitrario, ilegal o ilegítimo que esté en contra de lo estipulado en la Constitución de la República o que por los efectos del acto pueda existir el riesgo o se encuentre evidencia de la vulneración de algún derecho reconocido en la Constitución.

Adicionalmente esta trasgresión puede provenir de una omisión, es decir de las acciones que estando en la obligación de realizar no se efectúan por parte de las personas o autoridades correspondientes.

En temas ambientales, la vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano, los derechos de la naturaleza y en general las demás normas de garantía ambiental reconocidas en la constitución, como la consulta previa, intangibilidad de áreas naturales protegidas, remediación ambiental, reparación ambiental, prevención de la contaminación, etc., que por actos del estado o particulares hayan sido infringidas o corran el riesgo de transgredirse, están sujetas a una tutela efectiva de parte del estado a través de la acción de protección.

El artículo 71 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52), determina:

*“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.*

*Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.*

*El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.”*

*El artículo 72 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52), establece:*

**Art. 72.-** *“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.*

*En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.”*

El artículo 73 (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52), dispone:

*“El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.*

*Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.”*

Es decir se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, derechos como la conservación imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible de las tierras comunitarias y se mantiene la posesión ancestral de estas tierras siempre que estén dentro de territorio ecuatoriano, además se establece y otorga una serie de derechos como el uso, goce, administración, conservación de recursos naturales renovables, derechos sobre los conocimientos y prácticas ancestrales de su entorno natural conforme lo señala la ley, estos derechos están protegidos prioritariamente frente a derechos particulares y son sujetos de tutela jurídica, mismos que están normados y regulados por la Ley de Gestión Ambiental.

Cabe mencionar que para el caso de daños ambientales, la responsabilidad constitucional que permite establecer las medidas de reparación o prevención no se necesita elemento probatorio de legalidad o legitimidad del acto lesivo, pues el daño ambiental de por sí mismo, se constituye en una vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano, por lo cual se crea la responsabilidad objetiva del operador o de quienes se presuma como tal, en caso de

multiplicidad de actores, para que, sin perjuicio de declarar que el acto fue ilegal, ilegítimo o arbitrario, se tomen medidas de reparación.

Además se debería tomar en cuenta que no sólo corresponde interponer acciones de protección a la violación de los derechos constitucionales, sino también a la vulneración de las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en temas de derechos humanos y los relacionados al ambiente y la naturaleza.

El pueblo ecuatoriano entonces no debe olvidar el derecho que tiene al acceso a la justicia pública de poder denunciar ante la autoridad competente la violación de un derecho ambiental que considere quebrantado o violado, aunque la persona que lo ponga en conocimiento de la autoridad competente no sea directamente afectada.

El artículo 28 ( *Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 (Vigente)*, pág. 6), determina:

*“Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.*

*El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos.”*

El artículo Art. 41 ( *Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 (Vigente)*, pág. 7), dispone:

**Art. 41.-** *“Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.”*

### **3.1. Legitimación del Derecho Penal Ambiental**

Considerando que el ambiente es un bien jurídico colectivo protegido por el Estado, las acciones establecidas para su protección son de carácter amplio y general, por lo que la Constitución de la República dispone la acción popular para ejercer las acciones legales, y acudir a los órganos de justicia para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental.

Cuando se trata de la defensa de los derechos individuales, se considera que el sujeto que ha sido afectado posee un interés legítimo para exigir la defensa del derecho, pero en el tema de derechos colectivos surgen algunos problemas que tiene que ver con la legitimación que no es sino la justificación o probanza de la verdad o de la calidad de una cosa.

### **3.2. Aplicación de la Ley Penal en materia Ambiental**

Cuando el hombre reconoce la existencia de los problemas Ambientales, tuvo la necesidad de enfrentarlo con el auxilio del Derecho, es decir, se atribuye a la conducta humana, tratar de proteger la vida en la tierra a través de dos formas del Derecho como es la norma y la coacción, teniendo así una respuesta social visible tendiente a la protección del medio ambiente.

El Derecho Ambiental tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que se vale de todas las ramas del Derecho para llevar a cabo sus normas y alcanzar todos sus objetivos, es así que el Derecho Penal tiene una gran importancia en el ámbito ambiental, debido a que tiene como objetivo evitar los daños o riesgos más graves a los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social. Actualmente, su nivel de injerencia en la vida de los ciudadanos abarca la protección de todo el entorno del ser humano, que pudiera sufrir cualquier tipo de agresión que lo ponga en riesgo, incluyendo nuestro medio ambiente, por tal cuestión, al ser el Derecho Penal es el que regula y sanciona las conductas que puedan agredir nuestro entorno, el Derecho Penal Ambiental, debe ser visto como un derecho que privilegia aquellos instrumentos jurídico-ambientales preventivos y voluntarios para incrementar el cumplimiento de la ley ambiental.

Antes de iniciar el estudio de las Contravenciones y Delitos Penales Ambientales consagrados en nuestro ordenamiento penal, es necesario traer a conocimiento algunos puntos de vista o criterios sobre qué se entiende como Derecho Penal Ambiental.

(Muñoz Conde), define al Derecho Penal Ambiental como:

*“El mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la flora y fauna, y las condiciones ambientales de desarrollo de esas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales”.*

(Ramírez Ramos).-

*“El **Derecho Penal Ambiental** es secundario, en el sentido que corresponde a las normas no penales el papel primario en su protección , y accesorio en cuanto a que su función tutelar solo puede realizarse apoyando la normativa administrativa que de modo principal y directo, regula y ampara la realidad ambiental”.*

(Santos Ditto), en su obra **Derecho Ambiental**, menciona que:

*“La norma penal, debe reservarse para conductas más graves, para cumplir también una función preventiva. Por lo tanto, la norma penal, debe castigar conductas que ponen en peligro bienes jurídicos, de singular relevancia social, con las sanciones más radicales de que el estado dispone.” (Guaranda Mendoza, pág. 89)*

Como podemos notar en las definiciones citadas anteriormente se considera al Derecho Penal Ambiental, como un derecho auxiliar de las prevenciones administrativas; es decir, que deben aplicarse las sanciones penales únicamente en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien es necesario por la gravedad del daño causado.

(Blossier Hume), opina que:

*“no es secundaria la naturaleza del Derecho Penal en rama Ambiental, puesto que aun cuando defiende bienes jurídicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del derecho; no se limita a enumerar sanciones meramente protectoras de diferentes realidades jurídicas, sino que antes de prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que indica el ámbito de los comportamientos acreedores a tales penas. Por tanto, de ordinario la norma penal nunca está subordinada totalmente a lo que disponen leyes no penales; se resalta que el derecho penal es tan autónomo como las más tradicionales disciplinas jurídicas.*

Aunque el derecho ambiental se apoya en un dispositivo sancionador, sus objetivos son esencialmente preventivos, reconociendo que la represión lleva implícita una vocación de prevención, pero cuando las sanciones son mínimas, el contaminador paga la multa antes de cesar en sus conductas ilegítimas. De ahí que se plantea una mayor rigurosidad en la sanción sobre todo eficacia a fin de fortalecer los efectos psicológicos de la sanción o de la compensación – sanción.

De lo expuesto podemos hacernos la siguiente pregunta ¿Es necesaria la intervención del derecho penal en el ámbito del derecho ambiental?, y seguramente nuestra respuesta sería que el Derecho Penal se visualiza como una herramienta para obtener el cumplimiento de la normativa ambiental ante la alarma por la acelerada degradación de los recursos naturales y el medio ambiente.

El Código Penal ecuatoriano tipifica infracciones ambientales desde el año 2000. La Ley 99-49 reformativa al Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 2 del 25 de enero del año 2000, incorporó al código penal delitos y contravenciones ambientales. Esta reforma no solo significó la reforma de nuevos delitos y contravenciones penales, sino que significó la aplicación de un mandato constitucional que requería la aplicación del derecho penal en la esfera de protección de los derechos ambientales.

Además los considerandos de la Ley 99-49 presentan con claridad el papel del derecho penal en la protección de los derechos ambientales, al reconocer dicha protección como un deber del Estado.

Esta ley, además, instrumentalizó el reconocimiento del ambiente, y de lo ambiental, como bien jurídico protegido por el derecho penal. En este marco, hay que recordar que no todos los bienes jurídicos protegidos activan el sistema penal, sino aquellos que son especialmente valiosos para una sociedad determinada.

Por lo que podemos observar que los delitos ambientales fueron incorporados en el capítulo correspondiente a los delitos contra la seguridad pública; y las contravenciones ambientales fueron agregadas como un capítulo independiente, aunque con características punitivas similares a las contravenciones de cuarta clase, las más graves del régimen de contravenciones penales.

### **3.3. Clasificación de los Delitos Medioambientales Tipificados en el Código Penal Ecuatoriano**

Dentro de nuestra legislación se observa que los Delitos Ambientales se clasifican de la siguiente manera: delitos ambientales tradicionales, aquellos que siempre existieron desde la vigencia misma del Código Penal, pero los cuales se mantuvieron inertes por el desconocimiento de la materia ambiental; y, los nuevos delitos contra el medio ambiente. Dentro de los delitos tradicionales podemos señalar los siguientes:

#### **a) Delitos contra la flora, dentro del cual se considera**

- 1.- Fuego voluntario
- 2.- Cortado o talado de cementeras
- 3.- Derribado, mutilado o descortezado de árboles.

#### **b) Delitos contra el agua, dentro del cual se considera**

- 1.-El que estorbare el derecho de que un tercero tuviere sobre aguas;
- 2.-El que fraudulentamente sustrajere o desviare aguas de uso público de los particulares.

#### **c) Delitos contra la propiedad privada de la tierra, dentro del cual encontramos**

- 1.- Los que invadan tierras tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, y organicen en pseudo-cooperativas.
- 2.- Los que invadan tierras tanto en zonas urbanas como en rurales, y negocien las mismas sobre supuestos derechos adquiridos.

#### **d) Delitos contra las bellezas escénicas, dentro de los que encontramos.**

1.- El que dañe o destruya bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

2.- El funcionario o empleado público, que autorice o permita contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

3.- Quienes trafiquen, comercialicen o saquen fuera del país piezas u objetos arqueológicos, bienes de interés histórico o pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

### **3.4. Autoridades y Competencias Ambientales**

Los delitos ambientales, al estar categorizados como delitos contra la seguridad pública son delitos de acción pública, tanto porque están sujetos a las reglas generales sobre competencia judicial en materia penal, previstas en los artículos 221 y 225 del Código de la Función Judicial que otorga competencias a los jueces y a tribunales de garantías penales para la sustanciación de las respectivas etapas del proceso por delitos de acción pública.

Tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos ambientales el Estado y sus agentes, incluidos los de la función ejecutiva, legislativa y judicial, los gobiernos seccionales y los órganos autónomos descentralizados, según corresponda.

La norma general sobre legitimación activa en materia constitucional la observamos en el artículo 86 numeral 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 63), señala:

*Art. 86.- “Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución”.*

En materia ambiental, el artículo 397 numeral 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 178), establece que es obligación del Estado

*Art.397.- “...permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, (...)”.*



Sin embargo, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional restringe esta capacidad de entablar acciones a cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, ya que señala que se consideran afectadas las víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño y que se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce.

### 3.4.1. Cuadro de competencias ambientales (Cardenas, págs. 28,29)

<b>AGUA</b>	Control de calidad y Distribución	Consejo Nacional de Recursos Hídricos
	Distribución de Riego	Ministerio de Agricultura y Ganadería, Organismos regionales (PREDESUR, CREA...)
	Control de calidad para Asentamientos humanos y Control De descargas de aguas servidas	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, municipios
	Control de contaminación por actividades mineras y petroleras	Ministerio de Energía y Minas
	Contaminación del Agua	Ministerio de Salud Ministerio del Ambiente Juez de lo Civil
<b>SUELO</b>	Control de contaminación por Agroquímicos	Ministerio Agricultura y Ganadería, Ministerio Salud Publica, Ministerio del Ambiente
		Ministerio de Desarrollo Urbano

	Por desechos sólidos urbanos	Vivienda, Ministerio de Salud Publica, Ministerio del Ambiente.
	Desertificación	Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente
	Afectación por construcción de Carreras	Ministerio de Obras Publicas
<b>AIRE</b>	Control de emisiones vehiculares	Ministerio Ambiente, Municipios, Ministerio de Salud Pública, Consejo de Transito
	Control de emisiones industriales	Ministerio de Industrias, Comercio, Integración, Pesca y Competitividad, Municipios, Ministerio del Ambiente
<b>RUIDO</b>	Control de emisiones vehiculares	Ministerio de Salud Publica Ministerio del Ambiente, Municipios
<b>BIODIVERSIDAD</b>	Control de emisiones industriales	Ministerio del Ambiente, Policía Ambiental
<b>BOSQUES</b>		Ministerio del Ambiente, Policía Ambiental
<b>RECURSOS MARINOS</b>		Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de Pesca, Dirección General de la Marina Mercante

A pesar de que estas dependencias son las competentes, siempre que se haya violado un derecho o un mandato constitucional se puede recurrir a un juez de lo Civil o ante al Defensor del Pueblo con la finalidad de que se suspenda el acto o decisión que afecte el derecho a vivir en un ambiente sano y en los casos penales se podrá acudir ante el Ministerio Publica o Fiscalía.

### 3.5. Sujetos que pueden interponer Acciones Legales

Hay que considerar que los delitos ambientales están categorizados dentro de los delitos de acción pública, es decir aquellos que pueden ser interpuestos o denunciados por cualquier persona sea que tenga o no interés en el mismo. Por tal efecto, para interponer acciones penales están legitimadas las siguientes personas:

- Cualquier persona, sea natural, jurídica, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos;
- La víctima concreta del delito;
- Las instituciones de control o demás instituciones del estado que hayan tenido conocimiento del delito.

*Art. 43.- Ley de Gestión Ambiental.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos.*

*Sin perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante.*

*Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago que por reparación civil corresponda se efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley.*

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación.

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria.

Cabe señalar además que la Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 86 numeral 1 que:

*Art. 86.- “(...) Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución” (...).  
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 63)*

En materia ambiental, el artículo 397 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 178), numeral 1 establece que es obligación del Estado :

*Art.397.- “(...) Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental (...)”*

Sin embargo, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional restringe esta capacidad de entablar acciones a cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, señala además que se consideran afectadas las víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño y que se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce.

Así mismo en el artículo. 71 inciso segundo de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52), se dispone:

*Art.71.- “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. (...)”*

El artículo 215 de la Constitución de la República establece, que la Defensoría del Pueblo tiene la función de proteger y tutelar los derechos de los habitantes del Ecuador. Entre sus atribuciones está entablar acciones de protección, de incumplimiento, acción ciudadana, entre otras, a petición de parte o de oficio, es decir, por su propia iniciativa.

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 68), en su artículo 99 se refiere a la acción ciudadana y establece:

*Art. 99 “(...) se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación (...)”*

( Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 (Vigente), pág. 6), en su artículo 28 se refiere a una acción popular misma que prevé lo siguiente:

*Art. 28.- “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.*

*Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas (...)”*

### **3.6. Acción de Protección**

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, es decir se podrá interponer cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.

Así mismo, podrá interponerse contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

La acción de protección presenta una modalidad de carga de la prueba distinta de lo usual en derecho, sabemos que la carga de la prueba es la obligación de probar los hechos sometidos a juicio y corresponde usualmente a quien los alega, esta regla se mantiene en el caso de una

acción de protección ambiental, el demandante debe probar que el demandado ha incurrido en el acto u omisión que él alega que violenta su derecho, sin embargo, una vez probados estos actos u omisiones, quien demanda no está obligado a probar los daños, la obligación de probar que de esas acciones u omisiones no ha derivado daño ambiental es del demandado así lo establece el artículo 397 numeral 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 78), dispone:

*Art 397.- “(...) La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o demandado. (...)”.*

El Estado está obligado primordialmente a respetar y hacer efectivo los derechos reconocidos en la Constitución, por lo tanto las garantías jurisdiccionales o constitucionales, son herramientas jurídicas mediante las cuales se exige al Estado un comportamiento de respeto o garantía de los derechos humanos, las mismas que deben ser adecuadas y eficaces, de tal forma que su utilización tenga un resultado positivo a favor de quien demanda su aplicación o reparación, ya que un estado que no instituye garantías adecuadas para cumplir los derechos humanos, sólo utiliza los derechos humanos como un adorno de su Constitución.

La Ley de Gestión Ambiental establece acciones Administrativas:

*Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.*

*El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario.*

*Art. 45.- Para el caso de infracciones, el Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas instituciones, podrá apelarse únicamente ante la máxima autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria.*

De acuerdo al artículo 42 de la ( Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pág. 15), la acción de Protección de derechos no procede:

*“1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.*

*2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación.*

*3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos.*

*4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.*

*5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.*

*6. Cuando se trate de providencias judiciales.*

*7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral.*

*En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisibile la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.”*

*“De las disposiciones antes mencionadas podemos, referirnos a tres aspectos en los cuales puede existir cierta complejidad al momento de interponer una acción por violación al derecho ambiental, estos son:*

*1. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos, es decir; cuando a través de la impugnación se pretende que mediante la acción de protección, se declare que un determinado acto normativo de efectos generales está en contradicción a lo dispuesto en el texto constitucional.*

*2. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz; es decir, existe impugnación de legalidad cuando la acción pretende que se declare la violación de un derecho por el incumplimiento de una ley que esté contenida en el ordenamiento jurídico y para la cual exista un procedimiento ordinario de justicia. La acción de protección tampoco procede si el acto administrativo que se impugna pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.*

3. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho; es decir, cuando se pretende que el juez declare la existencia de un derecho sea este un derecho real o personal, pues en este caso, existen otras vías, como las judiciales ordinarias, mediante las cuales el sujeto que se cree con un derecho pueda pedir su declaración.

*Existen limitaciones para la acción de protección, tienen que ver tanto con su idoneidad como eficacia, si bien hay un conjunto de disposiciones que favorecen la interpretación progresiva del derecho como el principio in dubio pro natura, la reversión de la carga de la prueba, el establecimiento de medidas cautelares, la restauración ecosistémica, los principios de interpretación de los derechos, etc., en la práctica las resoluciones judiciales que se emiten dentro de esta acción no son suficientemente claras y contundentes."* (Guaranda Mendoza)

*Pero quizás la situación más grave dentro de la eficacia de las acciones de protección, es su ejecución, pues muchas de las causas sobre las que han existido resoluciones positivas no han podido ser ejecutadas debido fundamentalmente a que dentro de las sentencias no se han establecido plazos para su ejecución y cumplimiento, o se ha identificado las personas que deban ejecutarlas o en ocasiones su falta de ejecución se debe a la inacción e inoperancia tanto del sistema de justicia como de los responsables de su cumplimiento.*

*De acuerdo al **artículo 88** de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 64), establece que la acción de protección*

**Art.88** “...La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”

El artículo 39 de la ( Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009 (Vigente), pág. 14), dispone:

**Art.39**“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales (...)”.



Igualmente no debemos olvidar la acción de protección extraordinaria, misma que no procede en aquellas cuestiones dudosas o incompletas en la administración de justicia, ya que por su naturaleza persigue que la vulneración a derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso no queden en la impunidad, por lo que asumiendo el espíritu garantista de la Constitución de la República, mediante esta acción, se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas puedan ser objeto de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país, como en efecto es la Corte Constitucional. Por esta razón, los alcances que asume la acción extraordinaria de protección abarca a las resoluciones ejecutoriadas, las mismas que, como medida excepcional, pueden ser objeto de análisis ante el supuesto de vulneración de los preceptos antes descritos, teniendo como efecto inmediato, si se constatare la vulneración, la reparación integral del derecho violado y finalmente, deja sin efecto la sentencia, auto o resolución firme o ejecutoriada de la autoridad impugnada.

## **CAPITULO IV**

### **4. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO-ADMINISTRATIVO**

La relación entre el Derecho Penal y el Derecho-Administrativo, es compleja y problemática, ya que lejos de complementarse, parece más bien que se oponen. Así, encontramos, por una parte, que algunos conceptos jurídicos penales vienen determinados por nociones administrativas y por otra parte, en relación con la potestad sancionadora de la Administración, que una serie de sanciones administrativas vienen a operar sobre presupuestos facticos a los del derecho penal, surgiendo así el conflicto acerca de la primacía de la sanción administrativa y el carácter accesorio o secundario del Derecho Penal o, por lo contrario, sobre el principio de jerarquía de la jurisdicción penal sobre la administrativa.

Se debe precisar y tomar en cuenta si el ilícito penal y el ilícito administrativo son cualitativamente distintos o bien tienen idéntica naturaleza, diferenciándose únicamente desde el punto de vista cuantitativo, esto es, por mayor gravedad de los ilícitos.

Corresponde entonces establecer a los legisladores que criterios de política criminal en qué casos debe intervenir el derecho penal con rapidez y que la sanción sea eficaz.

Tradicionalmente ha sido el derecho administrativo al que se le ha encomendado proteger al medio ambiente a través de una extensa reglamentación medio ambiental mediante actos de autorización, control e inspección con el fin de velar el cumplimiento de la normativa de aquellas actividades que puedan dañar la naturaleza en caso del cometimiento de una infracción. Sin embargo en los últimos años en una lucha contra la degradación del medio ambiente el estado ha considerado acudir al recurso del Derecho Penal tipificando como delitos las conductas que atenten más graves contra el medioambiente.

Pese al control preventivo por parte de la administración y la inmediatez y la celeridad de las sanciones no han sido suficiente freno para algunos desmanes contra el medioambiente que se

han producido en nuestro país, ya sea por dejadez, inoperancia e incluso por conductas corruptas x parte de las administraciones públicas, locales, encargadas de tutelar el medio ambiente o bien sea por las sanciones administrativas no consigue intimidar a los que cometen este tipo de infracciones.

La necesidad del Derecho Penal en la tutela del medioambiente, se ha impuesto también como una medida necesaria de protección de la sociedad, orientadas a prevenir la aparición de riesgos de daños especialmente graves. Una vez aceptado que el Derecho Penal es un recurso necesario en la tutela medio del ambiente, como la protección penal medioambiental se debe complementar con normativa medioambiental administrativa.

El medio ambiente es uno de los pocos bienes jurídicos que la constitución expresamente menciona como objeto de protección o de tutela penal. La protección del medioambiente no puede hacerse de una forma absoluta se debe determinar si las conductas prohibidas merecen una sanción penal o administrativa.

El derecho penal es un derecho de excepción, sólo debe aplicarse a los que no cumplen con conducta enmarcada dentro de la normativa medioambiental. Toda conducta que no cumpla con los requisitos exigidos por la figura penal, no es punible, sin embargo de esto sí podría ser una infracción administrativa

#### **4.1. Acciones Administrativas**

La responsabilidad administrativa tiene como fundamento la prevención, a nivel procedimental se han establecido mecanismos administrativos para prevenir los riesgos y daños ambientales, para ello se han creado mecanismos de control como los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, auditorías ambientales, guía de buenas prácticas ambientales, etc., los cuales deben cumplir con los estándares fijados por la normativa ambiental que establecen las normas técnicas de calidad ambiental, límites de emisiones y descargas, control sobre sustancias tóxicas o peligrosas y demás aspectos que generalmente reposan en disposiciones reglamentos o secundarias, pero que tiene como fin garantizar que las actividades de explotación se desarrollen de forma sustentable. Así por ejemplo, el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental al referirse a las sanciones administrativas, establece:

*Art.46.- "...Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: (...);*

*b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días."*  
*(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 35-336)*

La acción administrativa tiene como objetivo establecer la responsabilidad ambiental que se deriva de la infracción de la norma ambiental administrativa, sus normas complementarias y su reglamentación, para lograr de esta forma el establecimiento o la aplicación de una sanción por la acción u omisión infractora, pudiendo también lograr con ello la obligación de reparar la agresión ocasionada, la aplicación de medidas de prevención, mitigación o en definitiva, hacer que el sujeto causante del daño o la infracción asume los costos correspondientes.

Por medio de las acciones administrativas se puede lograr que el infractor asuma una actitud de respeto a los derechos ambientales y de la naturaleza y evite en lo posible causar daños o aumentar los riesgos sobre el ambiente y la salud de las personas.

Las acciones administrativas ambientales promueven que el estado cumpla con su rol de tutelar los derechos constitucionales, pues si no realiza el control adecuado, no sólo que a través de las acciones ciudadanas se le obliga a cumplir con su rol sino que puede ser objeto de sanción cuando sea el operador de la actividad o cuando por acción u omisión haya provocado el incumplimiento de la norma o el daño ambiental.

Es importante tener en cuenta que la sanción administrativa no es personal sino real, es decir no se sanciona a la persona sino a la actividad en sí misma, y cuando se trata incumplimiento por parte de personas jurídicas no se sanciona a los representantes legales de la misma sino a la institución por ser la generadora del daño o del incumplimiento por el desarrollo de su actividad de riesgo, debiendo advertirse que la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad no exime al contaminante de su obligación de reparar, sino solamente en el supuesto del caso fortuito extremo devenidos por fenómenos naturales.

La ( *Declaración de Río sobre medio Ambiente y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desarrollo, pág. 2*), en su Principio 10 establece:

**Principio 10.**-“...El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (...).Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos al resarcimiento de daños y los recursos pertinente”

Es decir, por lo tanto para ejercer acciones administrativas las personas no necesitan de otros requisitos para actuar, que no sea la existencia de la norma jurídica que lo habilita a accionar, esto es la disposición constitucional y secundaria que faculta expresamente esta legitimidad y sobre la cual el resto del sistema jurídico o el sistema judicial no deben inventarse requisitos adicionales, pues estarían atentando a esta libertad y garantía constitucional.

Las infracciones pueden ser administrativas y penales. Se diferencian básicamente por los juzgadores y las sanciones. Las infracciones administrativas son juzgadas por funcionarios, usualmente autoridades, de instituciones públicas (por ejemplo, Jefes de Distrito del Ministerio del Ambiente). Estas infracciones son sancionadas con medidas pecuniarias, es decir medidas que afectan al patrimonio no a la persona. Éstas incluyen: multas, decomisos, suspensiones de licencias o permisos, clausuras, etc.

Por su parte, las infracciones penales son juzgadas por miembros del sistema judicial: jueces y tribunales. Estas infracciones son sancionadas de manera más severa y usualmente incluyen penas privativas de la libertad.

Los procesos administrativos siguen reglas específicas pero por lo general son más expeditos que los procesos judiciales.

Las decisiones del primer juzgador (autoridad de primera instancia) suelen ser apelables ante la máxima autoridad de la institución (por ejemplo, la Ministra del Ambiente). Cabe anotar que aunque el Ministerio del Ambiente es la autoridad máxima ambiental en el país, hay otras instituciones públicas con competencia en temas ambientales.

*“...La acción administrativa tiene como objetivo establecer la responsabilidad ambiental que se deriva de la infracción de la norma ambiental administrativa, sus normas complementarias y su reglamentación, para lograr de esta forma el establecimiento o la aplicación de una sanción por la acción u omisión infractora, pudiendo también lograr con ello la obligación de reparar la agresión ocasionada, la aplicación de medidas de prevención, mitigación o en definitiva, hacer que el sujeto causante del daño o la infracción asume los costos correspondientes.”*  
(Guaranda Mendoza, pág. 194)

Por medio de las acciones administrativas se puede lograr que el infractor asuma una actitud de respeto a los derechos ambientales y de la naturaleza y evite en lo posible causar daños o aumentar los riesgos sobre el ambiente y la salud de las personas.

Las acciones administrativas ambientales promueven que el estado cumpla con su rol de tutelar los derechos constitucionales, pues si no realiza el control adecuado, no sólo que a través de las acciones ciudadanas se le obliga a cumplir con su rol sino que puede ser objeto de sanción cuando sea el operador de la actividad o cuando por acción u omisión haya provocado el incumplimiento de la norma o el daño ambiental.

#### **4.2. Principio de intervención mínima**

De acuerdo con Jellineck:

*“si el derecho es el mínimo ético, el derecho penal es el mínimo de dicho mínimo lo que le confiere un carácter fragmentario y subsidiario siendo preferible medios no sancionadores para la solución del conflicto que por su naturaleza puedan tener acomodo y solución en otra vía.”* (Serrano & Vázquez, pág. 105)

Confirmando el principio de intervención mínima el derecho penal únicamente deberá castigar las infracciones que se consideren más perjudiciales para la sociedad, aquellas que tengan una mayor relevancia social, imponiendo un castigo proporcionado a su gravedad.

Como consecuencia de este principio el derecho penal goza de carácter fragmentario que implica que la norma penal únicamente podrá emplearse para defender bienes jurídicos fundamentales ante ataques de mayor gravedad.

Igualmente disfruta de un carácter subsidiario en el sentido que el derecho penal debe solo emplearse para aquellas conductas que no pueden ser atajadas por otros medios de control social.

#### **4.3. Carácter accesorio o secundario del derecho penal**

El derecho penal no realiza una función valorativa sino puramente sancionadora, en que muchas ocasiones el derecho penal sancione conductas ya tipificadas por otras ramas del ordenamiento jurídico, no quiere decir que el derecho penal haya de tener un carácter meramente secundario o sancionatorio. Al seleccionar las formas más graves de lo ilícito civil, administrativo, etc., y extender amenazas de pena el derecho penal realiza así mismo una función valorativa.

El derecho penal selecciona la parcela de la realidad social en la que decide intervenir con criterios autónomos e interviene en ella con instrumentos privativos del mismo como penas, y medidas de seguridad, para cumplir una función específica, es decir ninguna rama jurídica determina al derecho penal que es lo que ha de sancionar y que conceptos debe emplear, además existen bienes jurídicos que solo cuentan con protección penal.

(Santos Ditto), en su obra Derecho Ambiental, manifiesta:

*“La norma penal, debe reservarse para conductas más graves, para cumplir también una función preventiva. Por lo tanto, la norma penal debe castigar conductas que ponen en peligro bienes jurídicos, de singular relevancia social, con las sanciones más radicales de que el estado dispone y recomienda que el Derecho Penal, solo deba intervenir en la tutela de bienes de mucha importancia y también ante delitos más lesivos.” (Guaranda Mendoza, pág. 89)*

Es decir, se considera al Derecho Penal Ambiental, como un derecho auxiliar de las prevenciones administrativas y que deben aplicarse las sanciones penales únicamente en

aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro ordenamiento jurídico, o bien es necesario por la gravedad del daño causado.

El Derecho Penal por sí solo no puede resolver el problema de dar protección jurídica al medio ambiente, sino que deberá recurrir necesariamente al Derecho Constitucional, al Derecho Administrativo y también al Derecho Privado. La magnitud del problema para el derecho penal actual está en resolver los vicios del derecho penal tradicional y rediseñar los contactos de éste con otras ramas del Derecho.

El medio ambiente está regulado por el derecho, especialmente por el derecho administrativo y el derecho penal, no se puede prohibir lo que está expresamente permitido por el derecho administrativo.

Esto es una consecuencia natural del principio de unidad del ordenamiento jurídico, y con ello se trata de evitar la superposición de leyes o la contradicción entre las leyes de modo que el derecho penal del medio ambiente debe atender a las normas y actuaciones de la administración pública.

El medio ambiente adecuado no es fruto del desarrollo social, más bien sin medio ambiente adecuado no hay hombre, ni sociedad, ni derecho, por tanto, cuando se tipifica su protección se produce en dos sentidos; por un lado, se lo reconoce como derecho humano fundamental; y por otro, se le encomienda su protección a los poderes del estado mediante la creación de leyes, cuya eficacia se llevará a cabo mediante la Administración Pública.

En la legislación ambiental ecuatoriana se establecían solamente sanciones de carácter administrativas y civiles, por alguna infracción de tipo ambiental; es decir, que si una persona natural o jurídica ocasionaba algún daño ambiental, en contra de un individuo o colectividad, se lo sancionaba sólo pecuniariamente y con multas que por lo regular no guardaban relación con la magnitud del daño ocasionado. Es por este motivo y por la cantidad de infracciones y delitos de mayor escala que se producen y que atentan contra el medio ambiente, que el Legislador se vio en la obligación de insertar dentro de la normativa penal las infracciones y delitos contra el medio ambiente.



En este orden el legislador para acotar los comportamientos prohibidos en el ámbito del medio ambiente, utiliza la técnica de las denominadas “*Leyes Penales en Blanco*“, en virtud de la cual la constitución se remite a la previa delimitación efectuada por otros sectores del ordenamiento jurídico.

Es así como en el Registro Oficial No 2 del 25 de Enero del 2000, luego del Capítulo X, Título V del Libro II del Código Penal, se agregan a dicho cuerpo legal lo que se denomina De los Delitos Contra el Medio Ambiente y De las Contravenciones Ambientales, que se encuentran luego del Capítulo V, del Título I, del Libro III, del Código Penal.

Es conveniente tener en cuenta lo siguiente, que la diferencia entre infracción administrativa y delito contra el medio ambiente, es difícil de establecer ya que ambas infracciones suponen la realización de la misma acción y solo el resultado de la misma determina que los hechos se castiguen administrativa o penalmente.

Dentro de nuestra legislación el Estado establece responsabilidades a los contaminadores ante el evento de que se presenten hechos que puedan ser sancionados sin la necesidad de la intervención judicial.

En este sentido, se confía a las instituciones encargadas del control de la calidad ambiental y los sistemas de prevención, el establecimiento de acciones de reparación por el incumplimiento a la normativa ambiental, mediante un sistema de reparación administrativo; es decir, si bien es cierto que el principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento la prevención, también existen formas en las cuales la administración actúa de forma precautoria y reparadora.

Esto es que dentro del sistema de responsabilidad administrativa se puede imponer al unísono sanciones como multas, clausuras, y disponer también la reparación del daño ambiental en tanto haya supuesto el incumplimiento de un deber. Por lo tanto, de la gravedad del resultado es lo que determina la sanción y esta puede ser también penal.

#### **4.4. El principio de NON BIS IN IDEM**

Este principio o aforismo latino significa o consiste básicamente en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, implicando que en un proceso no se pueden imponer dos sanciones por un mismo hecho; es decir, un mismo hecho no puede dar lugar a la apertura de dos procedimientos, uno penal y otro administrativo.

Además se debe considerar que este principio va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada.

## **CAPITULO V**

### **5. INICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PROCEDIMIENTO**

Los mecanismos litigiosos para el cumplimiento y aplicación de las disposiciones penales ambientales constan en el nuevo código de procedimiento penal, y las autoridades que tienen competencia para juzgar los delitos ambientales.

El nuevo código de procedimiento penal separa las funciones de investigar, acusar y fallar entregándoselas a órganos distintos, la investigación y acusación al ministerio público, el control y el cumplimiento durante las etapas de investigación al juez de garantías y juzgamiento al tribunal de juicio.

En materia procesal penal, previo a determinar la visión legislativa, cabe recordar que los delitos ambientales están, actualmente, clasificados como delitos contra la seguridad pública y, por tanto, son delitos de acción penal pública. Por tanto, el procesamiento de estos delitos se sujeta a las normas del Código de Procedimiento Penal.

En este marco el acceso a la justicia opera a través del mecanismo común de promoción de la acción penal, esto es, la denuncia; y, a través de la acusación particular como manifestación de voluntad para que el ofendido se constituya en parte procesal.

La acción Penal puede iniciarse, por las siguientes causas:

- Por denuncia presentada por el perjudicado, o por cualquier persona, tratándose de acción pública como es el caso de los delitos ambientales, y/o;
- Por iniciativa del Fiscal, que haya conocido del cometimiento de un delito en contra del ambiente.

## 5.1. Presentación de la Denuncia

En la presentación de la denuncia hay que tomar en consideración lo siguiente:

- La denuncia debe presentarse ante el fiscal competente, el cual será, el del territorio donde se ha cometido la infracción, esto es la sección territorial en la que el fiscal ejerce sus funciones.
- Se puede denunciar tanto a las personas naturales o jurídicas, a las particulares como a las instituciones del estado o a las que actúen por delegación del Estado.

El artículo 42 del (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 19*), señala:

*Art. 42.- “La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la Ley se lo prohíbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la Policía Nacional.”.*

Es decir, a través de una denuncia se da a conocer una noticia sobre una infracción penal a la autoridad judicial competente, la Fiscalía; o, a la autoridad policial.

El Código de Procedimiento Penal establece algunos requisitos de contenido, requiere su reconocimiento por parte del Actor; y, puntualiza que este no es parte procesal, lo que le diferencia del acusador particular.

No hay, en el proceso penal por delito ambiental, mayores diferencias o novedades respecto a la denuncia por lo que es aplicable la normas generales del Código de Procedimiento Penal.

A través de la denuncia se canaliza, entre otras formas, la aplicación del deber constitucional de conservar el patrimonio natural del Estado, es decir a través de la acusación particular el ofendido del delito puede constituirse en parte procesal y ejercer el derecho de intervenir en el proceso penal, conforme lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal.

*El (Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 25) **artículo 69** establece: “... El ofendido tiene derecho:*

- 1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular;*
- 2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre procesal y de la instrucción;*
- 3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él;*
- 4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del agente de la Fiscalía, en los casos siguientes:*
  - a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue solicitada;*
  - b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad investigativa;*
  - c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba; y,*
  - d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones del Fiscal;*
- 5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince días;*
- 6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el Fiscal, el juez de garantías penales y el tribunal de garantías penales adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del imputado; y,*
- 7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no acusación particular.”*

El (Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 25), ofrece una norma más precisa en cuanto a la acción particular, en su artículo 68 numeral 4

**Art. 68.-** “... Se considera ofendido:

- 4.-A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, (...)”*

*El artículo 52 del Código de Procedimiento Penal señala: “...Puede proponer acusación particular el ofendido (...)”.*

Al referirse al ofendido como el sujeto facultado para proponer la acusación particular, el Código de Procedimiento Penal enfatiza su naturaleza jurídica de manifestación de voluntad, más que de un modo de ejercer la acción penal.

La denuncia deberá reunir determinados requisitos que de conformidad con el artículo 50 del (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 20*), que serán los siguientes:

- “1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices, y encubridores, si se los conoce, o su designación; así como los de las personas que presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella;*
- 2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados; y,*
- 3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los culpables (...).”*

La falta de cualquiera de estos datos no significará que el Fiscal rechácela iniciación de proceso.

Tampoco se requiere de la firma de un abogado, pues incluso la denuncia puede ser verbal, estando la fiscalía en la obligación de reducirla a escrito, para dejar constancia de ella.

El Fiscal deberá inmediatamente iniciar las investigaciones conducentes a establecer tanto la existencia del delito como la responsabilidad de quien lo cometió. Sin embargo si el fiscal que conoce la denuncia se encuentra dentro de las causales de excusa determinados en el **artículo 67** del Código de Procedimiento Penal, deberá excusarse de realizar la investigación, caso contrario podrá ser recusado por el denunciante.

*Artículo 67 del (Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, págs. 24,25), establece lo siguiente:*

*“... a) Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera de ellos sea su cónyuge o conviviente, o tenga con el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;*

*b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes;*

*c) Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez de garantías penales o con los miembros del tribunal de garantías penales; y,*

*d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el literal a) de este artículo, por intereses económicos o de negocios de cualquier índole.*

*e) Cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos.”*

El trámite de la acción penal por delitos ambientales es el mismo que está determinada para los delitos en general, por tanto deben observarse las normas del código de procedimiento penal. Presentada la denuncia, el Fiscal asignado, exigirá al denunciante que la reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles originadas en la presentación de denuncias temerarias o maliciosas. La declaración juramentada y el reconocimiento serán asentados en acta suscrita por el Fiscal y el denunciante, si este último no supiere o no pudiere firmar, estampará su huella digital y firmará por el un testigo.

## **5.2. La Indagación Previa**

Si el Fiscal considera que los hechos que se denuncian deben ser previamente investigados, conforme lo establece el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal dará inicio a la Indagación Previa, en la cual con la colaboración de la Policía Judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos denunciados. Lo que le permitirá resolver si inicia o no la etapa de instrucción fiscal. (*Guaranda Mendoza, pág. 246*)

El artículo 215 del (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 38*), señala:

*“...Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su dirección,*

*investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento.*

*Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las cuales se requiera de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla.*

*De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación no podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, el fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa.*

*Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales.*

*Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la Policía Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la indagación previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. El personal de las instituciones mencionadas que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.”*

En caso de delitos flagrantes no será necesario el inicio de la Indagación Previa, por lo que el Fiscal deberá proceder inmediatamente a iniciar la Instrucción Fiscal.

En la etapa de indagación previa el Fiscal podrá realizar las siguientes diligencias:

- Declaración de los presuntos responsables;
- Declaración del o los denunciantes y los testigos que hubieren;
- Reconocimiento del lugar de los hechos, en presencia de peritos acreditados y de la Policía Judicial;



- Recopilación de información que sobre el delito ambiental tengan las instituciones del Estado encargadas del control ambiental (ministerio de minas y petróleos, Ministerio de Ambiente, Contraloría General del Estado, Gobiernos Provinciales y Municipales, etc.);
- Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas. Las demás diligencias que considere pertinente.

Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las cuales se requiera de autorización judicial, como por ejemplo realizar allanamiento a la empresa causante del delito, obtener pruebas personales u otras que requieran de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla, para cuyo efecto deberá solicitar de manera fundamentada al Juez correspondiente, la práctica de dichas diligencias.

En los delitos ambientales es característico que cierta prueba del delito, aun después del cometimiento del mismo, siga en manos del autor del delito o dentro del territorio bajo su dominio, como sucede en los delitos ambientales al interior de fábricas o dentro de los campos, estaciones o plataformas petroleras o en las áreas mineras concesionadas a terceros.

En los delitos ambientales la indagación previa no podrá prolongarse por más de un año, por ser delitos sancionados con pena de prisión, salvo que por dicho siniestro se ocasione la muerte de una persona, en cuyo caso se podrá prolongar la Indagación Previa hasta por dos años, pues la muerte de la persona eleva el rango de castigo de prisión a reclusión.

Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho, transcurrido el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal hará conocer al juez de garantías penales, quien verificará las exigencias legales y de ser el caso declarará la extinción de la acción y dispondrá el archivo definitivo del caso, calificando si la denuncia es maliciosa o temeraria.

Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. La información que se maneje en esta etapa será reservada, salvo el derecho del denunciante y acusado de tener acceso a ella.

La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con penas de reclusión.

### **5.3. Procedimiento**

El (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 63*), en su artículo 206, hace referencia a las etapas del proceso penal y establece lo siguiente:

*Art. 206.- “...Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas siguientes:*

- 1. La Instrucción Fiscal;*
- 2. La Etapa Intermedia;*
- 3. El Juicio; y*
- 4. La Etapa de Impugnación.”*

#### **5.3.1. La Instrucción Fiscal**

El Fiscal resolverá el inicio de la Instrucción Fiscal cuando considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona participación en un hecho delictivo. Si hubiere los suficientes motivos se deberá dictar un auto de instrucción, el cual deberá contener:

- La descripción del acto presuntamente punible, a fin de que todas las partes conozcan el objeto de la investigación;
- Los datos personales del imputado;
- Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación;
- La fecha de inicio de la instrucción;

- El nombre del fiscal a cargo de la instrucción.

En la etapa de Instrucción Fiscal, no se actúan pruebas, salvo los anticipos jurisdiccionales de prueba, que deben ser practicadas por los jueces penales, porque toda la actividad probatoria se la traslada a la etapa del juicio. En la etapa de Instrucción se investiga y en la etapa de juicio se prueba.

La Etapa de la Instrucción Fiscal concluirá dentro del plazo máximo de noventa días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, de ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el Juez. Si se realizan diligencias después de ese plazo, no tendrán valor alguno, concluido este plazo el fiscal deberá emitir su dictamen dentro de seis días.

Desde que el fiscal haya emitido su dictamen hasta ocho días posteriores a la notificación del mismo, se podrá presentar la acusación particular, no obstante aún sin ella, la causa proseguirá ya que se trata de una acción penal pública de instancia oficial.

Si el Fiscal no declara concluida la instrucción una vez vencido el plazo señalado, el Juez deberá declararla concluida.

Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, la misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la petición. El dictamen del fiscal puede ser acusatorio o puede abstenerse de acusar, en los dos casos el expediente será remitido al Juez.

Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le permita deducir que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe emitir dictamen acusatorio y requerir al juez de garantías penales que dicte auto de llamamiento a juicio, caso contrario se abstendrá de acusar.

## **La indagación previa y la instrucción fiscal**

*“Art. 215.- Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento.*

*Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para las cuales se requiere de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla.*

*La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.*

*Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales*

*Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en reserva del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y de las personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.”*

**“Art. 216.- Atribuciones del Fiscal.-** El Fiscal deberá, especialmente:

- 1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública;*
- 2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la prueba material;*
- 3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la obligación que tienen de presentarse a declarar ante el juez o ante el tribunal penal. Estos datos se consignarán en el acta que será suscrita por las personas intervinientes;*

4. Solicitar al juez que con las solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de concurrir cuando procesalmente le corresponda;
5. Impedir, por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado;
6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y ponerla, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a órdenes del juez competente;
7. Solicitar al juez que realice la identificación del sospechoso o del imputado, cuando el agraviado o los declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que consideran inculpada en el delito que es objeto del proceso, pero aseguren que la reconocerán si volvieren a verla. Esta diligencia, se cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las siguientes reglas:
  - a) El juez, el secretario y el agraviado, o el declarante en su caso pasarán al lugar donde se encuentre el sospechoso y, colocado éste en el puesto que hubiere escogido entre diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, el juez preguntará a la persona que debe realizar la identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el sospechoso;
  - b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, el juez ordenará que señale a la persona a quien se refirió en el momento de declarar; y,
  - c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta correspondiente, con las firmas del Juez, Secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se observará cuando se tratare de personas homónimas.
8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas;
9. Solicitar al Juez que dicte las medidas cautelares, personales y reales que el Fiscal considere oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas, cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir al Juez copias certificadas de lo actuado; y
10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la acusación.

*El Fiscal podrá delegar la práctica de las diligencias a que se refieren los numerales 2, 3 y 5 a la Policía Judicial o a investigadores especializados bajo la dirección de ésta.*

*El denunciante o cualquier persona que, a criterio del Fiscal deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está obligado a concurrir a la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo fin el Secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada en la residencia del notificado.*

*En caso de incumplimiento, el Fiscal o tribunal pueden hacer uso de la fuerza pública.”*

**“Art. 217.- Inicio de la Instrucción.-** El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona participación en un hecho delictivo. Si como medida cautelar o por tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de la libertad a alguna persona, el Fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la instrucción dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la aprehensión.

*La resolución del Fiscal contendrá:*

- 1) La descripción del hecho presuntamente punible;*
- 2) Los datos personales del imputado;*
- 3) Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación;*
- 4) La fecha de inicio de la instrucción; y,*
- 5) El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción.*

*El Fiscal notificará la resolución al juez, quien dispondrá que se notifique al imputado, al ofendido y a la oficina de la Defensoría Pública, para que designe un defensor.*

*Es obligación del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de sus defensores todas las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de naturaleza exculpatoria, de manera que el imputado ejerza su derecho de examinar todos los objetos, instrumentos y documentos recogidos durante la investigación. Si es requerido el Fiscal deberá entregar al imputado copias de todos los documentos relacionados con la infracción.”*

**“Art. 218.- Declaración del imputado.-** Durante la etapa de instrucción el Fiscal recibirá y reducirá a escrito con fidelidad y en presencia del abogado defensor, la versión libre que sin juramento proporcione el imputado sobre las circunstancias y móviles del hecho y sobre su participación o la de otras personas.

*La versión será firmada por el imputado, el agente Fiscal y el defensor. Si el imputado no supiere o no pudiere firmar, se hará constar este particular y a nombre suyo firmará un testigo.*

*Si no quisiere firmar, se hará constar este particular, y firmará un testigo.*

*El imputado podrá abstenerse de declarar.”*

**“Art. 219.- Imputado con síntomas de enfermedad mental.-** *Si el imputado mostrare síntomas de enfermedad mental, el Fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin nombrará y posesionará a dos médicos psiquiatras, quienes presentarán su informe por escrito, en el plazo que determine el fiscal; mientras tanto, no se le recibirá su declaración.*

*Si el informe pericial establece que la enfermedad mental es transitoria, el Fiscal postergará la recepción de la versión hasta el restablecimiento del imputado y proseguirá la substanciación de la instrucción.*

*Si el informe establece que la enfermedad mental es permanente, el Fiscal remitirá un informe al juez junto con la documentación respectiva a fin de que ordene el internamiento previsto en el Código Penal. De ser del caso, el Fiscal continuará con la etapa de la instrucción.”*

**“Art. 220.- Garantías del imputado.-** *En ningún caso se obligará al imputado, mediante coacción física o moral, a que se declare culpable de la infracción. Por lo mismo, queda prohibido, antes o durante la tramitación del proceso, el empleo de la violencia, de drogas o de técnicas o sistemas de cualquier género, que atenten contra la declaración libre y voluntaria del imputado. Los funcionarios, empleados o agentes de policía, del Ministerio Público y de la Policía Judicial que contravengan a esta disposición incurrirán en la sanción penal correspondiente.”*

**“Art. 221.- Vinculación con la instrucción.-** *En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona, el fiscal dictará resolución haciéndole extensiva la instrucción.”*

**“Art. 222.- Intervención del imputado.-** *El imputado puede presentar al Fiscal los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa. Si para obtenerlos se requiriere de orden judicial, el Fiscal la obtendrá del juez.”*

**“Art. 223. - Duración.-** La Etapa de la Instrucción Fiscal concluirá dentro del plazo máximo de 90 días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, de ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el Juez.

*Si el fiscal no declara concluida la instrucción una vez vencido el plazo señalado, el Juez debe declararla concluida. No tendrán valor alguno las diligencias practicadas después del plazo.”*

## **La conclusión de la instrucción fiscal**

**“Art. 224.- Conclusión.-** Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos de investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará concluida la instrucción y emitirá su dictamen dentro del plazo de seis días.

*Si hubiere sido necesaria la intervención del juez para disponer la conclusión de la instrucción, el Fiscal deberá emitir su dictamen en el plazo de seis días.*

*Si no lo hiciere, el juez comunicará el particular al Fiscal General, quien impondrá al Fiscal inferior una multa equivalente a cinco salarios mínimos vitales y le concederá un nuevo plazo de tres días para que cumpla su obligación. Si fenecido este plazo persistiere el incumplimiento, el Fiscal será destituido de su cargo y el expediente entregado a otro Fiscal, quien deberá dictaminar dentro del plazo que le señale el fiscal superior, el cual no podrá exceder de 30 días.”*

**“Art. 225.- Dictamen acusatorio.-** Cuando el Fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que le permita presumir que el imputado es autor o partícipe de la infracción, debe requerir por escrito al juez que dicte el auto de llamamiento a juicio, mediante dictamen acusatorio que contendrá:

- 1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias;*
- 2. El nombre y los apellidos del imputado;*
- 3. Los elementos en los que funda la acusación al imputado. Si fueren varios los imputados, la fundamentación deberá referirse, individualmente, a cada uno de ellos; y,*
- 4. La disposición legal que sanciona el acto por el que acusa*

*Con la acusación, debe remitir al juez el expediente que tenga en su poder.”*



*“Art. 226.- Falta de acusación.- Cuando el Fiscal estime que no hay mérito para promover juicio contra el imputado, emitirá su dictamen absteniéndose de acusar y pasará el expediente al juez.”*

### **5.3.2. La Etapa Intermedia**

Esta Etapa tiene como objeto el conocimiento, evaluación y resolución jurisdiccional de la acusación o del pedido de sobreseimiento que presenta el fiscal; y además conocer sobre los vicios formales del proceso, resolver las cuestiones sobre prejudicialidad, procedibilidad, competencia, etc. sobre las pruebas que serán presentadas en juicio. Es decir en esta etapa se enterará de los resultados de la instrucción y del planteamiento acusatorio o absolutorio del fiscal. Corresponde al Juez evaluar la procedencia o improcedencia de la posición del fiscal y del acusador particular si lo hubiere.

Una vez que el Juez escucha las alegaciones de las partes, deberá decidir si llama a juicio al acusado o dicta el sobreseimiento.

La Etapa Intermedia, constituye un mecanismo importante que impide que el criterio exclusivo del fiscal conduzca al imputado en forma directa e irremediable al juicio penal o al revés que la voluntad privativa del representante del Ministerio Público deje en la impunidad el acto delictivo.

El Juez, dentro de diez días posteriores a la notificación con el dictamen fiscal, convocará a las partes a una audiencia preliminar, la misma que se realizará en un tiempo no menor de diez días, ni mayor de veinte, desde la fecha de convocatoria.

A la audiencia comparecerán el imputado, el fiscal y el acusador particular si lo hubiere, con sus respectivos abogados.

Después de escuchar a las partes, el Juez leerá a las partes su resolución sobre todas las cuestiones planteadas, primeramente sobre los asuntos formales. De considerarlo necesario el Juez puede suspender la resolución hasta por veinte y cuatro horas. El juez tiene obligación también de notificar su decisión a las partes.

Si el Juez, considera que los resultados de la instrucción fiscal contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el imputado ha cometido el delito como autor, cómplice o

encubridor, dictará el correspondiente auto de llamamiento a juicio. El Juez debe tener en cuenta si al momento de dictar auto de llamamiento a juicio el acusado se encuentra prófugo se suspenderá la etapa del juicio, hasta que sea aprehendido o se presente voluntariamente ante la justicia. Si se decide llamar a juicio al acusado, deberá remitir el proceso a uno de los Tribunales Penales para que procedan al juzgamiento, si encuentra que las pruebas presentadas en la Audiencia no constituyen mérito para juicio, el Juez deberá dictar auto de sobreseimiento, el mismo que puede ser: Provisional del Imputado y, Provisional del Proceso; Definitivo del Imputado y Definitivo del Proceso y Provisional del Proceso y Definitivo del Imputado. En este auto se calificará a la acusación particular como maliciosa y temeraria.

Se deberá tomar en cuenta, si es sobreseimiento definitivo, el presunto responsable, se liberará de toda responsabilidad penal, por el delito que fue denunciado pero no probado.

En el caso de los sobreseimientos provisionales, la ley establece una vigencia de cinco años en casos de sobreseimiento del proceso y de tres años para el sobreseimiento del procesado para que de existir nuevos elementos que responsabilicen al sobreseído, se vuelva a reabrir la causa.

El artículo 246 del (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 76*), referente a los efectos del sobreseimiento y establece lo siguiente:

*“...Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del proceso o del procesado, el juez de garantías penales revocará el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del procesado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos cargos contra el sindicado.*

*El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por el mismo hecho.*

*El sobreseimiento definitivo del procesado impide que éste, en el futuro, pueda volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el mismo hecho.*

*El sobreseimiento provisional el proceso suspende la sustanciación del mismo durante cinco años; y, el sobreseimiento provisional del procesado lo suspende por tres años.*

*Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición del respectivo auto de sobreseimiento”*

Si se hubieran cumplido estos plazos y no se hubiere formulado una nueva acusación, el Juez de garantías penales dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado, a petición de parte o de oficio.

Después de notificado cualquiera de estos dos autos, de llamamiento a juicio o de sobreseimiento, cualquiera de las partes podrá interponer el recurso de apelación, para que la Corte Superior resuelva lo que se considere de autos. De esta resolución no cabe recurso alguno.

Si se ha dictado auto de llamamiento a juicio se pasará a la siguiente etapa del proceso que es la etapa de juicio.

*“Art. 227.- Consulta del expediente.- Presentado el dictamen Fiscal, el juez mandará que se lo notifique al imputado y al ofendido. Dispondrá además que el expediente se ponga a disposición de éstos, para que puedan consultarlo.”*

*“Art. 228.- Convocatoria.- Dentro de los diez días posteriores a la notificación con el dictamen Fiscal, el juez convocará a las partes a la audiencia preliminar, la misma que se realizará dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20, a contarse desde la fecha de la convocatoria.”*

*“Art. 229.- Audiencia.- En el día y hora señalados, el juez declarará instalada la audiencia y dispondrá que se escuche al imputado, al Fiscal y al acusador particular directamente o a través de sus abogados defensores, a fin de que presenten sus alegaciones con respecto a la existencia de requisitos de procedibilidad o de cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso.*

*A continuación, el juez concederá la palabra al Fiscal, al acusador particular y al defensor del imputado o al mismo imputado, a fin de que aleguen sobre los fundamentos del dictamen Fiscal y de la acusación particular, si la hubiere.*

*Las partes pueden presentar la evidencia documental que sustente sus alegaciones.”*

*“Art. 230.- Resolución.- Inmediatamente después de escuchar a las partes según lo previsto en el artículo anterior, el juez leerá a los presentes su resolución, la que versará sobre todas las cuestiones planteadas, debiendo resolver previamente las cuestiones formales.*

*De considerarlo necesario, el juez puede suspender la resolución y la audiencia hasta setenta y dos horas. Reinstalada la audiencia, el juez procederá a leer a las partes su resolución, conforme se dispone en el inciso anterior.*

*La resolución será también notificada a las partes por boleta.*

*El Secretario dejará constancia en acta de la organización y desarrollo de la audiencia.”*

*“Art. 231.- Consecuencia de la falta de acusación fiscal.- Cuando el Fiscal no haya acusado, el Juez, si considera necesaria la apertura del juicio o si se ha presentado acusación particular, ordenará que se remitan las actuaciones al Fiscal superior para que acuse o ratifique el pronunciamiento del inferior.*

*Si el pronunciamiento del inferior es ratificado, el juez debe admitir el dictamen Fiscal y dictar auto de sobreseimiento.*

*Tratándose de delitos sancionados con pena de reclusión, la consulta al Fiscal Superior, de parte del Juez será obligatoria.”*

### **5.3.3. El Juicio**

La Etapa de Juicio tiene tres propósitos fundamentales:

1. Probar la existencia del delito;
2. Probar la culpabilidad del infractor; y,
3. Establecer la pena correspondiente al delito cometido, de las medidas de seguridad y del pago del año causado al ofendido.

Si no se cumplen los numerales 1 y 2, obligatoriamente hay que absolver al imputado. Esta es la etapa donde se juzga la conducta de los acusados, en esta etapa el Tribunal Penal, debe escuchar a cada una de las partes, absolver cada una de las pruebas solicitadas y practicar diligencias que las partes soliciten para demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado o para establecer el

grado de responsabilidad por el delito cometido. Es decir que en esta fase del proceso se obtendrán las pruebas necesarias de cargo y de descargo para establecer la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hayan realizado en la etapa de Instrucción Fiscal, en la Audiencia Preliminar ante el Juez o de las nuevas pruebas que ordene el Tribunal Penal.

El Tribunal Penal está conformado por tres jueces permanentes rentados por la función judicial uno de ellos es el Presidente.

Esta etapa básicamente se divide en tres momentos:

1. Sustanciación ante el Presidente del Tribunal Penal;
2. Sustanciación ante el Tribunal Penal;
3. Sentencia.

#### **5.3.3.1. Sustanciación ante el Presidente del Tribunal Penal**

El Presidente señalará día y hora en que el Tribunal Penal debe instalarse en la audiencia pública. Este es el momento en que pueden ocurrir las excusas o recusaciones. Caso contrario, la audiencia se instalará no más tarde de diez días ni antes de cinco días contados desde la fecha de la providencia en que se convoque.

Mientras transcurre el plazo que se realice la audiencia pública, las partes podrán presentar una lista de testigos que declaren, así como pedir que se practiquen todas las pruebas necesarias durante la audiencia. El Presidente del Tribunal podrá pedir la cooperativa para conseguir la comparecencia de los testigos; es el encargado de la disciplina y la dirección de la audiencia.

#### **5.3.3.2. Sustanciación ante el Tribunal Penal**

Comprende el desarrollo de la audiencia, la verificación que estén todas las partes procesales, los testigos, peritos e intérpretes, para que se instale la audiencia, caso contrario se suspenderá para ser señalada en otra ocasión y se impondrá una multa a quienes no asistan.

Instalada la audiencia se harán las exposiciones orales de las partes, se realizarán las pruebas pedidas en su momento oportuno. Algo muy importante es que se receparán los testimonios del ofendido y del acusado. Concluida las pruebas se iniciará el debate, si fueren varios los acusados habrá un debate particular para cada uno de ellos.

#### **5.3.3.3. Sentencia**

Una vez habiéndose practicado el debate, el Tribunal Penal procederá a deliberar con vistas del proceso y practicadas todas las pruebas durante la Audiencia. Luego de la deliberación el Tribunal dictará deberá dictar la Sentencia que corresponda, pero podrá suspender su pronunciamiento para el día siguiente. La sentencia será notificada dentro de los tres días siguientes a su pronunciamiento.

La Sentencia deberá contener:

1. La mención del Tribunal Penal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y, apellido del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo;
2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime probados;
3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;
4. La parte resolutive, con mención de las disposiciones legales aplicadas;
5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y,
6. La firma de los jueces.

Si el Tribunal encuentra que el acusado es responsable del delito ambiental, deberá imponerle alguna de las penas que señala el capítulo X-A, “*DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE*” del Código Penal, desde el artículo 437A al 437K, dependiendo el nivel de infracción y los agravantes o atenuantes que se presenten.

Además de la sanción penal, el Tribunal debe condenar al responsable al pago de los daños y perjuicios ocasionados, en donde se debe tomar en cuenta a todos los afectados, no sólo a quienes se presenten como acusadores particulares o denunciante.

*“Art. 232.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el juez considera que de los resultados de la instrucción Fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio.*

*Si el Juez considera que los resultados de la Instrucción Fiscal no ameritan el auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso. Para el caso de delitos penados con reclusión, el Juez tiene la obligación de elevar en consulta su providencia a la Corte Superior de Justicia que será confirmada o revocada por el inmediato superior.*

*El auto debe contener:*

- 1.- La identificación del acusado;*
- 2.- El análisis prolijo de los resultados de la instrucción Fiscal;*
- 3.- La descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación del grado de participación del acusado;*
- 4.- (Reformado por el Art. 28 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003) La orden de detención en firme del acusado como autor o cómplice, y la de secuestrar, retener o prohibir la enajenación de sus bienes, precisándolos, si antes no se hubieren dictado; y,*
- 5.- La cita de las disposiciones legales aplicables.”*

*“Art. 233.- Suspensión.- Si al tiempo de dictar el auto de llamamiento a juicio, el acusado estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea aprehendido o se presentare voluntariamente, excepto en los procesos penales por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.”*

*“Art. 234.- Suspensión y continuación.- Si fueren varios los encausados, y unos estuviere prófugos y otros presentes, se suspenderá la sustanciación para los primeros y continuará respecto de los segundos.”*

**“Art. 235.- Encausado con caución.-** Si el encausado hubiere rendido caución, se notificará al garante con el auto de llamamiento a juicio en el domicilio judicial señalado, a fin de que haga comparecer al garantizado a la audiencia del tribunal penal, bajo las prevenciones legales.”

**“Art. 236.- Archivo de copia.-** Dictado el auto de llamamiento a juicio, el Secretario del juzgado sacará copia de dicho auto para el archivo antes de efectuar las notificaciones correspondientes.”

**“Art. 237.- Rechazo de incidentes.-** Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio no se admitirá ningún incidente, y de suscitarse alguno, el juez penal lo rechazará de plano e impondrá una multa equivalente al valor de hasta la cuarta parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, a quien lo provocó, sin ningún recurso.”

**“Art. 238.- Revocabilidad.-** Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio.”

**“Art. 239.- Envío del proceso.-** Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el juez remitirá de inmediato el proceso al tribunal penal, o si hubiere más de un tribunal penal, a la oficina de sorteos o a la que corresponda, donde no existiere dicha oficina.”

**“Art. 240.- Clases.-** El sobreseimiento puede ser:

1. Provisional del proceso y provisional del imputado;
2. Definitivo del proceso y definitivo del imputado; y,
3. Provisional del proceso y definitivo del imputado.”

**“Art. 241.- Sobreseimiento provisional.-** Si el Juez considera que los elementos en los que el Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito o la participación del imputado, no son suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien del imputado, o de ambos, declarando que, por el momento, no puede continuarse con la etapa del juicio.”

**“Art. 242.- Sobreseimiento definitivo.-** El sobreseimiento del proceso y del imputado será definitivo cuando el juez concluya que los hechos no constituyen



*delito, o que los indicios existentes no conducen de manera alguna a presumir la existencia de la infracción.*

*El juez dictará también auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado, si encuentra que se han establecido causas de justificación que eximan de responsabilidad al imputado.”*

**“Art. 243.- Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del imputado.-** Si el juez hubiere llegado a la conclusión de que los elementos que permiten presumir la existencia del delito son suficientes, pero no existen indicios de responsabilidad del imputado, dictará auto de sobreseimiento provisional del proceso y definitivo a favor del imputado.”

**“Art. 244.- Sobreseimiento por falta de acusación.-** Así mismo el juez, en mérito de la instrucción Fiscal, dictará el correspondiente sobreseimiento provisional o definitivo, del proceso o del imputado, si el Ministerio Público se ratificare en su decisión de no acusar.”

**“Art. 245.- Calificación de la denuncia y la acusación.-** El juez que dicte sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o maliciosas.

*El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y perjuicios.*

*En caso de que el juez también las hubiera calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderá, además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal.”*

**“Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.-** Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del proceso o del imputado, el juez revocará el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata libertad del imputado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos cargos contra el sindicado.

*El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por el mismo hecho.*

*El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste, en el futuro, pueda volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el mismo hecho.*

*El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo durante cinco años; y, el sobreseimiento provisional del imputado lo suspende por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición del respectivo auto de sobreseimiento.”*

**“Art. 247.- Nueva acusación.-** *Dentro de los plazos a los que se refiere el artículo anterior y sobre la base de nuevas investigaciones, el Fiscal podrá formular una nueva acusación.”*

**“Art. 248.- Sobreseimiento en firme.-** *Si se hubieran cumplido los plazos a los que se refiere el artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación, el juez dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el artículo 245 de este Código.”*

**“Art. 249.- Acciones por denuncia o acusación temerarias o maliciosas.-** *Si la denuncia o la acusación particular han sido calificadas en el auto de sobreseimiento definitivo como maliciosas o temerarias el que obtuvo a su favor el sobreseimiento podrá ejercer contra el denunciante o el acusador, las acciones respectivas conforme a lo establecido en este Código.”*

## **Principios Generales**

**“Art. 250.- Finalidad.-** *En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o absolverlo.”*

**“Art. 251.- Necesidad de la acusación.-** *La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio.”*

**“Art. 252.- Existencia del delito y culpabilidad.-** *La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción Fiscal, de la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el tribunal penal.”*

**“Art. 253.- Inmediación.-** El juicio se debe realizar con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes.

*Si el defensor del acusado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código.*

*Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del Tribunal designará un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el carácter de obligatorio para el acusado.”*

**“Art. 254.- Comparecencia del acusado.-** El acusado debe comparecer a juicio. Si estuviera bajo prisión preventiva, se tomarán las medidas necesarias para asegurar su comparecencia y evitar su evasión.”

**“Art. 255.- Publicidad.-** La audiencia del tribunal penal será pública; pero será reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos comprendidos en los Títulos I y VIII del Libro Segundo del Código Penal, y se realizará con la sola presencia del acusado, del acusador particular si lo hubiere, de los defensores, del Fiscal, y del secretario, y si fuere del caso, de los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la reserva, durante o después de la audiencia. No se admitirá la transmisión de la audiencia, a través de los medios de comunicación.

*En ningún caso, el juez o magistrado que conozca de una causa penal sometida a su resolución puede formular declaraciones públicas o privadas a los medios de comunicación social, ni antes ni después del fallo. La violación de esta prohibición será sancionada con su destitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que hubieren.”*

**“Art. 256.- Continuidad.-** El juicio debe continuar ininterrumpidamente hasta su conclusión. Excepcionalmente, y sólo por una vez, se puede suspender por un plazo máximo de cinco días, en los casos siguientes:

- 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias;*
- 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o traductores. Si en la reanudación, tampoco comparecen, el juicio debe continuar sin su presencia, luego de haberse dejado constancia de que fue imposible lograr su comparecencia;*
- 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el Fiscal, por cualquier impedimento insuperable no puedan continuar interviniendo en el juicio.*

*El tribunal debe notificar, junto con la suspensión, el día y hora en que debe continuar la audiencia.*

*Si la audiencia se prolongare excesivamente, el tribunal ordenará que se suspenda y dispondrá su continuación para el siguiente día hábil.”*

**“Art. 257.- Suspensión del juicio.-** *La rebeldía o la incapacidad sobrevinientes del acusado, interrumpen el juicio, el que deberá reiniciarse tan pronto cesen las circunstancias que motivaron la interrupción.”*

**“Art. 258.- Oralidad.-** *El juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente orales.*

*Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero debe dejarse constancia de ellas en el acta del juicio.”*

**“Art. 259.- Imposibilidad de asistencia.-** *Los testigos que no pudieren concurrir al juicio por un impedimento justificado, deben ser examinados en el lugar donde se hallen, por uno de los jueces del tribunal u otro juez, según el caso, y pueden participar en el acto todas las partes.”*

## **Tribunal Penal**

**“Art. 260.- Tribunales penales.-** *La integración, el nombramiento, los requisitos y la distribución territorial de los Tribunales Penales, se regirán por lo que disponga la Ley Orgánica de la Función Judicial.”*

**“Art. 261.- Designaciones.-** *Cada Tribunal Penal contará con el personal auxiliar que determinen las normas que rigen la organización administrativa de la Función Judicial.”*

## **Sustanciación ante el Presidente**

**“Art. 262.- Convocatoria para la audiencia.-** *Transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior, el Presidente señalará el día y la hora en que el Tribunal debe instalarse en audiencia pública o privada, según el caso.*

*Si no hubiese excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más tarde de diez días ni antes de cinco, contados desde la fecha de la providencia que la convoque.*

*Esta providencia se notificará inmediatamente a los otros jueces del tribunal, al fiscal, al acusado o a su defensor y, si los hubiere, al acusador particular y al garante.”*

**“Art. 263.- Excusa.-** *Si notificados los jueces del tribunal penal con la providencia en la que se convoca a la audiencia, alguno de ellos tuviere una causa de excusa, la pondrá en conocimiento del presidente, dentro del segundo día, para que, de ser legal, se llame al que deba remplazarlo.*

*Si el presidente tuviere motivo de excusa, lo hará conocer al juez segundo del tribunal, para los efectos determinados en el inciso anterior.”*

**“Art. 264.- Causas de excusa y de recusación.-** *Son causas de excusa y recusación de los jueces del tribunal penal las determinadas en el Código de Procedimiento Civil y además, las siguientes:*

- 1.- Ser cónyuge o pariente del acusador, del ofendido, del acusado o de sus defensores, o del Fiscal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;*
- 2.- Haber intervenido en el proceso como juez, testigo, perito, intérprete, defensor, acusador o secretario; y,*
- 3.- Estar ligado a las partes, al ofendido o a sus defensores por intereses económicos o de cualquier índole.*

*Los jueces del Tribunal Penal presentarán sus excusas con juramento.”*

**“Art. 265.- Recusación.-** *La parte que pretenda tener motivo de recusación contra los jueces del tribunal podrá proponerla dentro de tres días, contados desde la fecha de notificación del señalamiento para la audiencia. Propuesta la recusación, el presidente ordenará citar al juez a quien se recusa y, concederá tres días para la prueba, concluida la cual dictará sentencia dentro de cuatro días, la misma que no será susceptible de recurso alguno.*

*La recusación al presidente deberá presentarse ante el juez segundo del tribunal penal, quien procederá conforme lo dispuesto en el inciso anterior.”*

**“Art. 266.- Juez ad hoc.-** *Si por cualquier causa faltare un juez para integrar el tribunal, el presidente o quien haga sus veces designará a un abogado de*

*reconocido prestigio profesional como juez ad hoc, sin que, en ningún caso pueda integrarse el tribunal con más de un juez así designado.*

*El juez ad hoc actuará previo juramento y posesión ante el presidente.”*

**“Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.-** *Dentro del plazo fijado para que se reúna el tribunal, las partes presentarán una lista de los testigos que deben declarar en la audiencia, expresando la edad, los nombres, los apellidos, la profesión y residencia de ellos, y pedirán las demás pruebas a fin de que se practiquen durante la audiencia.”*

**“Art. 268.- Orden de comparecencia.-** *Mientras transcurre el plazo señalado para la audiencia, el presidente dará las órdenes convenientes para la comparecencia de los testigos y fijará día y hora en que deben comparecer ante el tribunal, previniéndoles que, de no hacerlo se procederá contra ellos en la forma prevista en el artículo 129 de este Código.”*

**“Art. 269.- Cooperación policial.-** *Las autoridades y agentes de policía auxiliarán obligatoriamente al presidente del tribunal penal para conseguir la comparecencia de los testigos, bajo sanción de una multa de hasta el equivalente a la tercera parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, que impondrá a quienes incumplieren la orden o actuaren negligentemente.”*

**“Art. 270.- Notificación a los testigos.-** *El secretario o el encargado de notificar a los testigos deberá comprobar la notificación con la firma de los notificados, o con la de un testigo conocido, si se hubiesen negado a firmar. La ausencia, el impedimento físico del testigo o la negativa de éste para firmar, constará en el acta respectiva, bajo la responsabilidad penal del secretario.”*

**“Art. 271.- Testigos residentes en otro lugar.-** *Si los testigos estuvieran ausentes del lugar del proceso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 130 de este Código. Pero si el presidente considera indispensable la presencia del testigo, ordenará que comparezca a la audiencia del tribunal, bajo prevenciones legales.”*

**“Art. 272.- Juez comisionado.-** *El juez comisionado recibirá el testimonio inmediatamente de llegado el despacho y lo devolverá al tribunal. Devuelto lo actuado, se agregará al proceso.*

*El Tribunal Penal no podrá dictar sentencia mientras no se haya recibido y agregado al proceso el despacho indicado.”*

*“Art. 273.- Testimonios urgentes.- En caso de enfermedad de los testigos o cuando éstos deban ausentarse del lugar del proceso, se les recibirá inmediatamente sus declaraciones. Si el testigo pretende ausentarse y su testimonio se considera fundamental, el presidente prohibirá que se ausente, aun haciendo uso de la fuerza pública.”*

*“Art. 274.- Disciplina.- Corresponde al presidente del tribunal el control de la disciplina en la audiencia.*

*El presidente del tribunal puede limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.*

*Puede también imponer arresto de hasta veinticuatro horas por la violación de los deberes previstos en el artículo siguiente.”*

*“Art. 275.- Deberes.- Quienes asistan a la audiencia deben permanecer en silencio y comportarse respetuosamente.*

*No pueden llevar armas u otros elementos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios.*

*“Art. 276.- Dirección de la Audiencia.- El presidente rechazará todo lo que prolongue inútilmente el debate y lo terminará oportunamente. Está investido de facultades para disponer cuanto estime necesario, recurriendo a todo lo que la ley no prohíbe expresamente.”*

## **Sustanciación ante el tribunal penal**

*“Art. 277.- Comparecencia.- En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia del tribunal comparecerán los jueces, el o los acusados, el acusador particular o el procurador común, si hubiere, los defensores, el fiscal y el secretario.*

*Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la audiencia no concurrieren uno o más de los miembros del tribunal, el presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la razón correspondiente e impondrá a los*

*ausentes una multa de hasta cuatro salarios mínimos vitales del trabajador en general salvo que la ausencia se deba acaso fortuito o fuerza mayor y, señalará nuevos día y hora para la audiencia del tribunal, audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes.*

*Lo mismo dispondrá en el caso de que no pueda celebrarse la audiencia por la causa señalada en el artículo siguiente.”*

**“Art. 278.- Audiencia fallida.-** *El presidente no podrá instalar la audiencia si no estuvieran presentes, además de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que hubieran sido notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere indispensable el tribunal.*

*Si por causa injustificada no concurrieren el fiscal, el secretario o el defensor del acusado, el tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo anterior.*

*De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, peritos o intérpretes, el presidente ordenará la detención de los que no hubiesen concurrido, hasta que se celebre la nueva audiencia del tribunal; pero los nombrados podrán evitar la detención justificando una evidente causa de fuerza mayor o caso fortuito, o si rinden caución que garantice su concurrencia a la nueva audiencia, caución que será fijada por el presidente, en la cantidad que estime justa de acuerdo con las posibilidades económicas del afectado.”*

**“Art. 279.- Procedimiento contra el rebelde.-** *Si un testigo, perito o intérprete se hubiera ocultado para no comparecer a la audiencia del tribunal, el presidente oficiará al fiscal que corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a fin de que sea sancionado según lo previsto en el Código Penal.”*

**“Art. 280.- Ausencia del acusado o del acusador.-** *Si el acusado estuviera en libertad bajo caución y no se presentare a la audiencia en la hora señalada, el tribunal dictará auto suspendiendo la sustanciación de la causa hasta que se presente voluntariamente, o sea aprehendido y además, hará efectiva la caución.*

*Si el acusador particular no compareciere personalmente, el tribunal penal declarará abandonada la acusación particular, sin que esta circunstancia obste la prosecución del juicio.*

*De las providencias previstas en este artículo y en los tres anteriores, no habrá recurso alguno.”*



**“Art. 281.- Ubicación de las partes.-** Constituido el tribunal, el presidente ordenará que el acusado y su defensor, se sitúen a su izquierda, frente al tribunal; y que el fiscal, el acusador particular y su defensor, se sitúen a su derecha, frente al tribunal.

*El público estará convenientemente separado.”*

**“Art. 282.- Incomunicación de los testigos.-** Los peritos y los testigos permanecerán en una habitación destinada al efecto, de la que no podrán salir mientras se cumpla la diligencia, sino para declarar. El presidente tomará las medidas necesarias para impedir que los peritos y los testigos hablen entre sí antes de haber declarado.”

**“Art. 283.- Facultades del presidente.-** El presidente adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la normal realización de la audiencia.”

**“Art. 284.- Comparecencia del acusado.-** El acusado debe comparecer a la audiencia.”

**“Art. 285.- Comienzo del juicio.-** En el día y hora fijados, el presidente del tribunal después de verificar la presencia del acusado, del fiscal, del acusador particular si lo hubiere, del ofendido, de los testigos, peritos o traductores, debe declarar abierto el juicio, advertir al acusado que esté atento a lo que va a oír y, ordenar la lectura del auto de llamamiento a juicio.”

**“Art. 286.- Exposición del Fiscal.-** A continuación, el fiscal expondrá el motivo de la acusación relatando los hechos, circunstanciadamente, sin emplear invectivas contra el acusado, y concluirá solicitando la práctica de las pruebas que determinará expresamente.”

**“Art. 287.- Testimonio del ofendido.-** A continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el ofendido.”

**“Art. 288.- Interrogatorio del Presidente.-** Una vez que el ofendido hubiese declarado su nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión, el presidente si fuere necesario le interrogará para obtener los datos siguientes:

1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción;
2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida;
3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de los demás testigos referenciales;
4. La forma en que fue cometida; y,
5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción.”

**“Art. 289.- Interrogatorio de los demás jueces y de las partes.-** Los demás jueces del tribunal y las partes procesales pueden interrogar al ofendido. El presidente del tribunal cuidará que las preguntas sean legales.”

**“Art. 290.- Exposición del acusador particular.-** El acusador particular, por sí mismo o a través de su abogado defensor, expondrá el motivo de su acusación, relatando los hechos de manera circunstanciada, sin emplear invectivas contra el acusado y concluirá solicitando la práctica de las pruebas que determine específicamente.”

**“Art. 291.- Testimonio de los peritos y testigos pedidos por el Fiscal y por el acusador particular.-** El presidente dispondrá de inmediato que el secretario llame uno a uno a los peritos y testigos solicitados por el Fiscal y el acusador, en el orden establecido en la lista prevista en el artículo 267 de este Código.

El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de su obligación de decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados, bajo las prevenciones de ley. A los peritos y testigos les interrogará si están comprendidos en las prohibiciones del artículo 126.

Los peritos y los testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser interrumpidos por persona alguna.”

**“Art. 292.- Lectura de testimonios anticipados.-** Si el testigo hubiera declarado en la etapa de instrucción como anticipo jurisdiccional de prueba, se ordenará que el secretario lea esa declaración, antes de recibir el nuevo testimonio. Si en este nuevo testimonio se advirtiera alguna contradicción o variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique la diferencia.”

**“Art. 293.- Presunción del perjurio.-** Si el tribunal observare que el declarante ha incurrido en alguno de los casos previstos en el artículo 137 de este Código, el presidente ordenará la detención para los efectos señalados en dicho artículo.”

**“Art. 294.- Interrogatorios.-** Concluida la declaración del perito o del testigo, el presidente y los miembros del tribunal podrán interrogarles para que amplíen o aclaren puntos especiales de su declaración.

Terminado el interrogatorio de los jueces, podrán interrogar al testigo el Fiscal, el acusador particular mediante su defensor y el acusado o su defensor.

El presidente cuidará que las preguntas no sean capciosas, impertinentes o sugestivas.”

**“Art. 295.- Declaración del acusado.-** Al rendir su testimonio el acusado indicará sus nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio residencia, estado civil, oficio u ocupación. El presidente dispondrá que el acusado haga una exposición completa sobre el hecho que motiva su presencia en el tribunal y le hará las preguntas conducentes, cuidando en todo caso que, las preguntas sean directas acerca de la infracción e indirectas respecto del acusado y, en ningún caso, capciosas, sugestivas o que tiendan a incriminarle.

Luego de su declaración, pueden interrogarlo los demás jueces del tribunal, el Fiscal, el acusador particular y su propio defensor, en ese orden. En cualquier momento, el acusado puede consultar con su defensor antes de responder una pregunta o puede negarse a contestar las preguntas que se le formulen. El presidente calificará la procedencia de las preguntas.”

**“Art. 296.- Reconocimiento de objetos y vestigios.-** Concluida la declaración, cuando sea del caso, se hará que el acusado, si lo quisiere, reconozca los instrumentos con que se hubiese cometido la infracción, los vestigios que ésta haya dejado y los objetos que hubieren quedado en el lugar en que se perpetró. Reconocidos que fueren, le preguntará el presidente si anteriormente ha conocido los mencionados instrumentos u objetos, en poder de qué personas, en qué lugar, en qué fecha y en qué circunstancias.

De todo lo que dijere el acusado se dejará constancia en el acta de la audiencia.”

**“Art. 297.- Exposición del Defensor.-** El defensor hará una exposición detallada de los hechos y circunstancias que fueren favorables para su defendido y concluirá pidiendo la práctica de las pruebas que determinará expresamente.”

**“Art. 298.- Testimonios solicitados por el acusado.-** El presidente ordenará que el secretario llame uno a uno a los peritos y testigos de la lista presentada por el acusado, según el orden que conste en la lista prevista en el artículo 267, para que también sean examinados, en la misma forma en que se procedió con los testigos propuestos por el Fiscal y el acusador particular.”

**“Art. 299.- Testimonios solicitados en la audiencia.-** Examinados los peritos y los testigos anteriores, el presidente ordenará que se llame a los propuestos por las partes dentro de la audiencia, debiendo observarse las mismas reglas previstas para los testigos que les precedieron.”

**“Art. 300.- Ampliación de los testimonios.-** Terminada la declaración, el perito o el testigo regresará al lugar en que se encontraba antes de salir a declarar, del que no podrá retirarse hasta que el presidente declare abierto el debate.

El presidente, por sí o a pedido de las partes, podrá ordenar que los peritos y los testigos que ya hubiesen declarado se presenten para ampliar sus declaraciones.”

**“Art. 301.- Otras pruebas.-** El presidente tendrá la facultad de llamar a cualquier persona para interrogarla y de ordenar que se exhiban ante el tribunal los objetos o documentos que considere necesarios para esclarecer el hecho o alguna circunstancia alegada por las partes.”

**“Art. 302.- Inicio del debate.-** Concluida la prueba, el presidente mandará que se inicie el debate. Si fueren varios los acusados, habrá un debate particular sobre cada uno de ellos, en el orden que indique el presidente.”

**“Art. 303.- Alegatos.-** El Fiscal será oído primeramente, y su alegato se reducirá a una exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado; de las pruebas rendidas durante la audiencia y de las que constan en el proceso, con el análisis que creyere conveniente hacer, pudiendo manifestar al tribunal el valor procesal de las circunstancias alegadas por las partes; determinará si el acusado es autor, cómplice o encubridor y pedirá la imposición de la pena correspondiente, en caso de encontrarle responsable.

Cuando haya acusador particular hablará después del fiscal. En su exposición observará las normas establecidas en el inciso anterior y concluirá solicitando las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea procedentes.

*Contestará después el defensor. Será permitida la réplica, pero concluirá siempre el defensor.”*

*“Art. 304.- Conclusión del debate.- Una vez que concluya de hablar el acusado o su defensor, el presidente declarará cerrado el debate.”*

## **Capítulo V**

### **La Sentencia**

*“Art. 305.- Deliberación.- Terminado el debate y una vez elaborada el acta del juicio, el Presidente ordenará a las partes y al público que se retiren. A continuación, el tribunal, procederá a deliberar con vista del proceso y de las pruebas practicadas durante la audiencia.*

*Mientras dure la deliberación no se permitirá la entrada a ninguna persona y el presidente dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de este precepto.”*

*“Art. 306.- Expedición de la sentencia.- Luego de la deliberación, el tribunal dictará la sentencia, pero podrá suspender su pronunciamiento para el día siguiente.”*

*“Art. 307.- Acta del Juicio.- El secretario debe elaborar un acta sobre el juicio que contendrá:*

- 1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de su suspensión y reanudación;*
- 2. El desarrollo del juicio, con mención del nombre y apellido de los jueces, de las partes, testigos, peritos, traductores, los elementos de prueba producidos durante la audiencia y las grabaciones magnetofónicas, de video, o electrónicas efectuadas, que se anexarán al acta; y,*
- 3. Las peticiones y decisiones producidas en el curso del juicio, y las conclusiones finales de las partes.*

*El acta debe ser firmada por el secretario.”*

*“Art. 308.- Votos necesarios y pena favorable.- Tanto para la absolución como para la condena se necesitan dos votos. Si la mayoría hubiere condenado, pero se*

*produjere disparidad en la tipificación del delito, en la calificación de la responsabilidad o en la determinación de la pena, se aplicará lo que fuere más favorable al reo.”*

**“Art. 309.- Requisitos de la sentencia.-** *La sentencia deberá contener:*

- 1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo;*
- 2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime probados;*
- 3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;*
- 4. La parte resolutive, con mención de las disposiciones legales aplicadas;*
- 5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y,*
- 6. La firma de los jueces.”*

**“Art. 310.- Varios acusados.-** *Si fueren varios los acusados, el tribunal debe referirse en la sentencia a cada uno de ellos, indicando si son autores, cómplices o encubridores, o declarando, en su caso, la inocencia.”*

**“Art. 311.- Absolución.-** *La sentencia absolutoria no puede estar sujeta a condiciones. Debe ordenar la cesación de todas las medidas cautelares y resolver sobre las costas.”*

**“Art. 312.- Condena.-** *La sentencia condenatoria deberá mencionar cómo se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; determinará con precisión el delito por el cual se condena y la pena que se impone. También debe determinar, cuando corresponda, la suspensión condicional de la pena y debe fijar el plazo dentro del cual se ha de pagar la multa.*

*Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el decomiso y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley.”*

**“Art. 313.- Pronunciamiento.-** *La sentencia debe expedirse dentro del tercer día posterior a la clausura del juicio. La sentencia se debe pronunciar siempre en nombre de la República y por Autoridad de la Ley.*

*Redactada la sentencia, el tribunal debe regresar a la sala de audiencia, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el juicio y, el documento debe ser leído ante los que comparezcan.”*

**“Art. 314.- Notificación.-** *La sentencia será notificada dentro de los tres días posteriores al pronunciamiento, bajo sanción de una multa equivalente a la cuarta parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, que se impondrá al secretario, por cada día de retraso.”*

**“Art. 315.- Limitación de la sentencia.-** *El tribunal no podrá pronunciar sentencia sobre hechos que no tengan relación o conexión con los determinados en el auto de llamamiento a juicio; ni dejar de pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos.”*

**“Art. 316.- Firma de la sentencia.-** *La sentencia se firmará por todos los jueces del tribunal, aun cuando alguno haya sido de opinión contraria a la mayoría. Si alguno se negare o no pudiere firmar, el secretario anotará esta circunstancia en el proceso y la sentencia expedida seguirá su curso normal. Puesto el hecho en conocimiento de la respectiva Corte Superior, ésta destituirá al infractor. El juez sancionado no podrá ser elegido miembro de ningún Tribunal Penal de la República.*

*En todos los casos en que, por imposibilidad física o fuerza mayor debidamente comprobadas, alguno de los jueces no pudieran firmar la sentencia luego de haber sido expedida y firmada por los otros dos, sentada la respectiva razón de este particular por el secretario, dicho fallo surtirá efecto y seguirá su curso legal.”*

**“Art. 317.- Votos salvados.-** *Cuando algún juez haya sido de opinión contraria a la mayoría, esa opinión deberá constar en voto salvado, que será firmado por todos los jueces del Tribunal.”*

**“Art. 318.- Delito diverso.-** *Si hallándose la causa ante el tribunal, aparece prueba de que el acusado ha cometido otro delito diverso de la infracción por la que se le juzga, el tribunal pronunciará la respectiva sentencia, absolviendo o condenando, y ordenará que se siga un nuevo proceso por el delito o delitos que se hubieran descubierto.*

*Si mientras se sustancia el nuevo proceso transcurriese el tiempo al que fue condenado el reo, se le pondrá en libertad si en dicho proceso no se hubiera dictado auto de prisión preventiva.”*

*“Art. 319.- Libertad inmediata.- Si el acusado fuere absuelto, el presidente ordenará su inmediata libertad, a pesar de cualquier recurso que se interpusiere, sin perjuicio del cumplimiento de la pena que se llegare a imponer si la absolución fuere revocada.*

*La sentencia condenatoria no se ejecutará mientras no se encuentre ejecutoriada.”*

*“Art. 320.- Prohibición.- En ningún caso le será permitido al tribunal ni a juez alguno hacer calificaciones ofensivas respecto del acusado, debiendo limitarse a un examen escueto de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ello se deriven.”*

## **5.4. La Etapa de Impugnación**

Serán impugnables todos los autos y sentencias en los casos y formas establecidos en el Código de Procedimiento Penal, dentro de los tres días hábiles posteriores al auto de sentencia, es decir en esta etapa el imputado o acusado según corresponda o algún otro sujeto procesal o parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o resolución con la presentación de los recursos tales como:

- Recurso de apelación,;
- Recurso de nulidad;
- Recurso de revisión;
- Recurso de casación, y;
- Recurso de hecho

Mismos que se encuentran establecidos en el Código Penal ecuatoriano en sus artículos 343, 330, 360, 361 349, 350 y 321, donde se refieren a los casos en los que son procedentes dichos recursos.

### **5.4.1. Marco legal código de procedimiento penal del recurso de hecho**

*“Art. 321.- Procedencia.- El recurso de hecho se concederá cuando el Juez o Tribunal Penal hubieren negado los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentran expresamente señalados en este Código.*



*Este recurso se interpondrá ante el Juez o Tribunal que hubiere negado el recurso oportunamente interpuesto, dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto que lo niega.*

*Interpuesto el recurso, el Juez o Tribunal, sin ningún trámite, remitirá el proceso a la Corte Superior, la que admitirá o denegará dicho recurso.”*

**“Art. 322.- Recurso infundado.-** *Si el recurso de hecho hubiera sido infundadamente interpuesto, la Corte Superior lo desechará e impondrá al recurrente una multa de hasta tres salarios mínimos vitales del trabajador en general.*

*Si el recurso de hecho fuere aceptado y se tratare de apelación o de nulidad, la Corte Superior entrará a conocer y resolver la causa en lo principal; o remitirá el proceso a la Corte Suprema de Justicia si se tratare de los recursos de casación o de revisión.*

*El Superior, al aceptar el recurso de hecho, impondrá una multa equivalente a la mitad de un salario mínimo vital del trabajador en general al Juez o Tribunal que ilegalmente negó el recurso.*

*De las multas impuestas no habrá recurso alguno.”*

**“Art. 323.- Resolución del recurso.-** *La Corte Superior resolverá el recurso de hecho sin ningún trámite, dentro del plazo de ocho días contado desde el momento en que recibió el proceso.”*

**“Art. 324.- Facultad de impugnar.-** *Las sentencias, autos y resoluciones son impugnables sólo en los casos y formas expresamente establecidos en este Código.*

*Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes.*

*El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede desistir de los recursos interpuestos por su defensor.”*

**“Art. 325.- Interposición.-** *Para ser admisibles, los recursos deben ser interpuestos dentro del plazo y según la forma que determine la ley.*

*Al concederse un recurso se emplazará a las partes para que concurran ante el Superior para hacer valer sus derechos.”*

**“Art. 326.- Desistimiento.-** *Quien haya interpuesto un recurso, puede desistir de él.*

*El defensor no puede desistir de los recursos sin mandato expreso del imputado o acusado.”*

**“Art. 327.- Efectos.-** *Cuando en un proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto por uno de ellos, beneficiará a los demás, siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente personales.*

*Este beneficio será exigible aunque mediere sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de uno de los acusados.*

*La interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.”*

**“Art. 328.- Limitación.-** *Ningún Tribunal Superior podrá empeorar la situación jurídica del acusado, si fuere el único recurrente.”*

**“Art. 329.- Excarcelación.-** *Cuando hallándose el proceso ante un juez superior, por haberse interpuesto algún recurso, venciére el tiempo de la pena impuesta, el juez inferior ordenará que se excarcele al correspondiente penado, en cuanto hubiese cumplido la condena, con la obligación de presentarse, una vez por semana, ante el juez, si fuere posible, o ante la autoridad de policía que él señale, hasta que el Superior devuelva la causa.*

*La autoridad de policía designada será advertida en la correspondiente comunicación de este deber del excarcelado y tal autoridad fijará día y hora de la presentación.”*

## **Recurso de nulidad**

**“Art. 330.- Causas de nulidad.-** *Habrà lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes casos:*

- 1. Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia;*
- 2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de este Código; y,*
- 3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa.”*

**“Art. 331.- Declaración de nulidad.-** Si al momento de resolver un recurso, la Corte respectiva observare que existe alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo anterior, estará obligada a declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que se produjo la nulidad a costa del funcionario u órgano jurisdiccional que la hubiere provocado.

Sin embargo, se declarará la nulidad solamente si la causa que la provoca tuviera influencia en la decisión del proceso.

Si se hubiere omitido algún acto procesal necesario para la comprobación de la existencia de la infracción, en cualquier etapa del proceso, se mandará a que se lo practique, sin anularlo.”

**“Art. 332.- Interposición del recurso por las partes.-** El recurso de nulidad podrá interponerse por las partes, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de sobreseimiento, o de llamamiento a juicio, haciendo constar la causa de la nulidad.”

**“Art. 333.- Otorgamiento del recurso.-** El juez o el presidente del tribunal, en su caso, concederán el recurso de nulidad si se lo hubiere interpuesto en el plazo legal; y, en la misma providencia, recibirá la causa a prueba por el plazo de seis días, si la nulidad alegada contuviere hechos sujetos a justificación.”

**“Art. 334.- Conclusión del plazo y remisión del proceso.-** Concluido el plazo de prueba, se remitirá inmediatamente el proceso original a la respectiva Corte Superior, previa notificación a las partes, dejando copia del auto o sentencia recurridos.”

**“Art. 335.- Interposición conjunta de los recursos de nulidad y apelación.-** Si en el proceso se hubieren interpuesto tanto el recurso de nulidad, como el de apelación, la Corte Superior resolverá en primer término el de nulidad y, si el mismo fuese desechado, resolverá sobre el de apelación.”

**“Art. 336.- Sustanciación del recurso.-** La Corte Superior, sustanciará el recurso de nulidad, ordenando que el recurrente fundamente el mismo, dentro del plazo de tres días. Realizada la fundamentación, se correrá traslado con la misma a las otras partes procesales para que la contesten, así mismo en el plazo de tres días.”

**“Art. 337.- Interposición del recurso por parte del Agente Fiscal.-** Si el recurso lo hubiere interpuesto el Agente Fiscal, la Corte oír, en primer lugar, al Ministro

*Fiscal, concediéndole un plazo de tres días dentro del que podrá insistir en el recurso o desistir del mismo. Si insiste en el recurso, deberá fundamentarlo, hecho lo cual se correrá traslado a las otras partes para que lo contesten también en el plazo de tres días.”*

**“Art. 338.- Desistimiento del recurso.-** *Si el Ministro Fiscal desiste del recurso de nulidad, y siempre que el mismo no hubiere sido interpuesto por ninguna de las otras partes, la Corte ordenará que se devuelva el proceso para que se ejecute la providencia recurrida.”*

**“Art. 339.- Resolución sobre el recurso.-** *Con la contestación de los traslados previstos en los artículos 336 y 337 o en rebeldía, la Corte Superior pronunciará la resolución correspondiente, de la que no podrá interponerse recurso alguno.”*

**“Art. 340.- Rechazo del recurso.-** *Si el recurso de nulidad fuere rechazado, se devolverá el proceso al inferior que corresponda, para que ejecute la providencia impugnada.”*

**“Art. 341.- Aceptación del Recurso.-** *Si la Corte Superior aceptare el recurso de nulidad, y ésta se hubiera producido total o parcialmente en la etapa de instrucción fiscal, la Corte remitirá el proceso a un Fiscal Penal diferente, para que sustancie dicha etapa, desde el momento procesal en que se produjo la causa que dio lugar a la nulidad.*

*Si la nulidad se hubiere producido en la etapa del juicio, el proceso será remitido a otro tribunal penal, para que proceda a sustanciar dicha etapa, así mismo a partir del momento procesal en que se produjo la causa que generó la nulidad.”*

**“Art. 342.- Condena en costas.-** *Siempre que se reponga el proceso por causa de nulidad, se condenará en costas al funcionario, juez o tribunal que hubiera causado la nulidad.”*

## **Recurso de apelación**

**“Art. 343.- Procedencia.-** *Procede el recurso de apelación cuando alguna de las partes lo interponga en los siguientes casos:*

*1. Del auto de sobreseimiento;*

2. *Del auto de llamamiento a juicio;*
3. *De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa de incompetencia;*
4. *De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el Juez o Tribunal, conforme al procedimiento previsto en este Código;*
5. *De la sentencia de acción privada;*
6. *De la sentencia sobre la reparación del daño; y,*
7. *De la sentencia dictada en el proceso abreviado.”*

**“Art. 344.- Interposición.-** *El recurso de apelación se debe interponer mediante escrito fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia.*

*Interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin dilación alguna, elevará el proceso al superior.”*

**“Art. 345.- Trámite.-** *Una vez recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior respectiva debe resolver el recurso por el mérito de los autos, dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha de recepción del proceso. Previamente debe resolver, como cuestión previa, sobre la admisibilidad del recurso.”*

**“Art. 346.- Resolución de la Sala.-** *Si al resolver la apelación, la Corte Superior considera que no procede el sobreseimiento sino el auto de llamamiento a juicio, lo debe dictar conforme lo previsto en este Código.”*

**“Art. 347.- Decisión definitiva.-** *De lo que resuelva la Corte Superior respecto de la apelación no cabe recurso alguno. Ejecutoriado el fallo se debe remitir el proceso al juez o tribunal para su inmediato cumplimiento.”*

**“Art. 348.- Confirmación por el ministerio de la ley.-** *Si la Corte Superior no resolviera la apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de noventa días, éste quedará confirmado en todas sus partes. El plazo correrá a partir de la fecha de recepción del proceso en la sala respectiva.”*

## Recurso de casación

**“Art. 349.- Causales.-** El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema de Justicia cuando en la sentencia se hubiera violado la Ley; ya por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente.”

**“Art. 350.- Plazo.-** El recurso de casación se concederá si se lo interpone dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, y se remitirá el proceso de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.”

**“Art. 351.- Titulares.-** El recurso de casación podrá ser interpuesto por el agente fiscal, el acusado o el acusador particular.”

**“Art. 352.- Plazo para fundamentar.-** Recibido el proceso y si el recurso estuviere debidamente interpuesto, la Sala de Casación dispondrá que el recurrente fundamente el recurso dentro del término de diez días. Si no lo fundamentare, declarará, de oficio o a petición de parte, la deserción del recurso.”

**“Art. 353.- Fundamentación.-** El recurso se fundamentará por escrito.”

**“Art. 354.- Fundamentación por el Ministerio Público.-** Si el recurso se hubiere interpuesto por el Ministerio Público, quien deberá fundamentarlo será el Ministro Fiscal General.”

**“Art. 355.- Traslado.-** El escrito de fundamentación, se pondrá en conocimiento de las otras partes que intervinieren en el proceso, para que lo contesten en el plazo de diez días.”

**“Art. 356.- Señalamiento de audiencia.-** Con la contestación o en rebeldía, la Corte Suprema señalará fecha para oír alegatos en audiencia, si lo solicitare alguna de las partes.”

**“Art. 357.- Trámite.-** Instalada la audiencia, el Presidente concederá el uso de la palabra al recurrente y a continuación, a las otras partes procesales en el orden que señale. En todo caso, el defensor del acusado será oído al último.”

**“Art. 358.- Sentencia.-** Si la Corte Suprema estimare procedente el recurso pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, lo declarará así en sentencia y devolverá el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Si la Sala observare que la sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya sido equivocada.”

## **Recurso de revisión**

**“Art. 359.- Objeto.-** El recurso de revisión por una de las causas en el artículo siguiente, podrá proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria.”

**“Art. 360.- Causas.-** Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes casos:

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada;
3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados;
4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó;
5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,
6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere la sentencia.

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.”

**“Art. 361.- Recurrente.-** La revisión por el primer caso la intentará el reo, o cualquier persona, o el mismo tribunal de oficio, cuando resulte la aparición del que se creía muerto o se presenten pruebas que justifiquen plenamente la existencia del que se creía muerto con posterioridad a la fecha de la supuesta infracción.

*En los demás casos sólo podrá interponerlo el condenado; pero si hubiera fallecido, podrán hacerlo su cónyuge, sus hijos, sus parientes o herederos.”*

**“Art. 362.- Fundamentación.-** *La solicitud de revisión estará debidamente fundamentada y deberá contener la petición de prueba, así como el señalamiento de la casilla judicial en la Capital.”*

**“Art. 363.- Remisión del proceso.-** *Presentado el recurso, el presidente del tribunal penal o el presidente de la Corte respectiva, en los casos de fuero, remitirá el proceso, sin dilación alguna a la Corte Suprema de Justicia.”*

**“Art. 364.- Término de prueba.-** *El presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de las partes la recepción del recurso y del proceso y abrirá la causa prueba por diez días.”*

**“Art. 365.- Dictamen.-** *Fenecido el término de prueba se llevará el proceso a conocimiento del Ministro Fiscal General para que emita su dictamen en quince días.”*

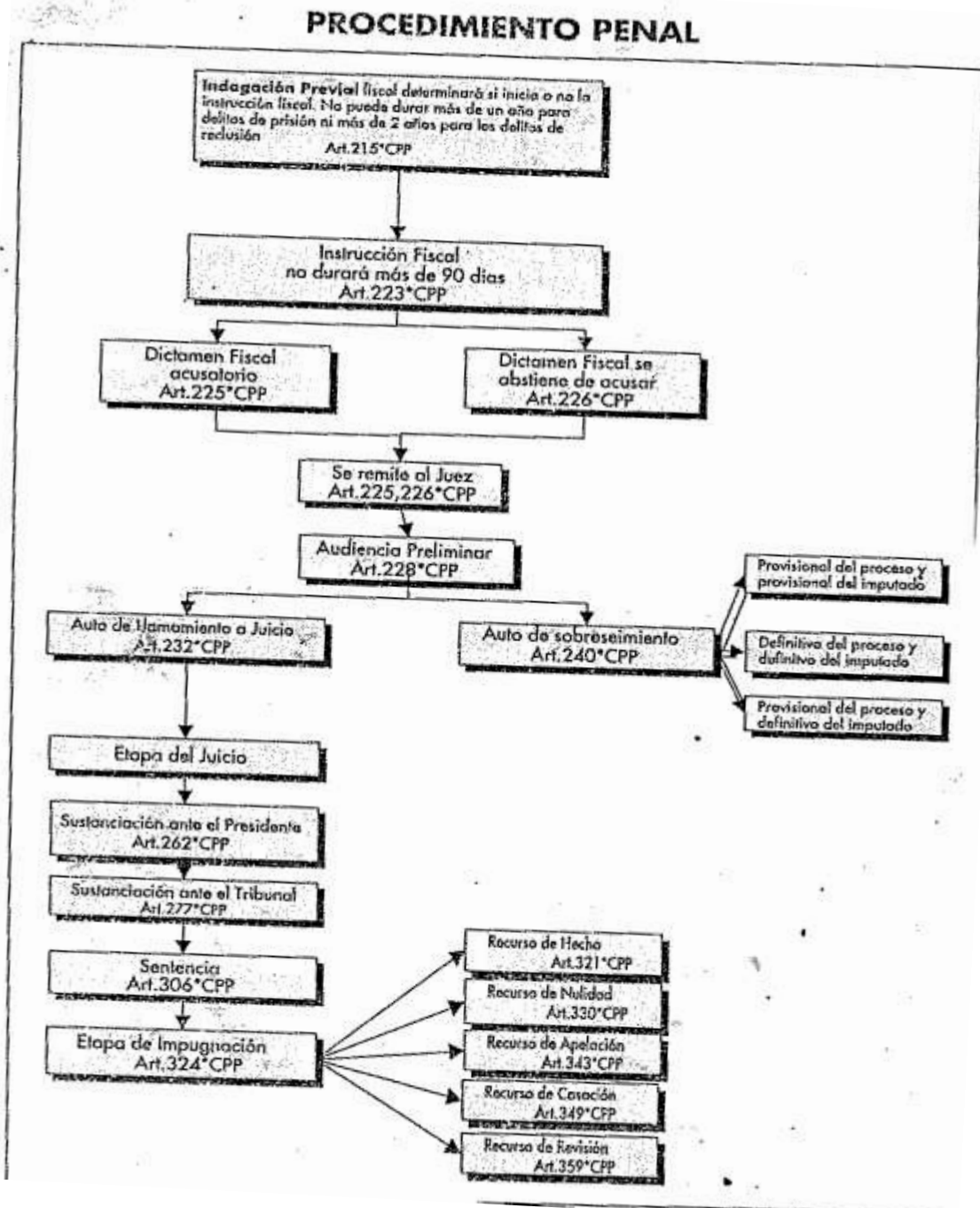
**“Art. 366.- Audiencia.-** *Con el dictamen fiscal, o en rebeldía, el presidente de la Sala convocará a una audiencia en la que el recurrente, por sí mismo o por medio de su defensor, alegará verbalmente. Podrá también intervenir el Ministro Fiscal General, o su delegado debidamente acreditado, pero el recurrente tendrá derecho a la réplica.”*

**“Art. 367.- Sentencia.-** *Cuando la Corte Suprema de Justicia encuentre que es procedente la revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara improcedente lo declarará así, y mandará que el proceso sea devuelto al tribunal de origen.”*

**“Art. 368.- Nueva revisión.-** *Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria de la anterior, impedirá que pueda proponerse una nueva revisión fundamentada en una causa diferente.”*



## 5.5. Mapa conceptual procedimiento penal



(Calisto, Guerrero, Hernández, & Zuquilanda, pág. 52)

## 5.6. Medidas Cautelares

En general, las medidas cautelares son medidas preventivas que tienen por objeto garantizar la efectividad de la sentencia y evitar que ésta sea meramente ilusoria. Son medidas que buscan mantener la situación como está al momento de iniciarse el juicio a fin de evitar que ocurra mayor daño o que desaparezcan los objetos que aseguran el cumplimiento de la sentencia.

En materia constitucional, las medidas cautelares están orientadas a evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, según el artículo 87 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 40), el cual dispone lo siguiente “...*Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.*”

Se puede pedir medidas cautelares en las acciones de protección más no en las de incumplimiento ni extraordinaria de protección.

El **artículo 437-K**, del (*Código de procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 (Vigente), 2000, pág. 108*), establece:

*“El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.”*

Esta disposición, debería convertirse en el principal elemento de prevención ambiental, y de sanción para aquellas personas que de forma dolosa o irresponsable atentan contra el ambiente.

En el caso penal identificamos dos tipos de medidas cautelares concretas:

- La suspensión inmediata de la actividad contaminante; y,
- La clausura definitiva o temporal del establecimiento.

Pudieran existir otras medidas cautelares para prevenir la perpetuación del daño, sin embargo en base al principio de tipicidad y legalidad que le caracteriza al derecho penal, en este caso no podría extenderse otras medidas cautelares. Esto sin perjuicio que la autoridad ambiental administrativa ordene otras medidas de conformidad con el último inciso del Art. 437K, lo cual nos demuestra que el campo de aplicación de medidas cautelares para protección del ambiente es amplio, solo es cuestión de la decisión política de los jueces y autoridades administrativa de aplicarla en cada caso concreto.

## **5.7. Materia contencioso administrativa**

En caso de que los funcionarios públicos incumplan con las disposiciones legales y que por ello a través de una acción u omisión de su parte se incumplan las normas relativas a temas ambientales cualquier persona natural o jurídica, puede pedir al superior jerárquico la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que fueren del caso:

### **a) Competencia**

Agotada o no la vía administrativa se puede acudir ante el correspondiente tribunal de lo Contencioso Administrativo y proseguir con el trámite previsto en la Ley.

### **b) Procedimiento**

Los tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo se encuentran bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, dotado de autonomía en el ejercicio de las funciones. Están conformados por tres magistrados en cada sala.

Existen cuatro tribunales en el país:

No. 1 con Sede en Quito e integrado por dos salas, tendrá jurisdicción en las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo y Sucumbíos.

No. 2 con Sede en Guayaquil e integrado por una sala, tendrá jurisdicción en las provincias de Guayas, Ríos, El Oro y Galápagos.

No. 3 con Sede en una Cuenca e integrado por una sala, tendrá jurisdicción en las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y,

No. 4 con Sede en Portoviejo e integrado por una sala, tendrá jurisdicción en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

El recurso Contencioso Administrativo puede interponerse, contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado y vulneren un derecho o interés directo del demandante.

También se puede interponer el recurso contencioso administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares, establecidos o reconocidos por una ley.

Se pueden dos recursos contenciosos administrativos:

- Recurso de Plena Jurisdicción;
- Recurso de Anulación u objeto.

El Recurso de Plena Jurisdicción, ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se tendrá el término para deducir esta demanda es de tres meses, pero se contará solamente días hábiles.

Recurso de Anulación, objeto o por exceso de poder, el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. Se podrá proponer esta demanda en cualquier tiempo, sin que pueda alegarse prescripción, atento el interés permanente del imperio de la ley.

Para el procedimiento contencioso y administrativo son días hábiles para las actuaciones y diligencias procesales todos los del año, desde las ocho de la mañana hasta las diecisiete horas, excepto los feriados.

## **5.8. La demanda**

Para demandar ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo, pueden comparecer las siguientes personas:

- 1.- La persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el caso.
- 2.-Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público semipúblico, que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre q el recurso tuviera por objeto la impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus intereses.
- 3.-El titular de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el restablecimiento de la misma.
- 4.-El órgano de la administración autor de algún acto que, en virtud de lo prescripto en la ley, no pudiese anularlo o revocarlo por sí mismo.

Se podrá proponer la demanda en contra de:

- 1.-El órgano de la administración pública y las personas jurídicas semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiera el recurso; y,
- 2.-Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición.

La demanda contencioso administrativa deberá contener los siguientes requisitos:

- 1.-Nombre del actor e indicación de su domicilio y lugar donde deban efectuarse las notificaciones.
- 2.-La designación del demandado y el lugar donde debe ser citado.
- 3.-la designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la resolución o acto impugnado.

4.-Los fundamentos de hecho expuestos con claridad y precisión.

5.-La indicación de haber precedido la reclamación administrativa del derecho, en los casos expresamente señalados por la ley, ante los funcionarios competentes y su denegación por parte de estos.

6.-La pretensión del demandante.

7.-La enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir.

Si la demanda fuere obscura, irregular o incompleta, el Magistrado de Sustanciación dispondrá que el aclare, corrija, concrete o complete, dentro de 5 días; si no se cumpliera lo ordenado rechazara la demanda. Puede el actor pedir una prórroga prudencial por circunstancias especiales que no podrá excederse del término de 8 días.

Al calificarse la demanda del Magistrado de Sustanciación ordenará que se cite al funcionario representante de la dependencia administrativa, de la que haya emanado el acto de resolución que motiva la demanda. Si ese acto administrativo proviniera del ejecutivo o si la acción se pospusiere en contra del Estado, obligatoriamente se citara al Procurador General del Estado.

### **5.8.1. La contestación a la demanda**

La autoridad demandada tendrá el término de 15 días para contestar la demanda, en la que podrá proponer todas las excepciones dilatorias y perentorias a las que crea que tenga derecho, expondrá los fundamentos de hecho y de derecho de sus excepciones, se referirá a todas las impugnaciones del actor, enunciara las pruebas que va a rendir, señalara domicilio y presentara los documentos en que funda su derecho.

Si no tuviere los documentos en su poder, indicara que oficina, persona o protocolo las tiene. Si el demandado no contesta a la demanda dentro del término ya establecido, será declarado en rebeldía, y se notificara con esta providencia y no se contara más con él. Algo muy especial en el trámite Contencioso Administrativo es que si la autoridad comparece luego de ser declarada en rebeldía, y se oirá y tomara la causa en el estado en la que se encuentre.

El mismo término de 15 días concederá el tribunal al funcionario o empleado de la administración que tenga en su poder el expediente administrativo, para que lo remita al tribunal. De no hacer caso el funcionario o empleado, el tribunal podrá insistirle que remita e imponerle una multa.

## **5.9. La Prueba**

Si dentro del proceso hay hechos que deben justificarse, se abrirá la causa a prueba por el término de diez días tiempo en el cual se practicaran todos los medios de prueba que establece el Código de Procedimiento Civil, excepto la confesión judicial, que no podrá pedirse al representante de la administración. Lo que podría hacerse es pedirle que responda unas preguntas por escrito a manera de informe.

El Tribunal podrá también pedir que se practiquen pruebas de oficio, incluso hasta de la sentencia, para la decisión del asunto litigioso.

Si no existen hechos que deban justificarse y la controversia versare sobre cuestiones de derecho, contestada la demanda y sin otro procedimiento, el tribunal dictara sentencia dentro del término de 12 días.

## **5.10. Sentencia**

Desde la conclusión del término de prueba, en que el tribunal dicte sentencia, las partes podrán presentar informes o derecho o alegatos y solicitar audiencia de estragos para alegar verbalmente. En dichos informes en derecho ni en las audiencias de estrados podrán plantearse cuestiones extrañas a los asuntos materia de la Litis.

El tribunal dictara sentencia dentro del término de 12 días en la que deberá decidirse únicamente los puntos sobre los que se traba la Litis, y todos los incidentes que se suscitaren durante el juicio.

El tribunal no puede revocar ni alterar el sentido de la sentencia dictada, lo que si podrá hacer es aclarar o ampliar la misma, si alguna de las partes lo hubiere solicitado, dentro del término de 3 días de haberse notificado.

La sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo se ejecutara en la forma y términos que en el fallo se consignen bajo la personal y directa responsabilidad de la autoridad administrativa a quien corresponda.

### **5.11. Marco legal ley de la jurisdiccion contencioso administrativa**

*“Art. 3.- El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo.*

*El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.*

*El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.”*

*“Art. 22.- La mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la autorización o licencia del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, en su caso.”*

*“Art. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones de la administración, pueden comparecer:*

- a) La persona natural o jurídica que tuviere interés directo en ellos.*
- b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, semipúblico, que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que el recurso tuviera por objeto la impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus intereses.*
- c) El titular de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el restablecimiento de la misma.*
- d) El órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo proscrito en la ley, no pudiese anularlo o revocarlo por sí mismo.”*



**“Art. 24.-** La demanda se podrá proponer contra:

*El órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas semipúblicas de que proviniera el acto o disposición a que se refiera el recurso. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición.”*

**“Art. 25.-** Pueden también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del demandado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivare la acción contencioso - administrativa.”

**“Art. 26.-** Cuando la personería de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el sucesor en el derecho puede continuar la causa, en cualquier estado de la misma.”

**“Art. 27.-** Las partes pueden comparecer por si mismas o por medio de un procurador que las represente y, en ambos casos, deberán estar patrocinados por un abogado; de lo contrario, no se dará curso a ningún escrito ni se aceptará intervención alguna.”

**“Art. 28.-** La representación y defensa del Estado y de sus instituciones en el proceso contencioso - administrativo, será ejercida de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Patrocinio del Estado.”

**“Art. 29.-** La representación y defensa de otras personas jurídicas de derecho público, y de las personas jurídicas semipúblicas, corresponde a los respectivos personeros legales, sea que litiguen entre sí o contra la administración del Estado, o con los particulares.”

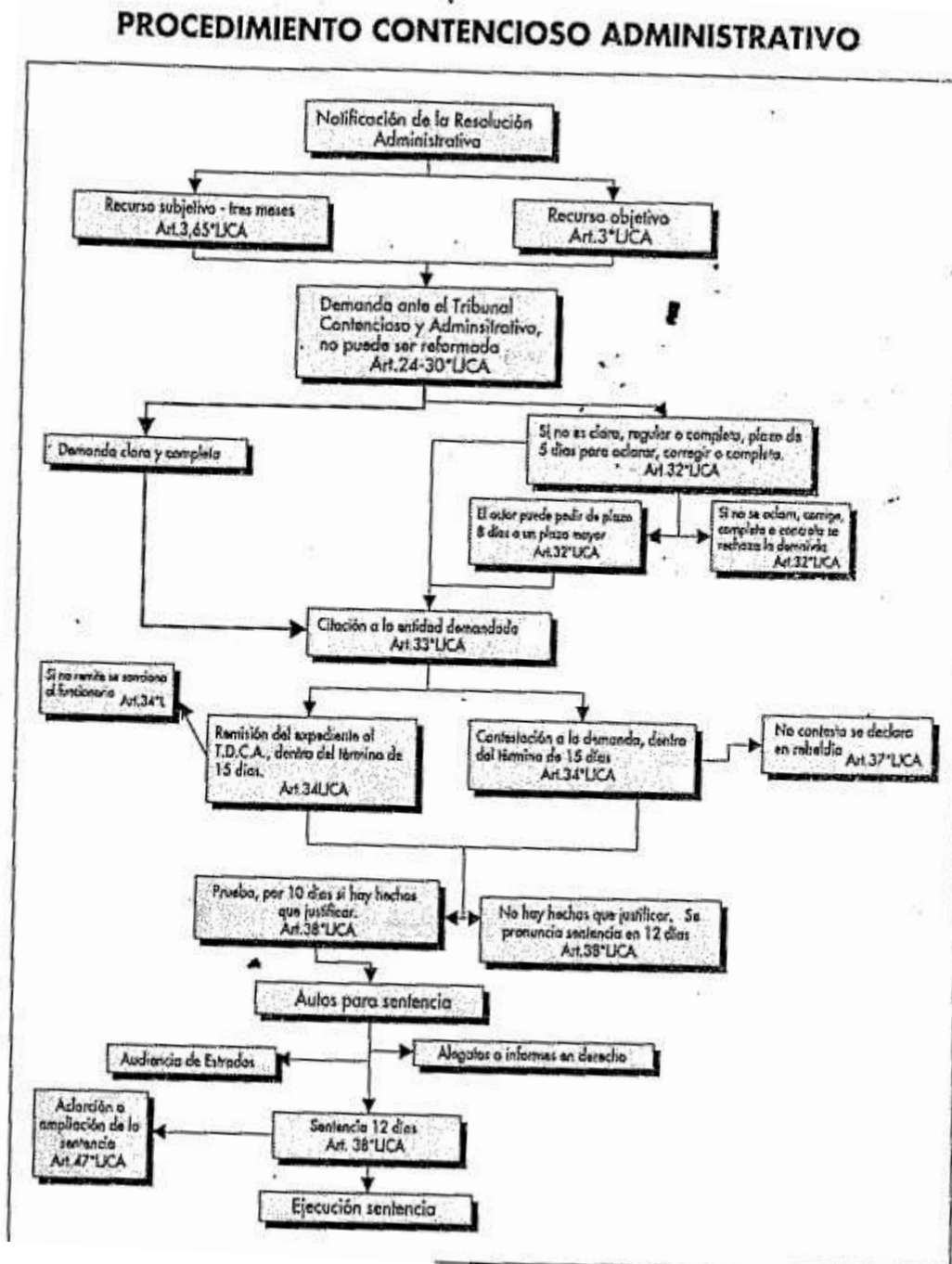
**“Art. 30.-** La demanda debe ser clara y contener:

*a).-El nombre del actor e indicación de su domicilio y lugar donde deben efectuarse las notificaciones en la ciudad de Quito, sede del Tribunal, y dentro del perímetro legal.*

*b).-La designación del demandado y el lugar donde debe ser citado.*

*c).-La designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la resolución o acto impugnado.*

## 5.12. Mapa conceptual contencioso administrativo



(Calisto, Guerrero, Hernández, & Zuquilanda, pág. 57)

### **5.13. Jurisprudencia**

Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia, que se repiten en más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes, hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos fundamentándose en ellas mismas.

La jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a la legislación de cada país. La jurisprudencia se inspira en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos que la realidad presenta a los jueces.

La lucha por proteger el medio ambiente viene de bastante tiempo atrás, sobre todo en los países altamente industrializados, podría decirse que en el nuestro, la regulación legal está en una etapa inicial y en plena experimentación, donde muchas veces los resultados obtenidos a través de su regulación legal distan mucho de lo que se pretende. Sin embargo los avances tecnológicos hacen que se necesite una normativa un poco más flexible, o una mayor labor de interpretación de los jueces, y es aquí donde yace la importancia de la jurisprudencia.

Se conocen pocos casos de aplicación de la ley penal dentro de materia ambiental, pero interesantes, que han sido procesados y sentenciados, a continuación observaremos una sentencia condenatoria por Delito Ambiental:

**Número de caso: 2195 – 2008**

**Juzgado: Décimo de lo Penal de Pichincha**

**Lugar: Quito, Ecuador**

**Fecha: 2009/02/05**

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.-JUZGADO DECIMO DE GARANTIAS PENALES.-VISTOS:** Por resolución de instrucción fiscal y documentación agregada a la misma, suscrita por el Dr. Bormman Peñaherra Santillán, Agente Fiscal de Pichincha de Turno de la Unidad de delitos Flagrantes, se conoce que: Mediante llamada

telefónica de la Policía del Medio Ambiente en la cual se le informa que el día 02 de octubre del 2008, en horas de la mañana el señor Torsten Dietrich, pretendía sacar del país especies de animales silvestres protegidos según las leyes ambientales del Ecuador. Al efecto en compañía de la Policía Ambiental han procedido a verificar el hecho, encontrando en una maleta del aprehendido 741 tarántulas entre vivas y muertas, cuyas especificaciones científicas se determinarán oportunamente haciendo las experticias del caso. Del parte de aprehensión se desprende que el Teniente de Policía William Reyes Zapata, quien encontrándose de servicio en la Unidad de Protección del Medio Ambiente ha recibido una llamada telefónica del señor Cabo de Policía Reinaldo Pérez perteneciente a la UPMA, quien se encontraba cumpliendo su servicio en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad de Quito ha manifestado que había procedido a la aprehensión del señor Dietrich Torsten de nacionalidad alemana, con pasaporte N° 4796124106, por la recolección y tráfico de especies de fauna silvestre, ya que las evidencias habían sido encontradas en el equipaje del aprehendido. Por tal motivo se ha trasladado hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre donde se ha tomado contacto con la bióloga Patricia Galiano, funcionaria del Ministerio del Ambiente, quien ha certificado verbalmente que dichas especies se encuentran protegidas por las Leyes Ambientales del Ecuador, por lo que se ha procedido a realizar el acta de retención de especímenes de vida silvestre y elementos constitutivos y sus productos y se ha entregado al aprehendido Dietrich Torsten.- En la sustanciación del presente proceso penal no se han omitido solemnidades sustanciales de procedibilidad, de competencia y de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, por lo que se declara válido; y, encontrándose la causa en estado de resolver se considera: PRIMERO.- Identidad del acusado.- El acusado responde a los nombres de: DIETRICH TORSTEN, de nacionalidad alemana, con pasaporte N° 4796124106, de 44 años de edad, sin dirección fija en el país, únicos datos que se conocen por el momento.- SEGUNDO.- Análisis prolijo de los resultados de la Instrucción Fiscal.- A fs. 1 a 4 del proceso consta el acta de audiencia de formulación de cargos en delito flagrante, llevada a cabo el día 02 de octubre del 2008, en el que consta el inicio de instrucción fiscal, imputando a Dietrich Torsten, por el delito de recolección ilícita de flora y fauna silvestre protegida; además se ordena la prisión preventiva del imputado.- A fs. 12 del proceso consta la razón de notificación con el inicio de la instrucción fiscal en la persona del imputado.- A fs. 14 del proceso consta la boleta constitucional de encarcelamiento de Dietrich Torsten.- A fs. 17 vta. del proceso consta el memorando 14657-08 VS/DNBAP/MA, suscrito por la Unidad de Vida Silvestre del Ministro del Ambiente y dirigido al Director de Asesoría Jurídica.- A fs. 18 del proceso consta el detalle de costos de rehabilitación y liberación de tarántulas, teniendo un costo total de 4.512 dólares.- A fs. 25 a 26 del proceso constan fotocopias certificadas del Registro Oficial N° 302, del 26 de marzo del 2008.- A fs. 29 a 31 del proceso consta la acusación particular presentada por el Abg. Yury Manuel Iturralde Hidalgo, en calidad de

Director de Asesoría Jurídica y Delegado del Ministerio del Ambiente y del Procurador Judicial del Estado.- A fs. 33 del proceso consta el reconocimiento de la acusación particular presentada.- A fs. 43 del proceso consta el parte elevado al señor Comandante de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (ACC), referente a la retención de especímenes de vida silvestre.- A fs. 44 del proceso consta el acta de retención de especímenes de vida silvestre, subproductos y elementos constitutivos.- A fs. 69 a 70 del proceso consta el informe sobre la situación de los ejemplares de arañas en custodia del MECN, presentado por la Bióloga Patricia Galiano, funcionaria de la Unidad de Vida Silvestren.- A fs. 76 del proceso consta el certificado de antecedentes penales de la Dirección Nacional de Migración, perteneciente a Torsten Dietrich.- A fs. 88 del proceso consta el oficio N° 010329-08-VS/DNB/MA, suscrito por Wilson Rojas, Director Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, quien indica que de los registros del Ministerio del Ambiente, se desprende que Dietrich Torsten no ha iniciado el trámite para obtener el permiso de investigación científica para el estudio de especies de tarántulas de género Avicularia, conforme lo establece la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente.- A fs. 89 del proceso consta el dictamen del señor Fiscal, el mismo que acusa a Torsten Dietrich, como autor y responsable del delito que se encuentra tipificado en el Libro II, título V de los delitos contra la Seguridad Pública, Capítulo XA de los delitos contra el Medio Ambiente, Art. 437 literal F, del Código Penal.- A fs. 94 a 96 del proceso consta el escrito presentado por el imputado Torsten Dietrich, quien a través de su abogada defensora solicita se acepte la aplicación del procedimiento abreviado.- A fs. 97 del proceso consta la providencia en la que se corre traslado al señor Fiscal con el escrito presentado por el imputado solicitando el procedimiento abreviado.- A fs. 99 del proceso consta el escrito del señor Fiscal, en el que solicita el procedimiento abreviado a favor del imputado Torsten Dietrich, proponiendo se imponga al acusado una pena no mayor de 8 meses de prisión.- A fs. 100 del proceso consta el acta de la audiencia en la que se escucha al imputado a través de su abogada defensora, al señor fiscal y al acusador particular.- TERCERO.- Revisado y analizado el proceso se desprende que la recolección ilícita de flora y fauna silvestre protegida se ha comprobado con el acta de retención de especímenes de vida silvestre; y, de igual forma la responsabilidad del imputado se ha demostrado con el parte de aprehensión de la policía en el que se dice que las tarántulas fueron encontradas en poder de Torsten Dietrich, lo cual ha sido reconocido por el propio imputado al manifestar que tal especie protegidas ha comprado a un taxista y que pretendía llevarse a su país para efectos de investigación.- Por lo expuesto y habiéndose cumplido con los requisitos previstos para el procedimiento abreviado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el Art. 46 del Código Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY dicto sentencia condenatoria en contra del acusado Torsten

Dietrich, de nacionalidad alemana, con pasaporte N° 4796124106, de 44 años de edad, sin dirección fija en el país, únicos datos que se conocen por el momento, imponiéndole la pena de ocho meses de prisión correccional, pena que deberá cumplirla en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de esta ciudad de Quito, debiendo tomarse en cuenta el tiempo que haya permanecido recluido por la orden de prisión preventiva dictada en su contra, es decir que el tiempo que haya permanecido privado de su libertad será imputable al tiempo determinado en esta sentencia.- Actúe la Dra. Alba Quinteros C., en calidad de Secretaria titular de esta Judicatura.- NOTIFÍQUESE.-

## CAPÍTULO VI

### 6. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

#### 6.1. Cuadro de recursos humanos

PERSONAS	Número
Jueces	5
Secretarios	5
Abogados	30
Usuario	30
Funcionarios	10
Total	80

Autor: Grace Castañeda

Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

## 6.2. Cuestionario

Por favor llenar la presente encuesta con sinceridad, es de carácter anónimo

1.- ¿Considera al ambiente como un bien jurídico que se debe proteger dentro del Derecho Penal?

Sí ( ) No ( )

2.- ¿Conoce usted si existe actualmente iniciativas de ley que tenga como objetivo la protección del medio ambiente?

Sí ( ) No ( )

3.- ¿Considera que el Derecho Penal cumple únicamente un rol de auxiliar del derecho administrativo, en cuanto a sanciones?

Sí ( ) No ( )

4.- ¿Cree que dentro de nuestra Ley se establece con claridad los principios de conservación y protección de la diversidad biológica y del derecho de las personas a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado?

Sí ( ) No ( )

5.- ¿Considera necesaria la protección jurídica del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal, para que los responsables del cometimiento de estos actos dolosos respondan por los daños causados?

Sí ( ) No ( )

6.- ¿Está al tanto si existe alguna entidad estatal competente de conocer delitos de carácter ambiental?

Sí ( ) No ( )



7.- ¿Conoce quienes pueden denunciar el cometimiento de delitos ambientales?

Sí ( ) No ( )

8.- ¿Considera que el estado debería difundir en la ciudadanía los distintos mecanismos administrativos en prevención de riesgos y daños ambientales?

Sí ( ) No ( )

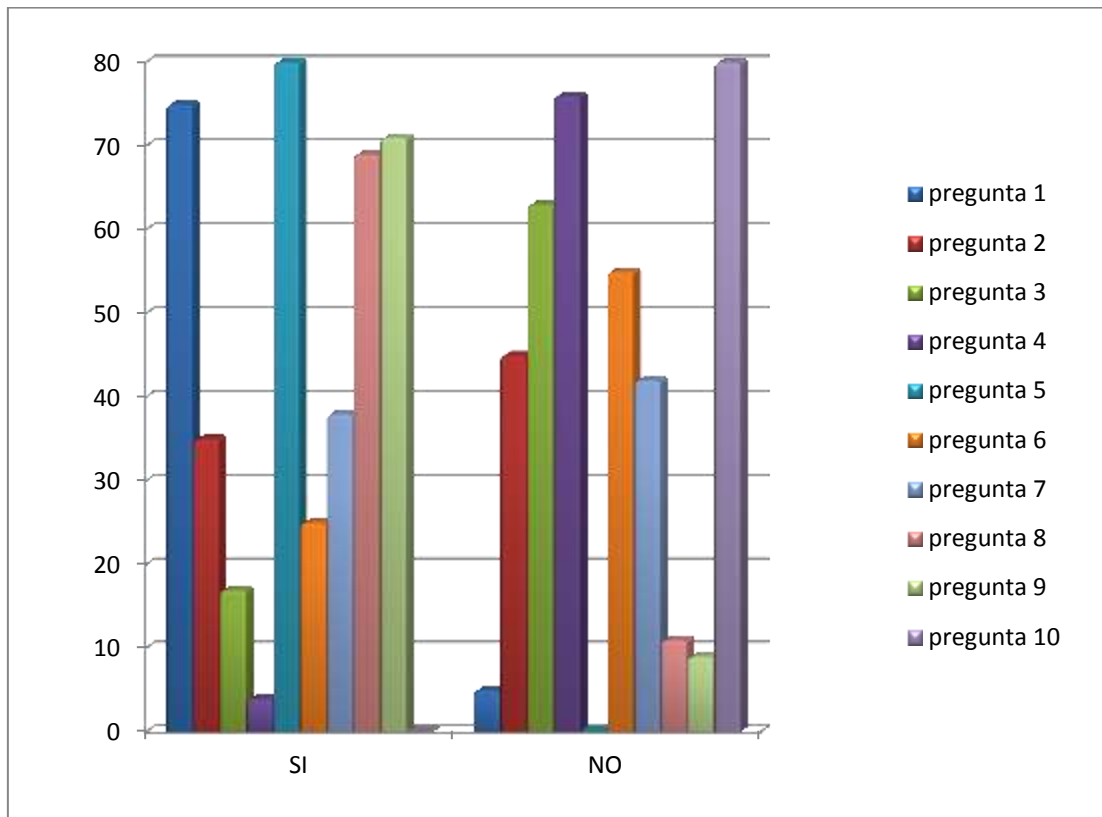
9.- ¿Piensa que el procedimiento para el juzgar este tipo de delitos es el apropiado o debería ser distinto por su naturaleza?

Sí ( ) No ( )

10.- ¿Considera que las penas y sanciones tanto administrativas como penales son proporcionales a los daños que causan este tipo de delitos?

Sí ( ) No ( )

### 6.3. Cuadro estadístico de la aplicación de la encuesta



Autora: Grace Castañeda

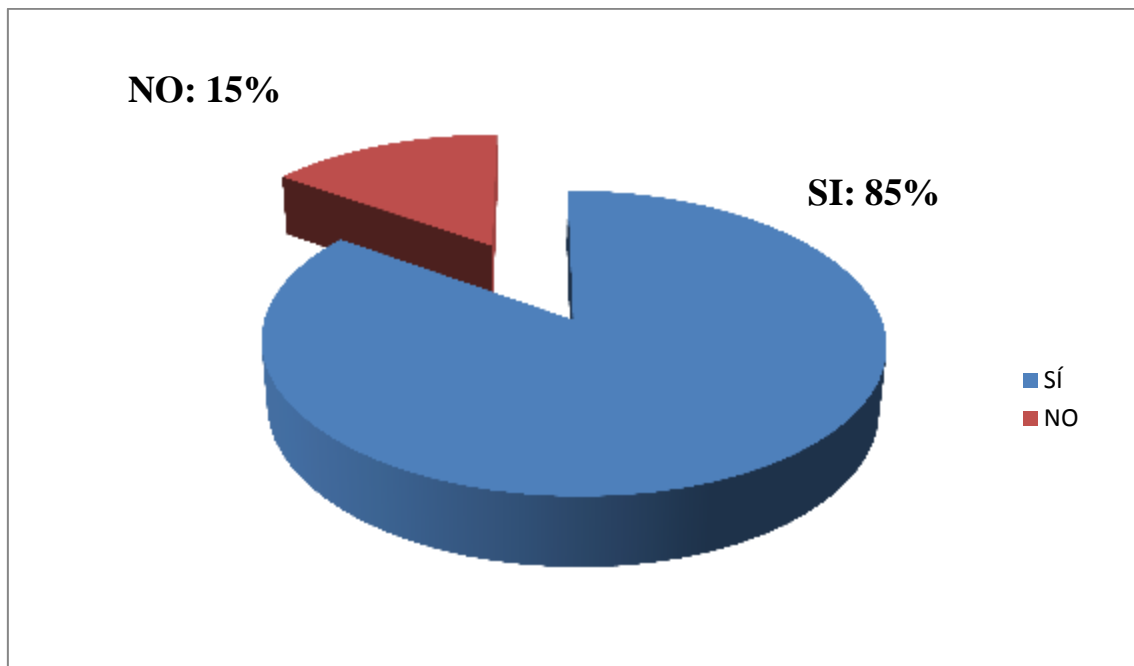
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

Para la aplicación del presente cuestionario se buscó encuestar a las personas que efectivamente tengan conocimiento y se encuentren inmersos dentro de la problemática de nuestro estudio, es así que este cuestionario fue aplicado a Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios.

## 6.4. Gráficos de la Encuesta

1.- ¿Considera al ambiente como un bien jurídico que se debe proteger dentro del Derecho Penal?

Gráfico 1



Autora: Grace Castañeda

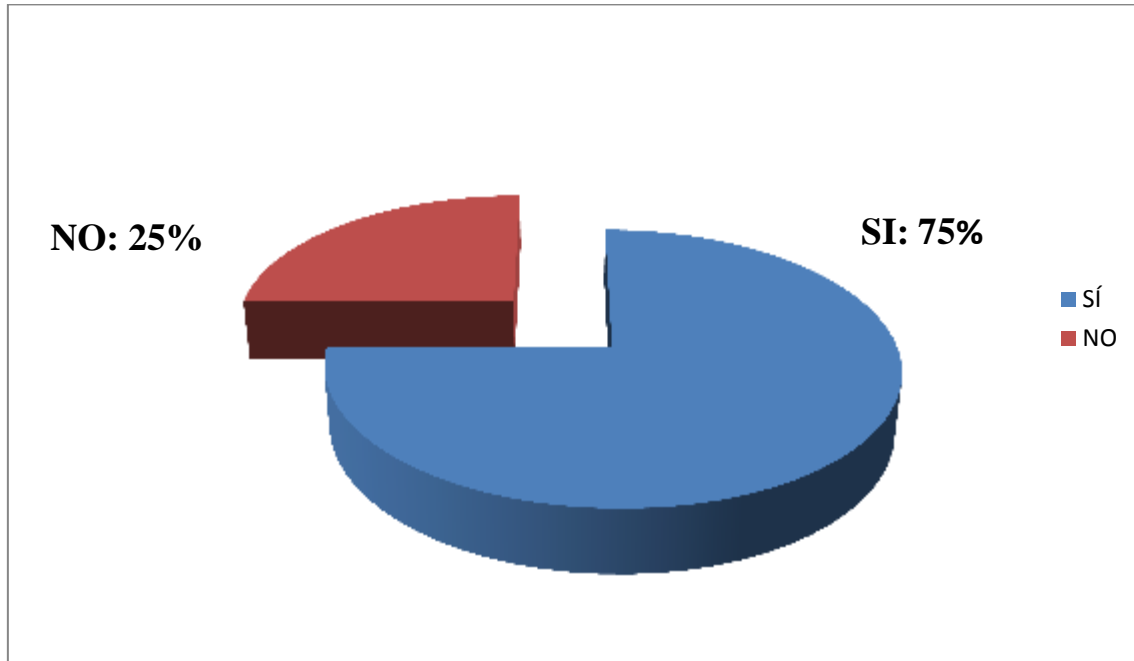
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### Interpretación de resultados:

Es así que de los resultados que hemos obtenido a nuestra pregunta 1, podemos darnos cuenta que un 85% de los consideran ambiente como un bien jurídico que se debe proteger dentro del Derecho Penal y un 15% no lo considera de este modo las razones pueden ser varias y diferentes.

**2.- ¿Conoce usted si existe actualmente iniciativas de ley que tenga como objetivo la protección del medio ambiente?**

**Gráfico 2**



Autora: Grace Castañeda

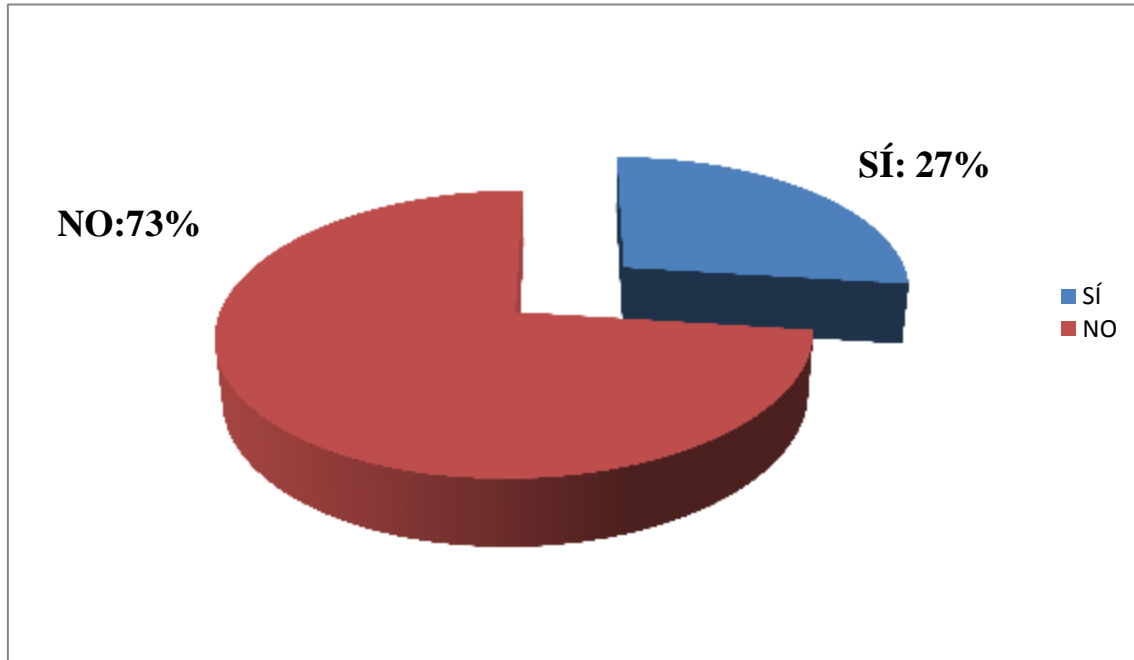
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### **Interpretación de resultados:**

En lo referente a los resultados obtenidos de la realización de la pregunta 2, vemos que un 75% de los encuestados conoce que existe actualmente iniciativas de ley que tienen como objetivo la protección del medio ambiente, cuales son no es nuestro objetivo conocer sino más bien el saber de su existencia, así mismo observamos que un 25% de los encuestados no tiene conocimiento.

**3.- ¿Considera que el Derecho Penal cumple únicamente un rol de auxiliar del derecho administrativo, en cuanto a sanciones?**

**Gráfico 3**



**Autora: Grace Castañeda**

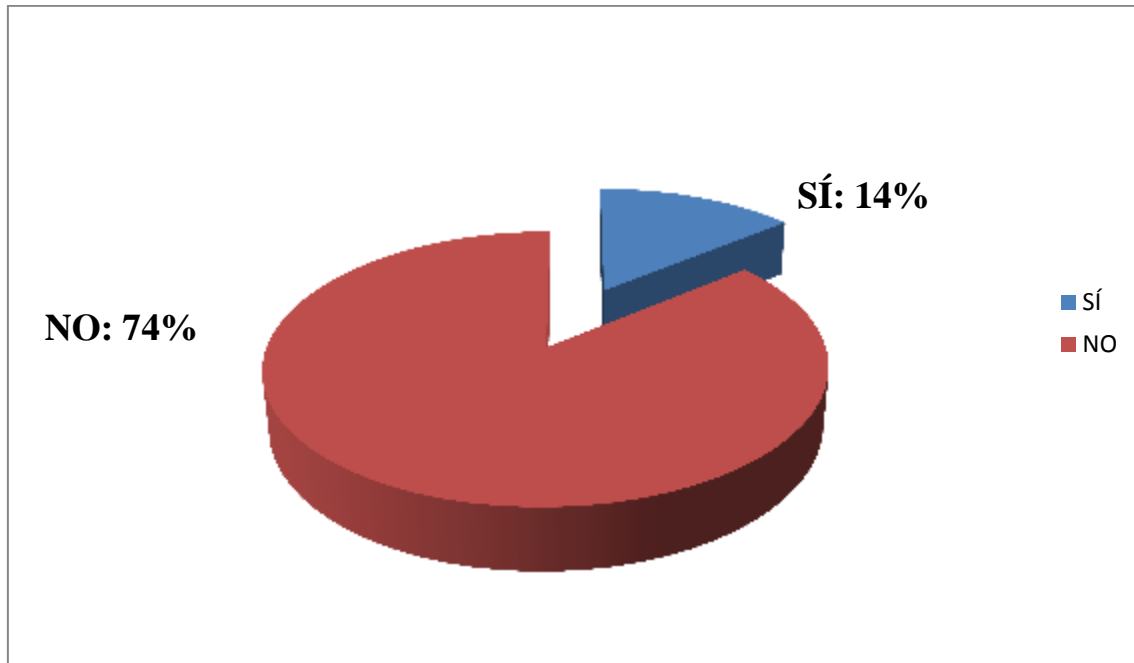
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

#### **Interpretación de resultados:**

Los resultados arrojados de nuestros encuestados respecto a la pregunta 3, nos muestran que un 27% considera que el Derecho Penal si cumple únicamente un rol de auxiliar del derecho administrativo, en cuanto a sanciones esto en contraste a lo que cree un 73% de nuestros encuestados

**4.- ¿Cree que dentro de nuestra Ley se establece con claridad los principios de conservación y protección de la diversidad biológica y del derecho de las personas a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado?**

**Gráfico 4**



Autora: Grace Castañeda

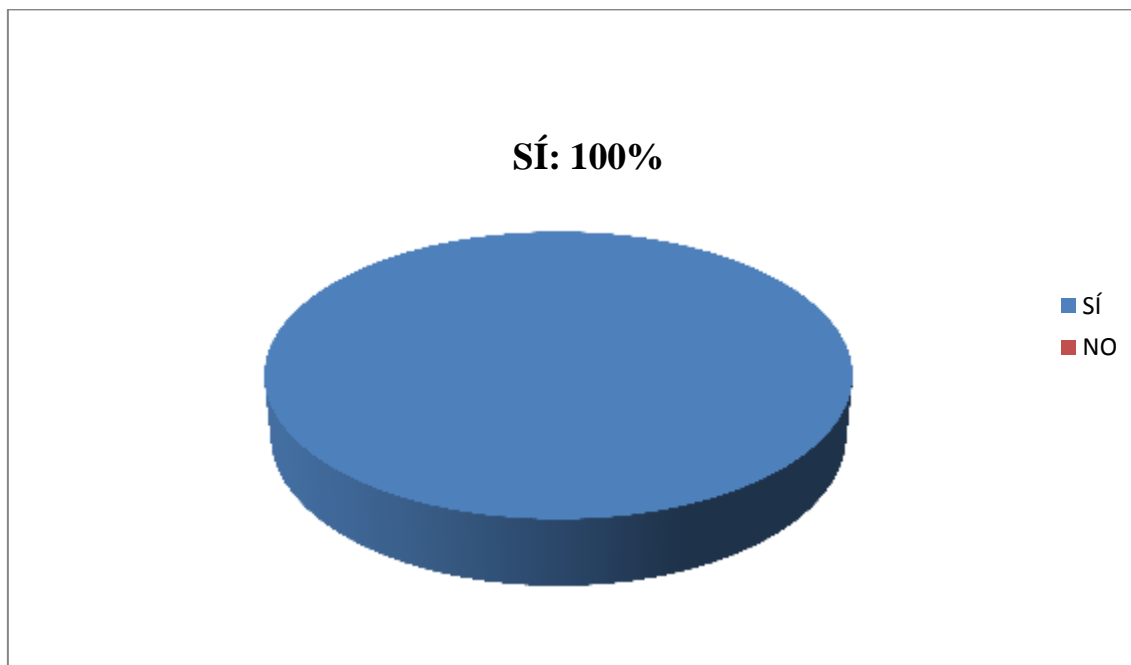
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

#### **Interpretación de resultados:**

En la pregunta 4, de las personas encuestadas apenas un 14%, si cree que dentro de nuestra Ley se establece con claridad los principios de conservación y protección de la diversidad biológica y del derecho de las personas a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, sin embargo un 86% no lo cree así por qué puede ser por muchas razones y quizás no se podría llegar a un solo criterio.

**5.- ¿Considera necesaria la protección jurídica del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal, para que los responsables del cometimiento de estos actos dolosos respondan por los daños causados?**

**Gráfico 5**



Autora: Grace Castañeda

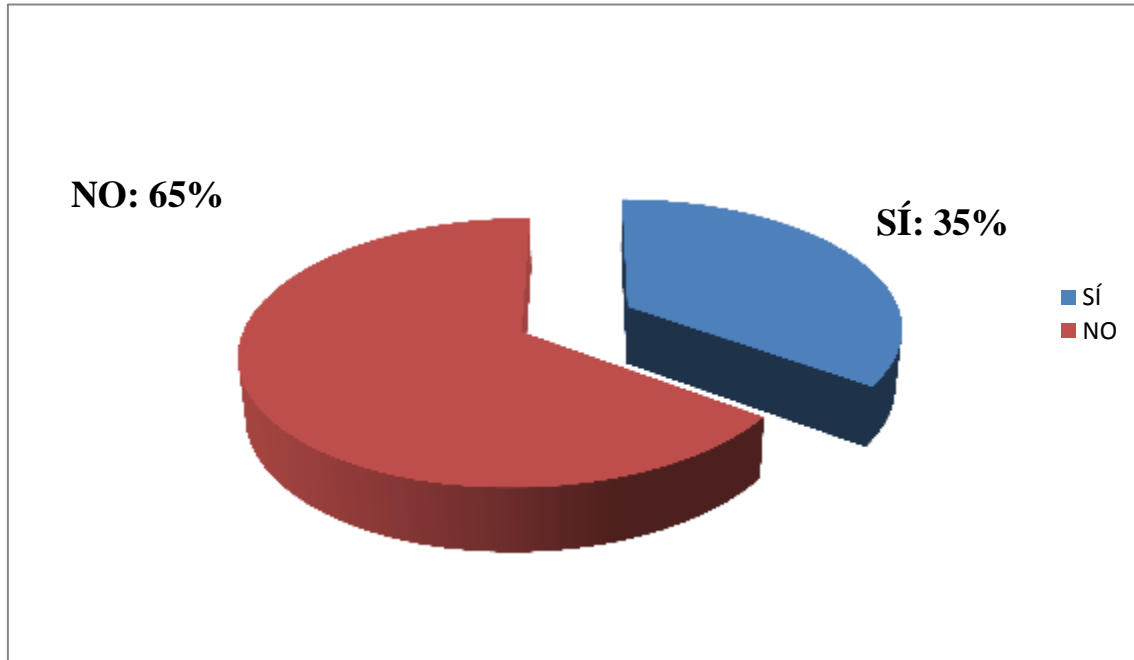
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### **Interpretación de resultados:**

Podemos observar con claridad en la pregunta 5, que de los encuestados en su totalidad 100%, coinciden que es necesaria la protección jurídica del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal, para que los responsables del cometimiento de estos actos dolosos respondan por los daños causados.

**6.- ¿Está al tanto si existe alguna entidad estatal competente de conocer delitos de carácter ambiental?**

**Gráfico 6**



**Autora: Grace Castañeda**

Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

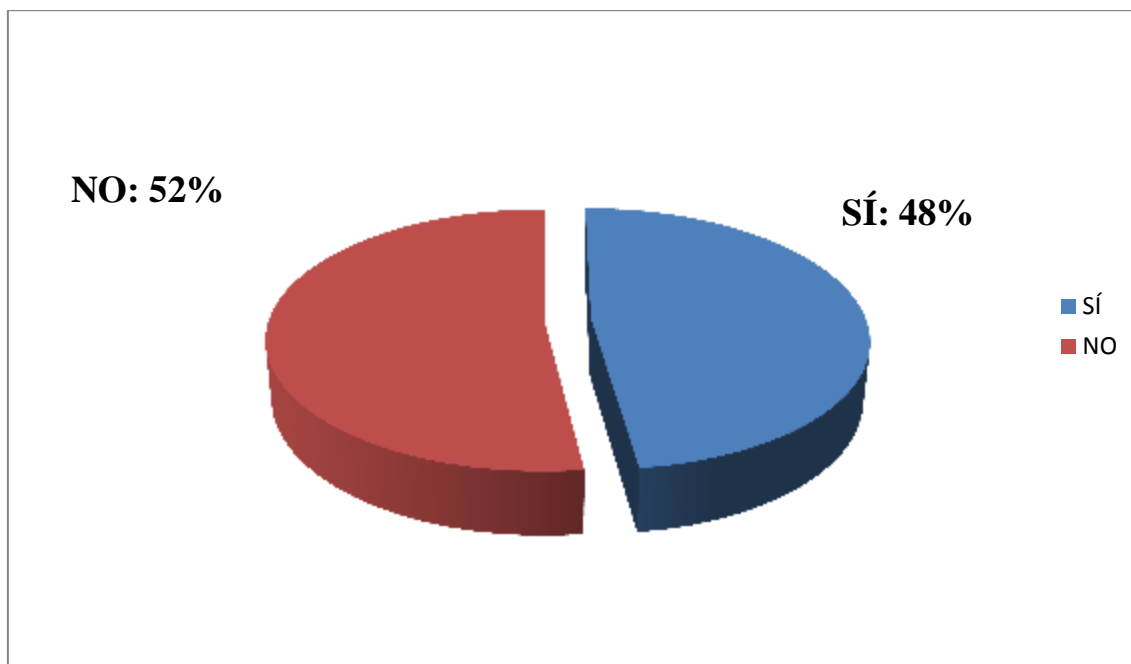
### **Interpretación de resultados:**

Al respecto a la pregunta 6, observamos un 35% de nuestros encuestados si están al tanto que existe alguna entidad estatal competente de conocer delitos de carácter ambiental, lo importante en esta pregunta no es saber cuáles son estas entidades sino más bien el conocimiento que se tiene de su existencia, por otro lado un 65% manifestó no saber, esto sea talvez porque no se tiene clara su competencia.



## 7.- ¿Conoce quienes pueden denunciar el cometimiento de delitos ambientales?

**Gráfico 7**



Autora: Grace Castañeda

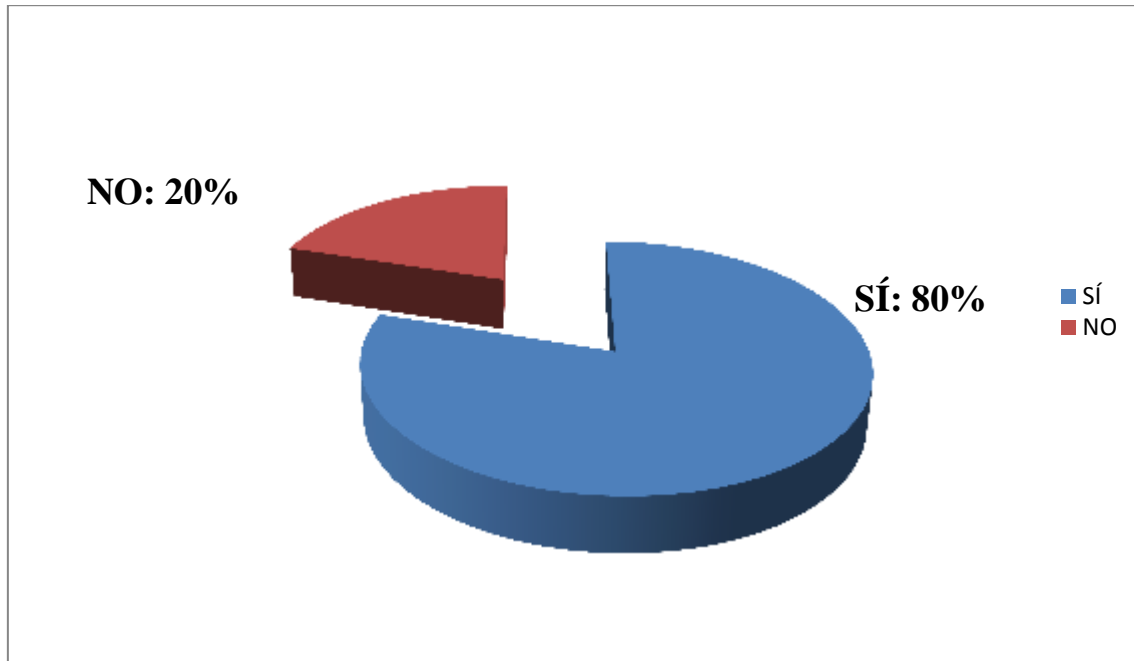
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### **Interpretación de resultados:**

De la realización a la pregunta 7, un 48% de los encuestados respondieron que si conocen quienes pueden denunciar el cometimiento de delitos ambientales y un 52% respondieron no conocer.

**8.- ¿Considera que el estado debería difundir en la ciudadanía los distintos mecanismos administrativos en prevención de riesgos y daños ambientales?**

**Gráfico 8**



Autora: Grace Castañeda

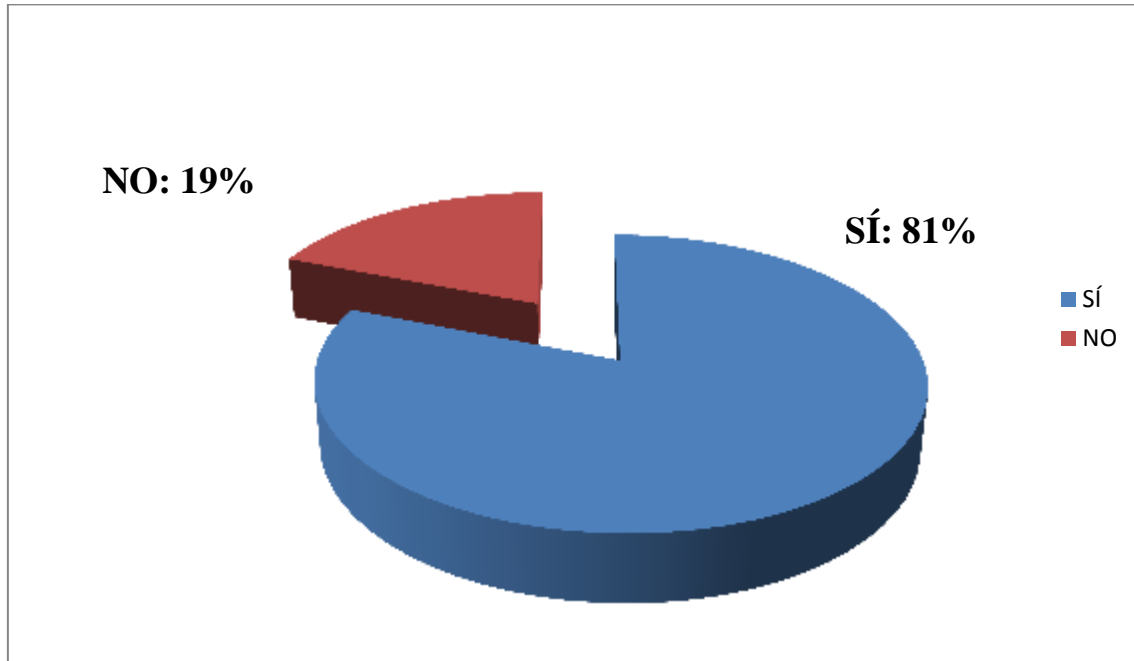
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### **Interpretación de resultados:**

Un 80% de las personas encuestadas en la pregunta 8, considera que el estado debería difundir en la ciudadanía los distintos mecanismos administrativos en prevención de riesgos y daños ambientales y un 20%, no lo consideran de así, él porque puede contener una diversidad de criterios distintos y quizás imposibles de unificar.

**9.- ¿Piensa que el procedimiento para el juzgar este tipo de delitos es el apropiado o debería ser distinto por su naturaleza?**

**Gráfico 9**



Autora: Grace Castañeda

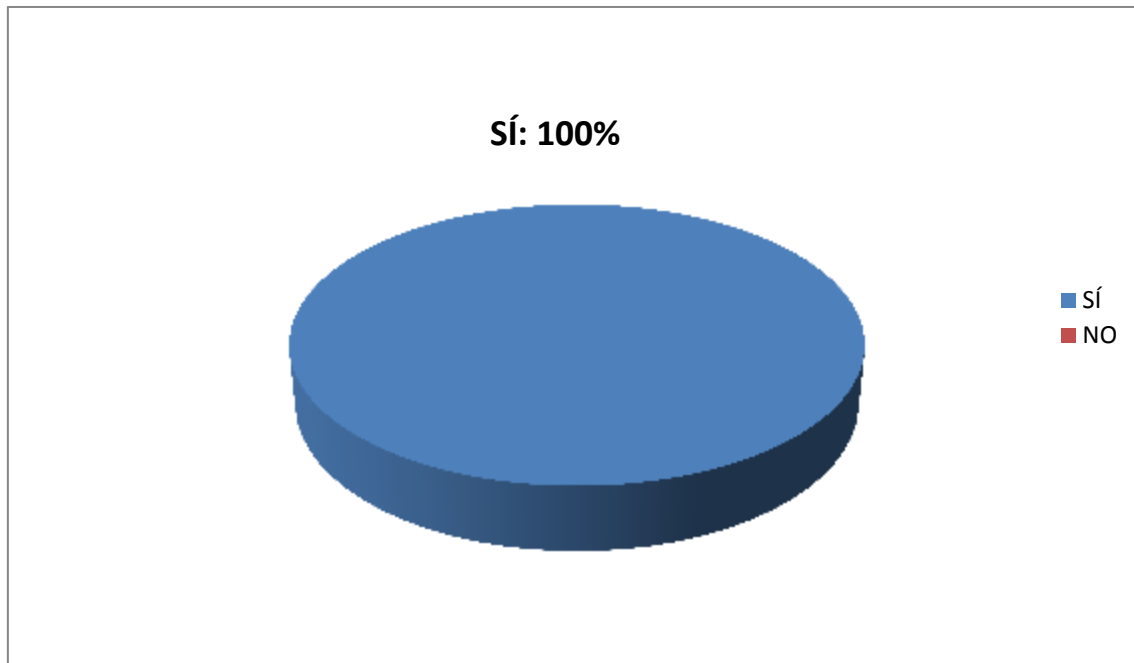
Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

#### **Interpretación de resultados:**

La pregunta 9, nos muestra que un 81% de las personas encuestadas piensan que el procedimiento para el juzgar este tipo de delitos es el apropiado y un 19% considera que debería ser distinto por su naturaleza.

**10.- ¿Considera que las penas y sanciones tanto administrativas como penales son proporcionales a los daños que causan este tipo de delitos?**

**Gráfico 10**



Autora: Grace Castañeda

Fuente: Jueces, secretarios, funcionarios, abogados y usuarios

### **Interpretación de resultados:**

Respecto a la respuesta a la pregunta 10, vemos que la totalidad de nuestros encuestados es decir un 100%, considera que las penas y sanciones tanto administrativas como penales son proporcionales a los daños que causan este tipo de delitos.

## CONCLUSIONES

1. La protección del ambiente es uno de los objetivos del desarrollo y que se ha logrado materializar en la Constitución y en las distintas disposiciones legales internas en las cuales se ha tratado de reflejar la demanda de los movimientos sociales, organizaciones políticas y actores económicos que han demandado un mayor control y regulación del Estado.
2. Pienso que a partir de la constitución del 2008 hay importantes elementos que se han incorporado en sus diferentes capítulos respecto a la protección del ambiente y la naturaleza, ya que con el establecimiento y reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, se rompe con el paradigma tradicional de considerarla como un simple objeto de aprovechamiento y pasa a ser considerada como un ente que se merece respeto y un trato en igualdad de condiciones y derechos, es así que la Constitución de la República nos presenta un nuevo esquema de protección ambiental y de restauración del ecosistema donde están interconectadas las personas, los recursos naturales y la naturaleza como sujeto de derechos.
3. Igualmente con la inclusión de los delitos hacia el ambiente en la Constitución y en el código penal ecuatoriano, se contribuye a un aumento de la conciencia pública acerca del carácter fundamental de estos delitos y las ventajas de la inserción de los mismos que sin duda son mucho mayores a los inconvenientes, ya que las políticas públicas, el derecho y la jurisprudencia deben desarrollarse teniendo como referencia que el bien jurídico a proteger, en el derecho ambiental ecuatoriano no son sólo las personas sino toda población y que tampoco es sólo el ambiente en sí mismo sino otro sujeto de derechos como es la naturaleza, quien como ya se lo menciono anteriormente se le otorga el mismo nivel de protección que los establecidos respecto de los derechos ambientales para los seres humanos.
4. Las garantías de protección ambiental se desarrollan en un ámbito de aplicación fáctica, estableciéndose valiosos conceptos como la acción popular, la garantía de protección subsidiaria, directa y de los funcionarios públicos en la prevención ambiental, así también la adopción de medidas cautelares y los mecanismos de prevención y control

efectivos, rompiendo el viejo esquema de que solo el perjudicado o quien tenga interés directo en el daño ambiental está apto para iniciar acciones ambientales, se establece la reversión de la carga de la prueba como régimen de excepción dentro del sistema de litigio, ya que este se debe principalmente a la presunción de responsabilidad del agente contaminador por el principio de responsabilidad objetiva.

## RECOMENDACIONES

1. Los delitos ambientales tienen la particularidad que tanto en el daño como los actores del mismo pueden ser inidentificables, complicando la imposición de sanciones debido a que el régimen de responsabilidad penal tiene en sus principios de legalidad, tipicidad, temporalidad, presunción de inocencia una carga conceptual fuerte que desfavorece la puesta en práctica de principios como el de responsabilidad objetiva, reversión de la carga de la prueba, etc., por lo que el sistema no será efectivo mientras el procedimiento para establecer la responsabilidad así como los mecanismos de sanción del daño sean los mismos que los establecidos para los delitos comunes, es imprescindible que los operadores de justicia apliquen los principios constitucionales de forma directa, pero pensando que el sistema judicial debe realizar las reformas tendientes a establecer normas de procedimiento de delitos ambientales que tengan como propósito un tratamiento diferenciado del régimen común de responsabilidad penal.
2. Si bien es cierto que Ecuador posee un buen sistema de responsabilidad que permite que los hechos atentatorios al ambiente sean sancionados de forma eficaz y oportuna, no es menos cierto que estas bases constitucionales y normativas por sí sola no resuelven todos los problemas que plantean las particularidades del daño ambiental en lo que concierne a su reparación, pues para que ello suceda es imprescindible que a nivel de políticas públicas y administración de justicia se vaya asumiendo el rol de prevención, control y sanción de los daños mediante como un sistema de responsabilidades que sea independiente de los intereses económicos.
3. Los jueces al resolver sobre acciones constitucionales en temas ambientales no deben considerar como parte principal de su reflexión la carencia de requisitos formales de ejecución de actividades como la licencia ambiental emitida por la autoridad competente, debido a que este a pesar de ser un requisito indispensable para el desarrollo del proyecto se vuelve intrascendente cuando la actividad por sí misma provoca daños que atentan contra los derechos humanos y la naturaleza, en cuyo contexto los jueces deben poner en práctica el principio de precaución y restricción de actividades pues caso contrario no tendría efectividad las acciones constitucionales que revisen los aspectos de legalidad.

4. Finalmente, considero que es necesaria la autonomía del Derecho Penal frente al Derecho Administrativo en el campo de los atentados contra el ambiente, en virtud de que esto nos garantiza y asegura la salud humana y el bien jurídico a proteger, que no es otro que la vida misma. Es necesario que se establezca un cuerpo legal autónomo para penalizar todos los actos que atenten contra los derechos de la naturaleza, es decir un Código Penal Ambiental en el que se creen delitos tipificados y nombren fiscales y jueces especializados en el medio ambiente, con el propósito de mantener la esperanza y confianza en el Estado y sus instituciones misma que debe ser activa, crítica y propositiva, utilizando un sistema o procedimiento eficiente para lograr la restauración y reparación ambiental.



## CAPITULO VII

### 7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Durante el desarrollo de nuestro estudio nos hemos dado cuenta de la íntima relación que guarda el derecho penal con el derecho ambiental y su importancia, así pues de la formulación del problema tema de esta tesis dentro de la cual nos hemos planteamos algunas preguntas y directrices objetivos podemos decir que es necesaria la creación de una Ley Orgánica Ambiental que instaure el procedimiento y mecanismos adecuados siguiendo las reglas del debido proceso e instaurando penas o sanciones adecuadas a cada delito y al daño producido es así que presento a continuación la creación del proyecto planteado.

#### LEY ORGANICA PENAL AMBIENTAL

##### TITULO I

##### AMBITO OBJETIVO Y FINES

##### CAPITULO I

##### AMBITO Y OBJETIVO

*Art. 1.- **Ámbito.**- La presente ley regula el sistema de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables pertenecientes al Estado ecuatoriano, determina deberes, derechos y obligaciones de entidades particulares y públicas.*

*Art. 2.- **Objeto.**- Esta Ley tiene como objetivo sujetar a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos tanto al sector público como el privado.*

## CAPITULO II

### FINES DE LA LEY

*Art. 3.- Fin de esta ley.- La Ley tiene como fin promover en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas, que responda únicamente a los intereses del Estado y no estará en ningún momento sujeta a intereses individuales y corporativos.*

*Art. 4.- Derecho a un Medio Ambiente Sano.- La presente Ley reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual establece los principios y directrices de política ambiental; garantizando la sostenibilidad y el buen vivir, determinando obligaciones, responsabilidades, tanto del sector público y privado marcando límites de control y sanciones proporcionales a cada delito y daño ambiental cometido.*

Garantiza la utilización de recursos de modo racional, sustentable y sostenible en ejercicio efectivo del desarrollo del Estado y en función del progreso de su pueblo.

Los ecuatorianos y ecuatorianas de forma individual y colectiva tienen derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación según lo establecido en la Constitución de la República.

## CAPITULO III

### RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

*Art. 5.- Responsabilidad del Estado.- El Estado deberá promover los medios adecuados a fin de garantizar el uso y la explotación equilibrada de los recursos naturales del Estado.*

El Estado ecuatoriano establecerá un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para garantizar el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables a fin de cuidar y conservar la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los distintos ecosistemas, tendrán lugar por excepción previo estudios de posibilidad de impactos ambientales mismos que deberán contener:

- a) Una descripción del proyecto o actividad;
- b) La descripción de la línea de base, dentro de la calificación ambiental,
- c) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos y características que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.
- d) Una pronóstico y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo, se deberá considerar los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas.
- e) Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos y las acciones de reparación, cuando ello sea procedente;
- f) Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

El Estado garantizará la participación activa y permanente de todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que se sientan afectadas o pudiesen ser afectadas en la ejecución de toda actividad que genere impacto ambiental.

***Art. 6.- Entidad competente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.-** Será la autoridad rectora el Ministerio del ramo el encargado de conocer los distintos casos que en materia ambiental entren en bajo su competencia, bajo un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.*

El conocimiento de que se ha efectuado un delito o varios delitos ambientales corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria, la que se encargará del proceso penal.

*Art. 7.- Funciones que le corresponde al Ministerio del ramo*

- a) Garantizar el derecho de los ecuatorianos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
- b) Elaborar estrategias y planes para el cuidado medio ambiental y proponer, su expedición a través de normas legales.
- c) Aprobar y coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional.
- d) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;
- e) Garantizar un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido por la Comisión Nacional de Coordinación. Las instituciones que conformen este sistema deberán cumplir sus obligaciones, sus atribuciones dentro del ámbito de su competencia.

## **CAPITULO IV**

### **RESPONSABLES Y SANCIONES DE DAÑO AMBIENTAL**

*Art. 7.- Responsables del cometimiento de daño y delito ambientales.- Las personas jurídicas o naturales que representación en obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que causaren impactos ambientales, responderán conforme el daño evidente causado y el daño futuro.*

*Art. 8.- Sanciones.- Las sanciones serán:*

*Prisión;*

*Multa;*

*Trabajos comunitarios;*

*Prohibición para el ejercicio de funciones u empleo en el sector público por dos (2) años;*

*Descalificación para concursar en procesos de licitación estatales por dos (2) año después de cumplida la sanción principal y cuando el daño cometido haya sido sancionado;*

*La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado por dos años;*

*El decomiso de los equipos, instrumentos, sustancias u objetos con que se hubiere ejecutado, el delito o daño;*

**Art. 9.- Delito por imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia.-** Si los delitos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o por inobservancia de la Constitución, de la Ley y reglamentos, la pena establecida para estos hechos punibles dolosos, deberá ser la mitad de la normalmente aplicable. El juez apreciará el grado de culpa del agente y aplicará la pena correspondiente.

**Art. 10.- De la Prelación.-** El pago de la reparación e indemnización por los daños y perjuicios por los hechos punibles cometidos contra el medio ambiente, tendrá prelación sobre cualquier obligación que contraiga el responsable.

**Art. 11.- Prescripción de la acción Penal y Civil.-** Las acciones penales y civiles prescribirán:

- a) Después de cinco (5) años, si el delito fuese sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de más de tres (3) años;
- b) A los seis (6) años, si el delito mereciere pena de reclusión menor extraordinaria de nueve (9) años;
- c) Si el hecho dañoso y punible acarrear reclusión menor ordinaria por el cometimiento de una contravención será de tres (3) a seis (6) años.

## **CAPITULO IV**

### **DE LAS SANCIONES**

**Art. 12.- Delitos sancionados con prisión.-** Quien produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos o transporte sustancias radioactivas, u otras similares que creen peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con reclusión mayor de 9 a 12 años e igualmente será sancionado con una multa equivalente al daño producido en el presente o futuro.

**Art. 13.- Sanciones de 3 a 9 años.-** *Será sancionado con reclusión menor ordinaria de (3) tres a (6) seis años, todo aquel que:*

*Contamine el aire mediante difusiones de gases superiores a los límites permitidos de los escapes de los vehículos;*

*La emisión de ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen y que alteren la tranquilidad ciudadana;*

*El arrojar desperdicios, desechos en aguas y quebradas;*

*El destruir la flora y fauna, recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años.*

**Art. 14.- Sanciones de 6 a 12 años.-** *La pena será de seis a doce años de reclusión menor ordinaria o extraordinaria, cuando:*

*Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;*

*El daño ocasionado tenga carácter irreversible o definitivo;*

*Cuando el daño producido afecte gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.*

**Art. 15.- Pesca y Caza.-** *Quien cace, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando medios proscritos como explosivos, sustancias venenosas y otras prohibidas en áreas protegidas, zonas de reserva o en períodos de veda, la pena será de seis (6) a nueve (9) años de reclusión menor ordinaria.*

*La pena será de prisión de seis a nueve años si el hecho se comete en período de producción de semilla o de reproducción de especies;*

*Contra especies en peligro de extinción; o,*

*El que utilice explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas será sancionado con prisión de dos a cinco años, cuando dichas sustancias hubieren causado una enfermedad o una incapacidad permanente o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano.*

**Art. 16.- De la destrucción, quema, tala de bosques y espacios verdes.-** *El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones, vegetales, naturales o cultivadas o haya incendiado haciendas, sembrados u otros plantíos y espacios verdes será sancionado con reclusión menor de tres (3) a seis (6).*

a) *Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático; o,*

b) *El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.*

*Art. 17.- Será sancionado con prisión de uno a 6 años, funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita que se destine las tierras reservadas como de protección ecológica a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de construcción, es decir cuyo uso sea distinto al que legalmente le corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.*

*Art. 18.- Reclusión mayor.- Las penas serán de reclusión mayor de 8 años si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona*

*Art. 19.- Atribución del Juez Penal.- El juez penal podrá ordenar de oficio, la suspensión inmediata de la actividad contaminante o dañosa, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.*

## **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**PRIMERA:** La persona jurídica constituida dolosamente para cometer delitos en contra del Medio Ambiente será disuelta y sus bienes decomisados, los que serán destinados a pagar indemnizaciones pecuniarias.

**SEGUNDA:** Los delitos en contra del medio ambiente son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena.

**ARTICULO FINAL:** La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

## BIBLIOGRAFIA

1. Aciarri, Hugo A. y Castellano, Andrea (1996). *“Recursos naturales, ambiente y externalidades, Análisis jurídico de un concepto económico”*. Editores J.A.
2. Agoglia María M; Boragina Juan C. y Meza, Jorge A. (1993). *“El Sistema jurídico vigente para la protección del daño originado por degradación ambiental”*. Editores J.A.
3. Allaby M. (1984). *“Diccionario del Medio Ambiente”*. Editores Madrid.
4. Bacigalupo, Enrique (1982). *“La Instrumentación Técnico- Legislativa de la Protección Penal del Medio Ambiente, en separata de estudios Penales y Criminológicos”*. editores Universidad de Santiago de Compostela.
5. Bassols Coma M. (1984). *“Urbanismo y medio ambiente, en derecho y medio ambiente”*. Editores Ceotma-Mopu.
6. Bibiloni, Héctor Jorge (2005). *“El Proceso Ambiental, Objeto, Competencia, Legitimación, Prueba, Recursos”*. Editorial, LexisNexis. Argentina S.A.
7. Bueres, Alberto J. y Kemelmajer de Carlucci, Aída (1997). *“Responsabilidad civil en el tercer milenio”*. Editores Abeledo-Perrot.
8. Bustamante Alsina Jorge (1995). *“Derecho Ambiental”*, editores Abeledo- Perrot, Buenos Aires-Argentina.
9. Carmona Salgado Concepción (1997). *“Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna”*. Editorial Marcial Pons.
10. Cárdenas Carla. *“Acceso a la Justicia Ambiental”*. Imprenta CELU, ejecutado por CEDA.



11. Código Penal, Registro Oficial Suplemento 147 de 22-ene-1971, Última modificación: 15-feb-2012, (Vigente).
12. Código de Procedimiento Penal, Registro Oficial Suplemento 360 de 13-ene-2000 (Vigente)
13. Constitución de la República del Ecuador (2008), Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente.
14. *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, Aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, junio de 1992.
15. De Ángel Yagües, N. (1995). *“Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, con especial atención a la responsabilidad del daño”*. Editores Madrid.
16. De Miguel Perales, Carlos (1994). *“La responsabilidad civil por Daños al Medio Ambiente”*. Editores Madrid.
17. Flah, L. y Smayevsky, M. (1985). *“Ecología: Desarrollo sostenido y desarrollo sostenible”*. Editorial Torino.
18. Galarza Cordero, Miguel Ángel. *“Derecho y Medio Ambiente, apuntes Jurídicos”*
19. Ghersi, Carlos A. Lovece, Graciela, Weingarten Celia (2004) colaboradores: Correa, Giselle y Ghersi, Sebastián R. *“Daños al Ecosistema y al Medio Ambiente”*. Editorial Astrea.
20. Echeverría, Hugo y Suárez, Sofía. *“Manual de Capacitación en Derecho Penal Ambiental”*. Editorial María Eugenia Hidalgo,
21. Jordano Fraga, F. (1995). *“La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”*. Editorial Bosch.
22. Potes, Verónica. *“La Justicia Ambiental Derechos Deberes y Acciones Disponibles”*. Edición Adriana Lucio Paredes.

23. Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 (Vigente),
24. Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009 (Vigente)
25. López Lecube, Freeland. *“Apuntes Sobre la Política Penal Ambiental”*. Editorial Torino.
26. Morales Prats. *“La Estructura del Delito de Contaminación Ambiental”*. Editorial Astrea.
27. Mosset Iturraspe Jorge, Hutchinson, Tomás, Donna, Edgardo Alberto. *“Daño Ambiental”*. Tomo 1. Editores Rubizal – Culzoni.
28. Mosset Iturras, E. Jorge, Hutchinson, Tomás, Donna, Edgardo Alberto. *“Daño Ambiental, Tomo II”*. Editores, Rubizal – Culzoni.
29. Rodríguez Aguirre, Nelson (1998). *“Teoría y Práctica de la Investigación Científica”*. editorial Universitaria. Quito-Ecuador.
30. Ramírez Bastidas, Yesid (1998). *“El Derecho Ambiental”*, 2º Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Santa Fe De Bogotá-Colombia.
31. Sánchez Silva. *“Política Criminal y Técnica Legislativa en Materia de Delitos Contra el Medio Ambiente”*. Editorial Astrea.
32. Schunemann. *“Sobre la Dogmática y la Política Criminal del Derecho Penal del Medio Ambiente”*. Editores Rubizal.
33. Terán Lomas. *“Hacia la Tipificación del Delito Ecológico”*. Editorial Astrea.
34. Guaranda Mendoza Wilton.- *“Acciones jurídicas para establecer responsabilidades por daño ambiental en el Ecuador”*. Editor Sandra Naula Cuenca Presidenta INRE
35. Yépez Tapia, Armando.- *“La Investigación Científica en Derecho”*. Editores S.A. Pudeleco.

36. Zavala de González, Matilde (1997).- *“La responsabilidad por daños”*. Editorial Hammurabi.